

Minería

Impactos sociales y ambientales

Coordinación general: Ricardo Carrere
Edición: Hersilia Fonseca
Diseño de tapa: Flavio Pazos

© Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Secretariado Internacional
Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
tel: +598 2 413 2989, fax: +598 2 4100985
correo electrónico: wrm@wrm.org.uy
página web: <http://www.wrm.org.uy>

Oficina en Europa
1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh,
GL56 9NQ, United Kingdom
tel: +44.1608.652.893, Fax: +44.1608.652.878
correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org

Esta publicación está disponible también en inglés y francés

El contenido de esta publicación puede ser reproducido total o parcialmente sin necesidad de autorización previa. No obstante, deberá reconocerse claramente la autoría del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y comunicar al mismo cualquier tipo de reproducción. Para facilitar su acceso y uso, el libro está también disponible en formato electrónico en la sección Publicaciones de la página web del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

Publicado en marzo de 2004

ISBN: 9974-7782-5-5

La elaboración del contenido de esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de Novib (Países Bajos), de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza y del Comité Holandés para la UICN (CH-UICN/TRP).

Las opiniones vertidas, la información presentada y los términos geográficos y geopolíticos aquí utilizados son de responsabilidad exclusiva de las autoras.

n(o)vib
OXFAM NETHERLANDS

NETHERLANDS COMMITTEE FOR
IUCN
THE WORLD CONSERVATION UNION

Naturskydds
föreningen 

Impreso en I. Rosgal S.A.
Dep. Legal 330344/04

Minería

Impactos sociales y ambientales



Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

ÍNDICE

ACERCA DE ESTE LIBRO	9
-----------------------------------	---

INTRODUCCIÓN	11
---------------------------	----

LA MINERÍA: CLAVES PARA SU COMPRENSIÓN

La minería es un problema y debe ser tratada como tal	13
Para entender la minería: empezando por el principio	15
La minería, más una maldición que una bendición	17
Impactos ambientales y sociales de la minería	21
Minería con ejércitos mercenarios	25
Los impactos de la minería sobre las mujeres	28
Compañías mineras presionan sobre las áreas protegidas	31
El Banco Mundial debe dejar de promover la minería en tierras indígenas	32
La Revisión de las Industrias Extractivas exhorta a establecer límites para la financiación de actividades mineras del Banco Mundial	36

IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES

ÁFRICA

"Cuanto más se sabe sobre el oro, menos deslumbra su brillo"	38
---	----

Costa de Marfil

Costa de Marfil: FMI, cacao, café, madereo y minería	41
--	----

Ghana

Ghana: Los impactos de la minería	42
Ghana: FMI, minería y madereo	44
Ghana: El gobierno pone el último clavo en el ataúd de los bosques del país	46
Ghana: Resistencia a la fiebre del oro en las reservas forestales	49
Ghana: El Banco Mundial detrás del escenario del oro	53

Kenia

Kenia: Gobierno cuestiona proyecto canadiense de minería de titanio	56
--	----

Madagascar	
Madagascar: El FMI abre el país a la minería	58
Madagascar: Minería promovida por el FMI amenaza bosques del litoral	59
Madagascar: Proyecto minero de Rio Tinto avanza... para peor	62
República Centroafricana	
República Centroafricana: FMI, maderero y minería	65
República Democrática del Congo	
Congo, R.D.: Teléfonos celulares, destrucción de bosques y muerte	66
Senegal	
Senegal: Gobierno limita minería como forma de proteger los bosques	70
Sudáfrica	
Sudáfrica: Las minas se alimentan de los bosques	71
Tanzania	
Tanzania: La minería del oro, otro problema para el Lago Victoria	75
Tanzania: Pérdida de biodiversidad promovida por el FMI	77
Tanzania: Banco Mundial apoya saqueo minero canadiense ...	79
AMÉRICA CENTRAL	
Costa Rica	
Costa Rica: Empresa minera canadiense pretende silenciar oposición	81
Costa Rica: El pueblo dice Sí a la Vida, No a la Minería	83
Costa Rica: Resolución esperanzadora para moratoria a minería y petróleo	84
Costa Rica: Golfo de Nicoya y agua potable de la región en peligro por minería de oro	86
Honduras	
Honduras: No es oro todo lo que reluce	87
Honduras: Asesinato de periodista enfrentado a la minería	91
Jamaica	
Jamaica: Deforestación vinculada a minería, agricultura y turismo	92

Nicaragua	
Nicaragua: Minera canadiense acusada de derrame de cianuro	94
Panamá	
Panamá: Minería, bosques y derechos de los pueblos indígenas	96
AMÉRICA DEL SUR	
Argentina	
Argentina: Poblaciones y bosques amenazados por empresa minera canadiense	98
Argentina: Pequeña gran victoria contra empresa minera canadiense	101
Argentina: Ecos de plebiscito contra explotación minera canadiense	102
Argentina: Diferentes formas de lucha contra la minería	105
Bolivia	
Bolivia: Áreas protegidas a disposición de las petroleras	107
Chile	
Chile: Campaña contra proyecto canadiense de producción de aluminio	109
Colombia	
Colombia: Comunidad detiene licencia minera en reserva forestal	113
Colombia: Impactos de la explotación carbonera	116
Ecuador	
Ecuador: Cuando un pueblo dice NO a la minería	118
Guyana	
Guyana: El impacto de las transnacionales mineras sobre la gente y el ambiente	120
Perú	
Perú: Bosques y gente amenazados por empresa minera canadiense	122
Perú: Consulta popular dice NO a la minería en Tambogrande	124
Venezuela	
Venezuela: Plan de gobierno pone en peligro el bosque de Imataca	127

ASIA

Birmania

Birmania: Violaciones de derechos humanos vinculadas a inversiones extranjeras	129
Birmania: Pobreza entre rubíes, zafiros y jade	131

Filipinas

Filipinas: Avanza oposición contra refinería de níquel de Sumitomo Corp. en Palawan	133
Filipinas: Oposición a política de minería	136

India

India: Minería y plantaciones ponen Parque Nacional en riesgo	139
India: Minería en tierras ancestrales para beneficio empresarial	140
India: Las mujeres responden a minería devastadora	141

Indonesia

Indonesia: Aumenta la presión de la minería sobre los bosques	144
Indonesia: Crece la oposición a la minería en áreas protegidas	147

Laos

Laos: La Corporación Financiera Internacional apoya mina de oro australiana	150
---	-----

Tailandia

Tailandia: Comunidades étnicas envenenadas por minas de plomo letales	153
---	-----

Vietnam

Vietnam: Biodiversidad única amenazada por fábrica de cemento financiada por el Banco Mundial	158
---	-----

OCEANÍA

Papúa Nueva Guinea

Papúa Nueva Guinea: Desde Australia con cianuro	161
Papúa Nueva Guinea: El poder de las corporaciones mineras	162
Papúa Nueva Guinea: Derechos de las mujeres socavados por mina de oro de Placer Dome	164

REFERENCIAS	168
--------------------------	-----

ACERCA DE ESTE LIBRO

El presente libro recoge una selección de artículos publicados en el boletín electrónico mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) acerca del tema de la minería.

El nivel de detalle y de análisis de los artículos varía grandemente como consecuencia del carácter del boletín, que se plantea servir de herramienta, tanto a personas y organizaciones que actúan a nivel local, como a quienes se desenvuelven en el plano internacional. Sin embargo, hemos incluido la mayoría de ellos, dado que pensamos que de alguna manera todos pueden servir para la generación de conciencia en un tema como éste, que afecta a tantas personas en el mundo.

Hemos incluido las numerosas fuentes de información sobre las que se basaron los distintos artículos en las Referencias, al final del libro. Quienes tengan interés en acceder a las mismas lo pueden hacer también a través de nuestra página web, ingresando por el área "boletín" y buscando el año y mes correspondientes al artículo en cuestión.

La responsabilidad por esta publicación es compartida por el editor del boletín, Ricardo Carrere (coordinador internacional del WRM) junto al equipo editor del WRM y por las numerosas personas e instituciones que aportaron artículos o información relevante para la elaboración de artículos. La responsabilidad por los errores que puedan haberse cometido es exclusivamente del WRM.

INTRODUCCIÓN

Los impactos de la minería

La minería es una actividad que rara vez se asocia al tema de la deforestación y la degradación de los bosques. Tampoco es común que se la asocie a guerras, dictaduras y violación de derechos humanos y menos aún al agravamiento de la pobreza y la inequidad social. Por el contrario, la minería es presentada como paradigma de la riqueza (en particular cuando de oro y diamantes se trata), en tanto que en su "marketing" se esconden pudorosamente sus terribles consecuencias sociales y ambientales.

Sin embargo, la minería es responsable de los impactos arriba mencionados y de muchos otros, que la hacen una de las actividades más depredadoras del mundo. La actividad minera no sólo es insustentable en cuanto a que explota recursos no renovables, sino que además va dejando a su paso un ambiente y una sociedad destruidos, en la mayoría de los casos en forma irreversible.

Por todo lo anterior, nos pareció importante poner a disposición de la gente una herramienta para comprender mejor los distintos aspectos de la actividad minera en relación con lo social y lo ambiental, como forma de habilitar una toma de posición informada sobre esta temática, que a su vez pueda resultar en una oposición fundamentada frente a quienes la presentan como una actividad positiva para el desarrollo de los países del Sur.

Como parte de lo anterior, también entendimos que era importante mostrar una diversidad de experiencias concretas en distintos países con respecto a la explotación de una amplia gama de minerales que permitieran ver las características comunes de la actividad minera.

El resultado es el presente libro, que se divide en dos grandes secciones. En la primera se hace una descripción detallada de los distintos

aspectos de la actividad minera, incluyendo tipos de minería, actores involucrados e impactos. En el segundo capítulo se detallan impactos concretos y luchas en numerosos países de África, América Latina, Asia y Oceanía, resultantes de las acciones de distintos tipos de minería y empresas mineras.

La información contenida en ambas secciones está estrechamente relacionada, dado que la visión de conjunto aportada por la primera permite comprender mejor el detalle de las situaciones concretas, a la vez que estas últimas posibilitan una comprensión más cabal de la visión general sobre el tema.

Aspiramos a que el presente libro sirva como herramienta para apoyar las luchas locales contra la minería, para generar conciencia al respecto y para fortalecer las campañas contra una actividad como ésta, que resulta en la destrucción y degradación de amplias áreas boscosas y de los medios de vida y culturas locales.

Ricardo Carrere

Coordinador Internacional del WRM

LA MINERÍA: CLAVES PARA SU COMPRENSIÓN

La minería es un problema y debe ser tratada como tal

El concepto de “sustentabilidad” está siendo vaciado cada vez más de contenido, especialmente a manos de quienes realizan actividades básicamente insustentables. Entre ellas es necesario mencionar una actividad que ya por definición no es sustentable: la minería. Se puede argumentar que la minería es necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables.

A pesar de eso, las corporaciones mineras están haciendo grandes esfuerzos para convencer a la opinión pública de que son “sustentables”. Con ese objetivo en mente, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por su sigla en inglés) –representante de varias de las corporaciones más destructivas del mundo– contrató al Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo –que se autodescribe como una organización sin fines de lucro– para llevar a cabo “un proyecto independiente de investigación y consulta de dos años con el objetivo de comprender cómo el sector de minería y minerales puede contribuir a la transición mundial hacia un desarrollo sustentable”. El proyecto incluye, claro está, el necesario adjetivo de “sustentable”: el “Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable”.

El proyecto tenía, por supuesto, un objetivo político y fue parte del lobby de las corporaciones para la inclusión del absurdo concepto de

“minería sustentable” en el informe oficial de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS). A pesar de la manifiesta oposición expresada por los activistas contrarios a la minería durante el proceso de la CMDS, las corporaciones mineras lograron su objetivo, y la minería fue declarada oficialmente –como por arte de magia– una actividad “sustentable”.

Sin embargo, en el mundo real, decir que la minería es insustentable es en realidad quedarse muy cortos. Sus impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente como insustentable. La minería es responsable por la pérdida del sustento de millones de personas; está en las raíces de numerosas guerras civiles, dictaduras e intervenciones armadas extranjeras; es responsable por la violación generalizada de derechos humanos; es responsable por el envenenamiento de personas y del medio ambiente; es una de las causas directas y subyacentes más importantes de la deforestación y la degradación de los bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la minería se describen en detalle en los artículos siguientes.

Es verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de esas actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto significa sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones mineras se controlarán a sí mismas es más que ingenuo: es absurdo. Incluso el control de los propios gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe empoderar a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control.

Pero ante todo, los pueblos que viven en las regiones ricas en minerales deben tener la capacidad de tomar decisiones plenamente infor-

madras para decidir si permiten o no actividades de minería en sus territorios. Y en caso de aceptar, deben tener el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma de asegurar la conservación ambiental y la justicia social.

A pesar de sus pretensiones de “sustentabilidad”, la minería es un problema grave y como tal debe ser tratado. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Para entender la minería: empezando por el principio

La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los minerales pueden ser metales (como oro y cobre) y no metales (como carbón, amianto, grava). Los metales están mezclados con muchos otros elementos, pero ocasionalmente se encuentran grandes cantidades de ciertos metales concentrados en un área relativamente pequeña —el yacimiento— de donde se puede extraer uno o más metales con beneficio económico. Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos.

Las minas pueden ser de varios tamaños, desde operaciones pequeñas que producen menos de 100 toneladas al día, hasta minas grandes que mueven cientos de miles de toneladas. El método de explotación utilizado para extraer determinado depósito de mineral depende del tipo, tamaño y profundidad del yacimiento mineral y de los aspectos económico financieros de dicho emprendimiento.

Hasta mediados del siglo veinte, la minería subterránea era el método más común de extraer yacimientos masivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances en la tecnología y el desarrollo de razardoras, niveladoras, palas y camiones más grandes y poderosos permitieron el movimiento de enormes cantidades de materiales, que promovieron la explotación en minas a cielo abierto. No obstante, siguen existiendo minas subterráneas, como las de oro de Witwatersrand, en Sudáfrica —las más profundas del mundo—, o las de El Teniente, en Chile —la mina subterránea más grande del mundo—, u Olympic Dam,

en Australia. A la mina subterránea se accede por un pozo o una rampa que desemboca en las galerías y niveles de producción, los cuales están conectados entre sí por pozos inclinados que sirven para acarreo de mineral y movimiento del personal. Se utilizan perforadoras y explosivos para romper la mena —la mezcla de minerales de la que se puede extraer uno o más metales— bajo tierra. Generalmente, este tipo de minería tiene menor impacto ambiental que las minas a cielo abierto. La perturbación en la superficie de la tierra es menor, pero puede igualmente tener efectos sobre el agua al contaminarla con ácidos y metales e interceptar acuíferos. Los trabajadores están expuestos a situaciones aún más peligrosas que los que trabajan en minas a cielo abierto, por el riesgo de hundimientos, mala calidad del aire y explosiones subterráneas. Las compañías han abandonado progresivamente este método por un problema de rentabilidad, si bien minerales tales como carbón, níquel, zinc o plomo siguen siendo en general extraídos con métodos de minería subterránea.

Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura), las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

La apariencia de las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) es la de terrazas dispuestas en grandes fosas anchas y profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. La operación suele comenzar con la remoción de vegetación y suelo, luego se dinamita extensamente y se remueven la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Las nuevas tecnologías, que permiten mejores rendimientos en la velocidad de extracción y procesamiento del mineral, acrecientan los problemas ambientales, pues los materiales de desecho no revierten normalmente en la recuperación del lugar.

Las canteras son minas de superficie muy semejantes a las minas a cielo abierto, pues el resultado final de su explotación es también un paisaje desolado de profundas zanjas entre anchos escalones. La agresión al medio ambiente que por sí misma genera este tipo de minería se agrava por su proximidad a las zonas urbanas, pues se busca reducir los gastos de transporte para lograr mayor rentabilidad. Esa proximidad produce nuevos problemas ambientales, pues las excavaciones realizadas, que ya carecen de cubierta vegetal, terminan convirtiéndose en vertederos urbanos, además de afectar las aguas superficiales y subterráneas próximas a la explotación.

En la minería por lixiviación se utilizan productos químicos (por ejemplo ácido sulfúrico en el caso del cobre o una solución de cianuro y sodio en el caso del oro) para disolver (lixiviar) los metales en cuestión del mineral que los contiene, obteniendo una muy alta tasa de recuperación. Puede darse en la variante de lixiviación in situ (se perfora con taladros la roca intacta y se agrega el solvente) o la muy frecuente lixiviación de cúmulos de mineral triturado. Las soluciones químicas utilizadas no sólo liberan los metales deseados sino que también movilizan otros metales pesados (como el cadmio), por lo que las aguas superficiales y subterráneas suelen contaminarse.

Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

La minería, más una maldición que una bendición

Actualmente existe evidencia irrefutable de que la minería limita gravemente la capacidad de una nación de sustentar el crecimiento económico (incluso dentro de las definiciones estrechas a las que en general adhieren los estados nacionales). Esto resulta un descubrimiento “sorprendente” para quienes piensan que las “riquezas” contenidas en el suelo se traducen infaliblemente en dinero en el banco. Pero para

quienes adoptan un análisis anticolonialista de la acumulación de capital, la razón fundamental para la discrepancia no es difícil de descubrir. Zaire, Bolivia y Sierra Leone no son simplemente “pobres”; han sido empobrecidos sin piedad durante cientos de años. Gran parte de la “deuda externa” demoledora que arrastran los países “más pobres” del mundo en realidad supuestamente se adeuda por capital que nunca fue invertido en el auto-desarrollo de los pueblos. En su lugar, se invirtió en construir minas, represas, centrales eléctricas y plantas de procesamiento para transformar capital “natural” —no sólo hierro, cobre, bauxita, diamantes, sino también agua, tierra y aire— en valor exportable.

Los pueblos han extraído minerales de la tierra desde tiempos muy antiguos. Los babilonios, asirios y bizantinos tenían minas de cobre y plomo hace miles de años en lo que hoy es el sur de Jordania por ejemplo. Pero desde la revolución industrial, los minerales se han extraído y utilizado en cantidades mucho mayores. En tiempos recientes, esta tendencia se aceleró en forma importante: en 1999, cerca de 9,6 mil millones de toneladas de minerales comercializables fueron extraídos del suelo, casi dos veces más que en 1970. Esta cifra se refiere a los minerales que llegan finalmente al mercado, pero no incluye los residuos generados para producir esos minerales, la parte no utilizada de la mena (la roca o tierra que contiene los minerales), o la tierra removida para alcanzar la mena. Si esas categorías se incluyeran en la cantidad total de materiales extraídos cada año, la cifra aumentaría considerablemente.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero. En un cálculo per capita, los distintos niveles de consumo son especialmente marcados: el estadounidense promedio utiliza 22 kilogramos de aluminio al año, el ciudadano promedio de la India usa 2 kilogramos y el africano promedio apenas 0,7 kilogramos.

Sin embargo, las comunidades locales y los pueblos tribales de los países ricos en recursos son los más afectados por los efectos perjudi-

ciales –ambientales, culturales, sociales y de salud– de las actividades de exploración y explotación minera. Urgidos por las políticas macroeconómicas impulsadas por las instituciones comerciales y crediticias internacionales, muchos países empobrecidos se aferran a la minería como actividad “básica” para generar las tan necesarias divisas extranjeras. Hay casos en que como mínimo el 40% de las exportaciones depende de un solo producto mineral, como el caso del cobre en Zambia, los diamantes en Botswana, la República Centroafricana, Gambia, Liberia y Sierra Leona, el aluminio en Guinea y Suriname, el mineral de hierro en Mauritania. Si bien estos datos son relativamente antiguos (de 1994), ilustran una tendencia que todavía se mantiene. Doce de los veinticinco Estados más dependientes de minerales del mundo (la mayoría de ellos concentrados en el África subsahariana) fueron clasificados por el Banco Mundial como “países pobres altamente endeudados”, la categoría de países más complicada.

El proceso impuesto de desregulación y liberalización del mercado ha llevado a la privatización y exención de impuestos que ha beneficiado a las corporaciones mineras extranjeras. Por otro lado, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas cuanto mayor sea la dependencia de la exportación de minerales de los países del Sur, su estándar de vida será probablemente peor. Niveles más altos de dependencia de los minerales se correlacionan estrechamente con mayores niveles de pobreza y tasas de desnutrición y mortalidad infantil. También se asocian con desigualdad de ingresos, bajos niveles de gasto en atención de salud, bajas tasas de inscripción en escuelas primarias y secundarias, y bajas tasas de alfabetización de adultos, así como una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas. Estudios académicos recientes revelan que los niveles de vida generales en los países dependientes de minerales tienden a sufrir de tasas inusualmente altas de corrupción, gobiernos autoritarios, ineficacia gubernamental, gastos militares y guerras civiles.

Con excepción del mercurio, amianto y plomo –que están especialmente en la mira debido a su toxicidad ambiental– la producción de los principales metales ha aumentado en una forma exponencial que no tiene ninguna relación con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, pero tiene mucho que ver con la pura e insaciable sed de lucro de las corporaciones. Ha habido mucho movimiento dentro de la industria de la

minería en los últimos años. Las compañías mineras han racionalizado sus operaciones y se han embarcado en fusiones y adquisiciones para mantener, consolidar, fortalecer y ampliar el espectro de actividad mundial de las transnacionales de la minería. Ha habido una concentración creciente de la inversión en la búsqueda de oro y diamantes, que son atractivos más por su rentabilidad que por su utilidad.

Aunque el escenario minero internacional incluye un número relativamente grande de empresas, sólo unas pocas —que además se vuelven crecientemente más grandes a través de fusiones— parecen dominar el escenario. La mayoría son originarias de un puñado de países, entre los que los más importantes son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Entre las empresas más conocidas de esos países se incluyen Rio Tinto, Barrick Gold Corporation, Freeport MacMoran, BHP-Billiton, Newmont, Placer Dome y muchas otras. Sin embargo, otros actores internacionalmente más pequeños pueden ser extremadamente importantes a nivel local y también aquí se incluyen ejemplos. Independientemente de su importancia relativa a nivel internacional, todas tienen dos cosas en común: son extremadamente rentables y extremadamente perjudiciales.

Por otra parte, la minería puede ser muy lucrativa para las compañías, pero no para las comunidades locales de las áreas donde los recursos minerales son importantes. A medida que se explotan los depósitos minerales de más fácil acceso, el hambre por nuevas fuentes baratas impulsa a la industria a intensificar cada vez más la exploración en territorios indígenas. Comunidades que antes dependían de los recursos naturales, sufren pérdidas inmediatas como resultado de las actividades de minería en gran escala. Sus formas de sustento se ven socavadas, sus organizaciones sociales perturbadas y sus culturas transformadas. Las compensaciones en efectivo, si se pagan, no puede reparar estas pérdidas y la herencia oscura de las minas continúa incluso después de que la mina es abandonada. Los puestos de trabajo y sustentos perdidos en la agricultura, pesca y la minería en pequeña escala exceden por mucho los que ofrece la minería. Los pobladores locales a menudo carecen de las habilidades requeridas para poder beneficiarse de algo que no sean los trabajos peor pagos y disponibles a más corto plazo.

A pesar de la promesa de riqueza que supone el desarrollo minero, en realidad la presencia de la riqueza minera puede incluso retrasar el desarrollo nacional y local. Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales. De hecho, la mejor base de recursos de las economías minerales ha sido más una maldición que una bendición”.

Es así que la promoción de la minería en gran escala se atrinchera en políticas, instituciones y mentalidades que visualizan el “desarrollo” como una iniciativa de arriba hacia abajo a imponer sobre las comunidades locales y el medio ambiente —la propia antítesis de un enfoque ambientalmente adecuado centrado en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y las generaciones futuras. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Impactos ambientales y sociales de la minería

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo.

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas serían: prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación de las minas, tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el objetivo de obtener productos comercializables.

En la fase de exploración, algunas de las actividades con impacto ambiental son la preparación de los caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, tomas de muestras.

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en función del método utilizado. En las zonas de bosque, la sola deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación —más vasta en los casos de minas de cielo abierto— tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. La deforestación no sólo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas (muchas llevadas a la extinción), sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. La deforestación de los bosques primarios causa una rápida y fluida escoorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, agravando las crecidas en los períodos de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hace en presencia de las masas boscosas.

Además del área perturbada por la socavación, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la erosión y colmatación (sedimentación del lecho de los cursos de agua) consiguientes, se ve agravado por los montones de residuos de roca sin valor económico (a los que se llama material estéril), que suelen formar enormes montañas a veces más grandes que la superficie sacrificada para la socavación.

El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de mena —especialmente las sulfúricas— como resultado de la actividad minera, los que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Se genera así un vertido autoperepetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o incluso miles de años. Por otro lado, las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los residuos, se diseminan con el viento depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente en los tejidos de organismos vivos como los peces.

Productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de procesamiento de los metales, como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, si bien supuestamente están controlados, es moneda corriente que terminen, de una forma u otra, en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efec-

tos colaterales muy graves que afectan a los ecosistemas circundantes –de manera especialmente agravada a los bosques– y a las personas.

La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles. Por otro lado, suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre –responsable de la lluvia ácida– por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano –dos de los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático– por la quema de combustibles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás de los embalses hidroeléctricos destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y las refinerías.

La actividad minera, además, consume enormes cantidades de madera para la construcción –en el caso de las minas subterráneas–, y también como fuente de energía en el caso de las minas con hornos de fundición a base de carbón vegetal. También, cuando se realiza en zonas remotas, implica grandes obras de infraestructura, como carreteras –que abren el acceso a los bosques–, puertos, poblados mineros, desviaciones de ríos, construcción de embalses y centrales generadoras de energía.

Tanto el ruido ensordecedor de la maquinaria utilizada en la minería como las voladuras no son un impacto menor, ya que crean condiciones que pueden resultar insoportables para las poblaciones locales y la fauna de los bosques.

Se aduce que la minería es vital para la industrialización, porque aporta materias primas y fuentes de energía. No obstante, la desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la justificación social del sector para sus actividades. En 2001, el 82% del oro refinado tuvo como destino el mercado de la joyería, y vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía Pegasus Gold

hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio seguirá desfilando ácido en la cuenca de la región.

Las distintas “fiebres del oro” a lo largo de la historia han llevado muerte y devastación a las poblaciones locales. Desde los Sioux de Black Hills a los aborígenes de Bendigo en Australia, la historia del oro está manchada de sangre. Y hoy, los Yanomami y los Macuxi de la Amazonia, los Galamsey de África Occidental y los Igorot de Filipinas, corren el mismo peligro.

La minería llega a un lugar con su promesa de generación de riquezas y empleo, pero se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden dar testimonio de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de las tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras. Todo eso aparte de las condiciones laborales peligrosas e insalubres de ese tipo de actividad.

Puede aducirse que muchas de las comunidades afectadas han dado su consentimiento. Pero difícilmente puede hablarse de consentimiento genuino, con información previa, ya que no tienen la oportunidad de saber cabalmente lo que les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la línea punteada al pie de un contrato. Es por eso que se reclaman mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y locales participar efectivamente en los procesos decisorios, así como normas que les permitan rechazar ese tipo de emprendimientos en sus territorios.

Si hay quienes de todas maneras desean usar oro, o bien utilizarlo para las arreglos odontológicos o en los microcircuitos de las computadoras y teléfonos celulares, está bien. Pero, como alguien propone: saquémoslo de fuentes recicladas. De las 125.000 toneladas de oro extraídas de la tierra, más de 35.000 toneladas yacen en las bóvedas de los bancos centrales. Es más, la Reserva Federal de Estados Uni-

dos posee 8.145 toneladas de oro, aproximadamente el 6% de todo el oro extraído. Entonces, ¡qué mejor que reciclarlo de las bóvedas de los bancos! (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Minería con ejércitos mercenarios

Un número cada vez mayor de nuevas operaciones de seguridad de las corporaciones en todo el mundo vinculan a ex oficiales de inteligencia, de ejércitos y veteranos de escuadrones de la muerte. Van al combate pagados por nuevos jefes: las industrias mineras.

El advenimiento de nuevas tecnologías como el mapeo por satélite asistido por computadora y el uso de cianuro para extraer oro han convertido operaciones antes marginales en potenciales fábricas de hacer dinero (para las transnacionales). El colapso de la Unión Soviética y la firma de tratados de libre comercio en todo el mundo ha abierto a países como Angola, que antes estaban fuera de los límites de las multinacionales occidentales. Y por último, la disponibilidad de capital y la mitigación del riesgo han sido asegurados por instituciones financieras internacionales, como las agencias bilaterales y multilaterales incluyendo al Banco Mundial y el Banco de Importación-Exportación de EE.UU. Están ansiosos por proporcionar dinero y seguro contra riesgo político a proyectos privados de extracción de recursos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Hace algunos años, Tim Spicer, ex miembro de los Servicios Aéreos Especiales británicos (SAS, por su sigla en inglés), tuvo una reunión con dos altos funcionarios gubernamentales en relación a la compra de una mina de cobre de propiedad de Rio Tinto, el gigante minero anglo-australiano, en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Menos de un mes después era conducido a un tribunal de Papúa Nueva Guinea por haber sido contratado por el gobierno para proporcionar un ejército mercenario para tomar la mina de cobre. Su misión había sido vencer a un pequeño grupo de luchadores por la libertad que habían cerrado la mina de cobre durante casi diez años. Cuando la noticia del contrato de Spicer se hizo pública, ciudadanos comunes y oficiales del ejército local tomaron la ley en sus propias manos. Los disturbios produjeron el cierre de tiendas, bancos y escuelas, y el bloqueo de las principales carreteras, hasta que camiones de policías

armados con rifles automáticos finalmente dispersaron a la multitud enfurecida con gas lacrimógeno y balas de goma.

Mejor suerte tuvieron en Colombia dos ex oficiales del SAS. Sus cajas negras llenas de armas y municiones pasaron sin problemas por el punto de control a cargo de un colega, Bill Nixon, ex oficial de inteligencia británico, cuyo nuevo trabajo era brindar seguridad en el aeropuerto privado de propiedad de British Petroleum (BP). Los tres mercenarios habían sido contratados por BP para ayudar a entrenar a la policía colombiana —famosa por sus abusos contra los derechos humanos— para proteger la plataforma petrolífera de Dele-B. La compañía petrolera interpretó las consideraciones de seguridad en forma amplia. Según un informe encargado por el gobierno colombiano, BP colaboró con soldados locales involucrados en secuestros, tortura y asesinatos. El documento no publicado alega que la compañía petrolera recopiló información —incluyendo fotos y filmaciones de video de las protestas de los pobladores locales contra las actividades petroleras— y pasó la información a los militares colombianos que después arrestaron o secuestraron a los manifestantes como “subversivos”.

La mayoría de los hombres que gestionan las operaciones con mercenarios tienden a operar en segundo plano, empleando a otros hombres —asesinos a sueldo locales o importados— en las operaciones de campo. Tanto el contrato de Colombia como el de Papúa Nueva Guinea fueron arreglados en oficinas de Londres, administradas por otros ex funcionarios de SAS como Anthony Buckingham, uno de los operadores más oscuros del negocio de la seguridad, que administra un miniconglomerado de compañías mineras, petroleras y mercenarias desde sus discretas oficinas londinenses.

El ejército mercenario más infame contratado por los nuevos colonias es Executive Outcomes (EO) que suministró los soldados de alquiler a Buckingham y Spicer en Papúa Nueva Guinea. La campaña más famosa de EO, sin embargo, fue en Sierra Leona en mayo de 1996. Los mercenarios de EO llegaron a Sierra Leona mejor equipados que la mayoría de los ejércitos de África, con helicópteros de ataque rusos, un sistema de interceptación de radio, dos Boeing 727 para transportar tropas y suministros, una aeronave Andover para evacuación de víctimas, y bombas aire-combustible (*fuel air explosives*,

conocidas como bombas FAE). Utilizadas con resultados devastadores por EE.UU. en la guerra del Golfo, las bombas FAE –cuyo poder se ubica un escalón por debajo de las armas nucleares– absorben el oxígeno después de la detonación, matando todo tipo de vida en un kilómetro y medio a la redonda. La operación dejó a EO un lucrativo contrato de seguridad financiado con las ganancias obtenidas de las minas de diamantes.

Pero no son de ninguna manera los únicos actores principales. Existen al menos un par de docenas más que trabajan para la industria minera suministrando servicios de “seguridad” a las compañías y gobiernos de Colombia, Guyana y Venezuela en América del Sur; Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en África occidental; Angola y Namibia en África del Sur; R.D. del Congo, en África central; Sudán y Uganda en el este de África; Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el Pacífico; y Kazajstán en Asia central. Muchos de estos reclutas son veteranos del Batallón 32 de Sudáfrica y de la Oficina de Cooperación Civil (Civil Cooperation Bureau) que fueron las unidades más notorias de las fuerzas del antiguo *apartheid* hasta que las elecciones llevaron un gobierno multirracial al poder hace pocos años.

Mientras tanto, la compañía minera Rio Tinto con base en el Reino Unido ha hecho esfuerzos en Indonesia para convencer al mundo de su compromiso con los derechos humanos. Durante los últimos dos años ha contribuido con fondos para el Premio de Derechos Humanos Yap Thiam Hien. Este año el premio fue ganado por el defensor de los derechos humanos y poeta Wiji Thukul, que está desaparecido desde 1996. En diciembre la familia rechazó el premio argumentando que Rio Tinto estaba involucrada en varias violaciones a los derechos humanos en sus operaciones mineras en Indonesia y que en 1992 había sido responsable del arresto de manifestantes que exigían el pago de una compensación adecuada por el uso de sus tierras.

En una declaración en apoyo a la postura de la familia, las ONGs indonesias JATAM, WALHI y TATR enumeran algunas de las violaciones de derechos humanos en las que ha estado involucrada Rio Tinto, incluyendo las cometidas en la mina PT KEM en Kalimantan del este, investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia en 1999 y 2000. Las denuncias incluyen casos de abuso sexual y viola-

ción de dieciséis mujeres y niñas entre nueve y diecinueve años, el arresto de quince manifestantes en 1992 y la posterior muerte de uno de ellos y el desalojo forzoso de los mineros tradicionales realizado por los militares indonesios y la quema de cientos de casas entre 1982 y 1991. La declaración también describe la participación de Rio Tinto en distintos casos a través de sus acciones en la mina de cobre y oro Freeport Indonesia en Papúa occidental (Rio Tinto tiene una participación del 15%), la mina Kaltim Prima Coal (co-propiedad con BP), la mina de oro Lihir en Papúa Nueva Guinea y la mina Panguna en Bougainville. La declaración exhorta a los ejecutores del Programa del Premio Yap Thiam Hien a no seguir aceptando financiación de violadores de los derechos humanos. “No se debe dar a los violadores de los derechos humanos la oportunidad de que se libren de responsabilidad por sus acciones...” (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Los impactos de la minería sobre las mujeres

Si bien la minería produce impactos negativos sobre todos quienes viven en las comunidades mineras en general y sobre quienes son afectados por las operaciones de minería, existen impactos diferenciados y cargas agregadas que afectan a las mujeres.

Es posible empezar a comprender los diferentes impactos al abordar situaciones concretas, como por ejemplo la sufrida por una mujer Dayak afectada por una mina de propiedad de la compañía PT-IMK en Indonesia.

“La Sra. Satar poseía una parcela de entre 10 a 15 hectáreas en las tierras tradicionales de la comunidad. En esta tierra podía cosechar lo suficiente para un año, e incluso a veces más. Con la introducción de la minería en su comunidad, perdió toda su parcela salvo una hectárea a manos de la compañía minera. En consecuencia, tuvo que comprar aproximadamente tres sacos de arroz por mes a un costo de 39.000 rupias por saco (precio de enero de 1998). Además, las operaciones de extracción de la compañía contaminaron el río, que ya no pudo ser utilizado para satisfacer las necesidades familiares, y ya no produjo pescado. Antes la Sra. Satar cocinaba pescado fresco cada día para su familia. Ahora a raíz de la contaminación, tiene que comprar pescado salado. Si cuenta con dinero suficiente, compra dos quilos de

pescado salado al mes a un costo de 15.000 rupias el kilo. Para obtener agua para bañarse y para beber, debe hacer un largo camino hasta una fuente de agua que no esté afectada por los desechos de la compañía. Su sustento se ha visto todavía más deteriorado por la pérdida de sus dos búfalos de agua, a los que encontró muertos en la orilla del río contaminado”.

También es necesario comprender que las compañías habitualmente sólo entran en negociaciones con hombres, y excluyen a las mujeres de los pagos de compensaciones o *royalties*. Incluso tienen poco o ningún control sobre los beneficios de la explotación minera, ni acceden a ellos, en particular al dinero o al empleo. De esta forma, se las priva de sus medios de ocupación tradicionales y se vuelven cada vez más dependientes de los hombres, que tienen más probabilidades de acceder a esos beneficios y controlarlos.

La minería en gran escala supone la sustitución de las economías de subsistencia que han alimentado a generaciones de comunidades y pueblos indígenas, por una economía basada en el dinero en efectivo. La nueva economía basada en el mercado implica una erosión importante o incluso la destrucción de los valores y costumbres tradicionales que han sido esenciales en el sostenimiento de la solidaridad y la unidad de familias, clanes, tribus y comunidades. En este proceso, la mujer es cada vez más marginada, ya que sus roles tradicionales como recolectora de alimentos, suministradora de agua, cuidadora y nutridora resultan muy afectados. La visibilidad económica depende del trabajo en la esfera pública y a quien trabaja en tareas no remuneradas en el hogar o en la comunidad se lo categoriza como “improductivo, desocupado y económicamente inactivo”.

Si bien tanto hombres como mujeres estaban antes a cargo de las actividades agrícolas, actualmente los hombres deben salir a trabajar fuera del hogar por un salario, aumentando de esa forma la carga de trabajo y las responsabilidades de las mujeres, lo que produce aún más estrés y tensiones. Además, la destrucción ambiental causada por la minería en gran escala también reduce la productividad de los campos y envenena los alimentos silvestres, la vida marina y los animales. Muchas mujeres se ven forzadas a ingresar en la economía informal para encontrar fuentes adicionales de ingreso.

Al mismo tiempo que la minería en gran escala brinda limitadas oportunidades de empleo para la mujer, el sector en pequeña escala absorbe a las mujeres como trabajadoras contratadas o mediante trabajo forzoso en condiciones de explotación severas. En India por ejemplo, los salarios de las mujeres son siempre más bajos que los de los hombres, no hay normas de seguridad, no existe licencia paga ni siquiera durante el embarazo o el nacimiento, no se proporciona equipo de trabajo, y no hay baños ni infraestructura disponible. Las mujeres desempleadas que viven en las comunidades mineras se ganan su sustento a duras penas hurgando en la escoria y los vertederos de desechos, a menudo en forma ilegal, y sufren el acoso permanente de los guardias de la compañía, la mafia local y la policía. Están expuestas a la explotación física y sexual de los dueños de las minas, contratistas y mineros, y están a merced de los comerciantes locales cuando venden sus minerales. Además, las mujeres trabajan con sustancias tóxicas y peligrosas y sufren de enfermedades laborales graves entre las que se incluyen problemas respiratorios y reproductivos, silicosis, tuberculosis, leucemia y artritis.

El abuso del alcohol, la dependencia de las drogas, la prostitución, las apuestas, el incesto y la infidelidad aumentan en muchas comunidades mineras. Todo esto ha empeorado los casos de violencia familiar contra las mujeres, la discriminación activa y a menudo brutal en el lugar de trabajo, que es frecuentemente sancionada o ignorada por las instituciones judiciales y políticas. Incluso las organizaciones de trabajadores dirigidas por hombres no denuncian las violaciones contra los derechos humanos cometidas contra las mujeres. La discusión entre esas organizaciones y las compañías mineras se orienta hacia temas económicos como aumentos de sueldo, subsidios, etc.

En resumen, la minería, sea en pequeña o en gran escala, está produciendo un gran número de impactos específicos sobre las mujeres, que están perdiendo en casi todos los aspectos relacionados con el desarrollo de esa actividad. La riqueza generada por la minería hunde todavía más a las mujeres en la pobreza, el desposeimiento y la exclusión social. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Compañías mineras presionan sobre las áreas protegidas

Las compañías mineras se vieron conmocionadas por una “Recomendación” aprobada por el Congreso Mundial de la Conservación, realizado en Amman en 2002, que exigió terminar con la extracción petrolera, minera y de gas en todas las áreas protegidas comprendidas en las categorías I, II, III y IV de la UICN (“reserva natural estricta”, “áreas silvestres”, “parque nacional”, “monumento natural” y “áreas de manejo de hábitats”). Muchas ONGs se también se sorprendieron ante la reacción de las industrias mineras: ¿de qué pensaban que había que proteger a esas áreas si no de actividades no sustentables como la minería? Por cierto, algunas fueron más allá: ¿por qué la decisión de Amman permite explícitamente la minería en las áreas protegidas de las categorías V y VI de la UICN –“paisajes terrestres y marítimos manejados” y “áreas protegidas con recursos manejados”?

La polémica sobre la relación entre las industrias de extracción y las áreas protegidas no ha dejado de sonar desde esa fecha. A fines de junio de 2002, miembros de Consejo de la UICN y miembros en general pusieron el grito en el cielo cuando el Secretariado de la UICN anunció, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que estaba trabajando en pro de una nueva “sociedad” con las industrias extractivas. Como resultado del escándalo se suavizó el lenguaje. Ahora la UICN dice estar comprometida en un “diálogo” con las industrias, pero independientemente del término que se use, la realidad sigue siendo prácticamente la misma.

La “sociedad” o “diálogo” forma parte de una amplia estrategia de las industrias extractivas para rehabilitar su imagen sucia, manchada por un reguero de pérdidas de petróleo, restos de barcos petroleros, roturas de diques de los estanques de desechos de las minas, derrames de cianuro y mercurio, paisajes arruinados, sistemas hídricos saqueados, vertederos de desechos tóxicos, ecosistemas contaminados, violación de derechos humanos y destrucción de formas de sustento. El nuevo discurso de los promotores de relaciones públicas y expertos mediáticos (los llamados “spin doctors”) de las industrias de extracción habla de “minería sustentable”, “restauración de paisajes” y “responsabilidad empresarial”; la Iniciativa Mundial sobre Minería es una parte de esta estrategia, otra es el vínculo con la UICN.

El hecho es que las industrias extractivas necesitan habilitación para obtener acceso a las reservas de minerales, petróleo y gas donde sea que se encuentren en cantidades lucrativas: poner las categorías I a IV de la UICN fuera de su alcance las lesiona. Ahora se preguntan quién decide exactamente cómo se aplican esas categorías y qué situación legal tienen. Buscando ayuda para dar respuesta a estas interrogantes, varias compañías, entre las que se incluyen British Petroleum plc, Shell plc, y el Consejo Internacional de Minería y Metales, coauspician un estudio financiado conjuntamente con la UICN, WWF y Conservation International, que presentará un informe –‘Hablando un lenguaje común’ (‘Speaking a Common Language’)– al Congreso Mundial de Parques de setiembre de 2003. Pero la experiencia en su conjunto ha sido un golpe duro para aquellos que confiaron en el sistema de áreas protegidas. Si el sistema ahora va a ser desvirtuado por las industrias de extracción, necesitará del control vigilante de la sociedad civil y de medidas que aseguren que la UICN no vuelva a traspasar los límites. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

El Banco Mundial debe dejar de promover la minería en tierras indígenas

Un nuevo informe de Forest Peoples Programme y la Fundación Teb-Tebba exhorta al Banco Mundial a dejar de prestar apoyo a la extracción de petróleo, gas y minerales. El informe *‘Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank’* fue compilado como contribución a la *Revisión de las Industrias Extractivas* (EIR, por su sigla en inglés) del Banco Mundial.

El proceso RIE ha sido criticado por muchos pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales por estar excesivamente controlado por el Banco Mundial. Resta por ver si contribuciones como ésta serán tomadas en serio por la revisión y, si así fuera, si las mismas serán tenidas en cuenta por el propio Banco Mundial. El estudio se apoya en una extensa revisión bibliográfica y análisis jurídico, siete estudios de caso encargados especialmente y realizados por pueblos indígenas sobre sus experiencias con el Banco Mundial y las industrias extractivas, y un taller de dos días en el cual se presentaron y discutieron las distintas contribuciones mencionadas.

El informe destaca que a pesar de avances importantes en las leyes sobre derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las políticas del Banco Mundial hacen poca mención a los derechos humanos y el Banco continúa afirmando que su convenio constitutivo le impide abordar temas de derechos humanos. Argumenta que no puede exigir a sus prestatarios o clientes ni siquiera que cumplan con los convenios sobre derechos humanos de los que son parte. Las políticas de “salvaguarda” del Banco sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios sólo apuntan a mitigar los impactos de programas de desarrollo destructivos. El estudio muestra cómo incluso estas normas débiles son ignoradas sistemáticamente. Una revisión reciente del propio Banco Mundial revela que por lo menos más de la tercera parte de los proyectos del Banco Mundial que producen impactos sobre pueblos indígenas, no han aplicado la política de salvaguarda de ninguna manera. Incluso en los proyectos en los que sí se aplicó esta política, sólo el 14% tenía el “Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas” exigido, y en ese caso solamente en los papeles.

El estudio muestra cómo, al promover el desarrollo nacional a través de la liberalización del comercio, el ajuste estructural y la promoción de la inversión extranjera directa, el Banco Mundial ha aconsejado sistemáticamente a los países que reelaboren sus códigos nacionales de minería para facilitar la actividad minera en gran escala de las compañías extranjeras. Estos códigos de minería revisados han sido aprobados a la fuerza, sin la participación de los pueblos indígenas y sin tomar en cuenta los intereses y derechos de estos pueblos. Los estudios de caso de Colombia y Filipinas muestran cómo los códigos de minería revisados han intensificado la presión sobre las tierras indígenas y han debilitado o anulado las protecciones legales con las que contaban previamente los pueblos indígenas. En Colombia, las reservas de petróleo y gas son explotadas por compañías que no rinden cuentas de sus actividades, disfrutan de impunidad legal al tiempo que violan sistemáticamente las leyes nacionales y aplican medidas gravemente represivas para doblegar la resistencia local. En Ecuador, el Banco Mundial también ha promovido prospecciones mineras a escala nacional, nuevamente sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y sin evaluar las probables consecuencias de una intensificación de la extracción de minerales.

El documento de síntesis y los estudios de caso también analizan la forma en que el Grupo del Banco Mundial, a través de sus diversos brazos (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones) ha apoyado directamente proyectos de explotación de minas, petróleo y gas sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sociales y ambientales y sin tomar en consideración la falta de políticas de gestión y capacidad institucional o reglamentaria de los países o regiones de los proyectos. En el caso del oleoducto Chad-Camerún, el Directorio del Banco Mundial votó seguir adelante con el proyecto, a pesar de que los Bagyeli, habitantes del bosque, y las ONG que los apoyaban habían demostrado claramente los riesgos, e incluso a pesar de que los propios miembros del Directorio admitían que la política de salvaguarda del Banco sobre pueblos indígenas no había sido aplicada adecuadamente. La Corporación Financiera Internacional ha apoyado la minería incluso en países divididos por la guerra, como la República Democrática de Congo, a cargo de compañías con malos antecedentes: proyectos que han sido condenados por las Naciones Unidas.

Los impactos de los emprendimientos de minería facilitados por el Banco han sido graves, no sólo en términos de los impactos sociales y ambientales directos producidos por las propias minas o pozos, sino también en función de los derrames de sustancias químicas tóxicas como cianuro y mercurio, la rotura de oleoductos y diques de los estanques de residuos de la mina, y la contaminación a largo plazo a consecuencia del drenaje ácido de las minas. El estudio de caso de Papúa Nueva Guinea revela el apoyo del Banco Mundial al uso de la técnica sumamente polémica de eliminación submarina de desechos —“ojos que no ven, corazón que no siente”—, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas marinos y las formas de sustento que dependen de ellos. Los funcionarios, asesores y consultores del Banco Mundial que trabajan con compañías mineras en representación de la Corporación Financiera Internacional y los Socios Comerciales para el Desarrollo del Banco Mundial han participado, o han avalado, procesos que han maniobrado el requisito del consentimiento o que han cooptado comunidades para lograr decisiones manipuladas y poco transparentes. En algunos casos, como en Rusia, la participación del Banco Mundial en proyectos específicos

puede haber mitigado temporalmente algunos de los peores impactos de la extracción de petróleo, pero, en general, la participación del Banco Mundial en el sector ha intensificado la presión sobre las tierras indígenas, que siguen sin estar aseguradas.

El estudio revela que subyacente a esos problemas existe un proceso defectuoso de toma de decisiones dentro del Banco Mundial, en el cual la presión para otorgar préstamos se impone a otros objetivos y objeciones. Al priorizar a sus clientes directos y a los intereses de las grandes empresas del sector privado, el Banco está ignorando su compromiso con el desarrollo sustentable. La corrupción se tolera a sabiendas y los errores de gestión se pasan por alto sistemáticamente. Se sanciona a los funcionarios que cuestionan los préstamos realizados en esas circunstancias. Actualmente, en nombre de la “eficiencia”, la reducción de los “costos de las transacciones” y la “identificación del país con el programa”, el Banco está debilitando sistemáticamente sus políticas de salvaguarda, para hacerlas “inmunes” a las demandas presentadas por la sociedad civil ante el Panel de Inspección.

Teniendo en cuenta la debilidad de las salvaguardas del Banco Mundial, su oposición institucionalizada a invocar normas de derechos humanos obligatorias y la forma en que rutinariamente se burla de sus propios procedimientos, el estudio concluye que el Banco no debería participar en el sector de las industrias extractivas.

Además, el estudio recomienda que el Banco Mundial debería revisar radicalmente sus políticas sociales y su política de salvaguarda para los pueblos indígenas. Debería adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos, reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales, proscribir la reubicación forzada de pueblos indígenas y sostener el principio de que los proyectos de desarrollo sólo deben implementarse en las áreas de propiedad o uso de los pueblos indígenas con sujeción a su consentimiento informado previo y otorgado libremente. Tales cambios de enfoque deberían aplicarse a todo el Grupo del Banco Mundial; deberían complementarse con nuevos sistemas de rendición de cuentas legalmente obligatorios y deberían estar acompañados de la aceptación de que la promoción del desarrollo a través del sector privado requiere en primer lugar la promoción de la buena ges-

ción, una rendición de cuentas real, mecanismos regulatorios efectivos y una fuerte capacidad institucional. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

La Revisión de las Industrias Extractivas exhorta a establecer límites para la financiación de actividades mineras del Banco Mundial

A medida que se expande la economía mundial, se intensifica la presión sobre los territorios indígenas para extraer minerales, petróleo y gas, lo que representa una gran amenaza para ellos, sus tierras, sus territorios y los recursos de los cuales dependen. El Banco Mundial ha sido un instrumento de tales procesos, apoyando proyectos de minería que han sido condenados incluso por las Naciones Unidas.

Las intervenciones del Grupo Banco Mundial en el sector de industrias extractivas ha tenido impactos negativos sobre los pueblos indígenas en muy diversas formas. El Banco ha tenido como rutina aconsejar a los países la reelaboración de los códigos nacionales de minería para que faciliten la extracción minera en gran escala de las compañías extranjeras. Ha debilitado las protecciones legales de que disponían previamente los pueblos indígenas. Ha apoyado en forma directa proyectos de minería, petróleo y gas sin realizar una evaluación adecuada de sus posibles consecuencias sociales y ambientales y sin tener en cuenta la ausencia de gobernabilidad y de capacidad institucional o regulatoria de las zonas o países donde se ejecutan los proyectos. Sus políticas hacen muy poca mención a los derechos humanos.

Por ejemplo, en el caso de los Bagyeli, un pueblo indígena y habitante del bosque, han sido víctimas de los impactos del Proyecto del oleoducto Chad-Camerún patrocinado por el Banco Mundial. Se ha seguido con la ejecución del proyecto incluso después de que los Bagyeli y las ONGs que los apoyan demostraron claramente los riesgos e incluso a pesar de que algunos miembros del Directorio del Banco Mundial admitieron que la política de protección de pueblos indígenas del Banco no se había aplicado correctamente. “Nos prometieron trabajo. Nos sacaron todo lo que teníamos. Tomaron nuestra tierra. Tomaron nuestro bosque. Tomaron nuestra agua”, afirmó Sama Bailie de Camerún sudoccidental.

Actualmente, una evaluación oficial de los impactos de la financiación otorgada por el Banco Mundial a industrias extractivas (la Revisión de las Industrias Extractivas) llama al Banco a detener de inmediato la financiación de proyectos de extracción de carbón y a eliminar progresivamente su apoyo a proyectos petroleros hasta su eliminación final en 2008. Exhorta al Banco a exigir el consentimiento previo e informado de las comunidades que resultarían afectadas por los proyectos mineros y petroleros, y la protección de los derechos humanos. Y afirma que el Banco debe negarse a financiar prácticas ambientalmente destructivas como el vertido de efluentes en ríos y océanos. El informe final, difundido recientemente, criticó duramente los malos antecedentes de las industrias extractivas en términos de desarrollo, derechos humanos y medio ambiente.

En el documento de la Revisión se recomienda que la adopción y el cumplimiento demostrado de principios sobre derechos humanos deben ser un requisito previo para las compañías que solicitan apoyo del Grupo Banco Mundial para las industrias extractivas, un requisito que sin duda constituye un problema para varias empresas –como Shell, Anglo-American, ChevronTexaco, y ExxonMobil– que enfrentan investigaciones en procesos judiciales por su papel en la violación de derechos humanos.

Como expresara Keith Slack de Oxfam America: “La Revisión ha hecho algunas recomendaciones fuertes tendientes a abordar los problemas, pero la responsabilidad ahora está en manos del Banco. Todos estaremos observando cómo James Wolfensohn y su equipo instrumentan estos cambios”.

Mientras tanto, las comunidades y los pueblos en general continúan con su resistencia contra las fuerzas globales que invaden sus vidas y les privan de sus tierra y sus formas de sustento, de sus alimentos, de su pasado y de su futuro. (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

ÁFRICA

África: “Cuanto más se sabe sobre el oro, menos deslumbra su brillo”

“No al oro sucio” es la consigna de una campaña dirigida a los consumidores iniciada el 11 de febrero de 2004 por Earthworks/Mineral Policy Center y Oxfam, con la intención de presionar a la industria del oro y cambiar la forma en que el mismo se extrae, se compra y se vende. En los días previos y los posteriores al Día de San Valentín –una fecha de gran importancia para la venta de joyas de oro en los EE.UU.– los activistas distribuyeron tarjetas de San Valentín con el mensaje: “No manche su amor con oro sucio” frente a joyerías y relojerías de primera línea, entre ellas Cartier y Piaget en la Quinta Avenida de Nueva York. También se solicita a los consumidores que apoyen con su firma una petición en el sitio web de la campaña.

La producción de un solo anillo de oro de 18 quilates que pesa menos de una onza genera como mínimo 20 toneladas de desecho minero. La minería de metales emplea menos del 0,1% de la fuerza laboral mundial pero consume entre el 7 y el 10 por ciento de la energía del planeta. El ochenta por ciento del oro se utiliza en joyería. La mayoría de los consumidores no se dan cuenta de que en los países del sur la minería de oro se asocia con la violación de los derechos humanos, e incluso hasta con la prisión y la muerte, además de la devastación ambiental.

Como parte de la campaña, Earthworks y Oxfam publicaron el informe “Metales sucios: minería, comunidades y medio ambiente” que describe en detalle la contaminación masiva, las enormes minas a cielo abierto, los efectos devastadores sobre la salud humana, los peligros para los trabajadores, y en muchos casos, las violaciones a los derechos humanos que se han convertido en distintivos de la minería de oro y metales en varios países. El informe muestra además que la minería no produce riqueza para los pueblos. sino que más bien se convierte en la llamada “maldición de los recursos” para países del Sur como Guinea, Níger, Zambia o Togo. Aunque en estos países el porcentaje en el valor total de exportación de los minerales no com-

bustibles es alto (71, 67, 66 y 30 respectivamente), tienen un alto porcentaje de la población bajo la línea nacional de pobreza (40, 63, 86 y 32 respectivamente). La minería se vuelve una maldición doble para las comunidades locales, que a menudo sufren no solo el desplazamiento directo sino además un desplazamiento de sus formas de sustento tradicionales.

Por otra parte, la minería se desarrolla incluso en sitios considerados patrimonio de la humanidad. Tal es el caso de la extracción de oro en la Reserva de Vida Silvestre de Okapi en la República Democrática del Congo, el Parque nacional Tai en Costa de Marfil, el Parque nacional impenetrable Bwindi en Uganda y el Parque nacional Kahuzi-Biega en la República Democrática del Congo, así como la minería de hierro en la Reserva natural estricta Monte Nimba en Guinea y Costa de Marfil.

En Ghana, país del occidente de África que cuenta con grandes minas de oro, la Comisión Ghanesa de Derechos Humanos y Justicia Administrativa emitió un informe en 2000 que constató “evidencias sobrecogedoras de violaciones de los derechos humanos ocasionadas por las actividades mineras, que no eran esporádicas sino que presentan un patrón bien establecido y común a casi todas las comunidades mineras”. Entre 1990 y 1998, más de 30.000 pobladores fueron desplazados en Tarkwa por las operaciones de extracción de oro. “Nuestro pueblo ha sufrido golpizas, prisión y asesinatos por defender nuestros derechos comunitarios contra las compañías mineras multinacionales”, afirmó Daniel Owusu-Koranteng, un activista del distrito de Tarkwa. “Queremos que los compradores de oro apoyen nuestros derechos y exijan que las compañías mineras se rijan por normas éticas más estrictas”.

Una investigación llevada a cabo por el grupo comunitario ghanés WACAM (Wassa Association of Communities Affected by Mining) detectó evidencias de que entre 1994 y 1997, el personal de seguridad de AGC (Ashanti Goldfields Company), actuando en forma conjunta con la policía y el ejército, asesinó a tres mineros artesanales. En un incidente en enero de 1997, 16 mineros artesanales fueron golpeados severamente por el personal de seguridad de AGC. WACAM también recogió el testimonio de otros seis mineros artesanales que afirman haber sido golpeados y atacados por los perros guardianes de AGC.

Incluso como fuente de trabajo, la minería no es sustentable. A la destrucción de la base de empleo tradicional le sigue la pérdida de la propia mina. Cuando los depósitos de mineral se agotan, desaparecen los puestos de trabajo. La mayoría de los proyectos en gran escala tienen una duración de 10 a 40 años, después de los cuales las compañías mineras cierran las minas y se trasladan a la búsqueda de nuevos proyectos. Habitualmente, las escuelas, clínicas y otros servicios públicos que establecen las compañías pierden su fuente de financiación. Cuando esto sucede, generalmente los mineros y las comunidades quedan librados a sus propios recursos. Como la minería es una tarea especializada, los mineros en general carecen de otras habilidades laborales que puedan resultar útiles en el mercado de trabajo. Hay pocos programas de “transición justa” que permitan a los antiguos mineros capacitarse para realizar otros trabajos. Por estas razones, es probable que los mineros que son despedidos permanezcan desempleados durante largos períodos.

Con frecuencia, estos despidos tienen profundos efectos sociales, porque en general los mineros tienen un gran número de personas a su cargo (si bien la mayoría de ellas puede no estar en las propias comunidades mineras). Según una estimación de la Cámara Sudafricana de Minas, uno de cada ocho habitantes del sur de África depende económicamente de la minería. En la propia Sudáfrica, el primer productor de oro del mundo, la industria de extracción de oro despidió a cerca de 400.000 trabajadores entre 1985 y 2000 —casi la mitad de su fuerza laboral— privándoles a ellos y sus numerosos dependientes de sus fuentes de ingreso.

Ha llegado el momento de reformar nuestra “economía de metales”, cambiando la forma en que se producen los metales, buscando formas más eficientes de utilizarlos, y continuar utilizando aquellos que ya están en circulación. Y si resulta necesario extraer algunos metales, las operaciones de extracción más importantes nunca deben realizarse en reservas naturales y tierras nativas.

“Lo que pedimos es razonable, justo y posible”, afirmó Keith Slack, asesor principal de políticas de Oxfam America. “El símbolo del amor perdurable no debe producirse a expensas del agua potable o del respeto a los derechos humanos”. “El oro no parece tan brillante cuando

tenemos en cuenta el daño colosal que producen las minas de oro”, declaró Payal Sampat, Director internacional de campaña de Earthworks. “Pedimos a los consumidores que consideren el costo real del oro, y estamos solicitando su ayuda para poner fin a las prácticas de minería que ponen en peligro la vida de las personas y a los ecosistemas”. (Boletín del WRM N° 80, marzo de 2004).

Costa de Marfil: FMI, cacao, café, madereo y minería

Durante más de una década, Costa de Marfil ha estado bajo la influencia de los programas de ajuste estructural del FMI, uno de cuyos factores más importantes ha sido la intensificación de las exportaciones. Durante la década de los 90 se intensificó la búsqueda de reformas fiscales y estructurales en Costa de Marfil. El país devaluó su moneda en 1994 y eliminó impuestos a las exportaciones en cumplimiento del programa de ajuste del FMI y en 1995 liberalizó sus mercados nacionales.

Como resultado, la producción de cacao se disparó un 44 por ciento entre 1994 y 1996. Costa de Marfil se convirtió en el primer productor mundial de cacao, con el 40 por ciento del mercado mundial. El país también está ubicado en el tercer lugar en la producción de café, superado sólo por Brasil y Colombia. Pero el florecimiento del sector agrícola, con el cultivo de cacao a la cabeza, produjo cambios sustanciales en el uso de la tierra. Esta conversión de la tierra ha sido un factor esencial en la disminución de 67% de la cobertura de bosques de Costa de Marfil desde su independencia de Francia en 1960. Los bosques totalizan ahora aproximadamente 2,4 millones de hectáreas, cuando antes eran 28 millones de hectáreas, o más de la mitad sur del país.

El lucrativo mercado del cacao incentivó a los productores a expandir sus parcelas en forma ilegal invadiendo los bosques protegidos de Costa de Marfil, amenazando aproximadamente un tercio de estas áreas. Las áreas de bosques a ser protegidas a través de su designación oficial como “sagradas” y “clasificadas” están siendo taladas, quemadas y sembradas con cultivos de exportación. En estos bosques, casi un millón de productores y sus familias producen hasta 100.000 toneladas de cacao, cerca del diez por ciento de la cosecha de 1996/1997.

En 1994, los productos de madera destinados a Europa constituían el 11 por ciento de las exportaciones. Las actividades madereras continúan exponiendo las áreas más remotas de Costa de Marfil a la actividad de cazadores furtivos. Mientras que los pobladores locales han cazado animales para su sustento durante miles de años, la caza de animales con fines comerciales se ha convertido en una industria donde las herramientas tradicionales han sido suplantadas por rifles automáticos. La caza de chimpancés, aves, tortugas y otras especies ha crecido hasta convertirse en una industria con un valor estimado de US\$ 121 millones.

Los bosques de Costa de Marfil siguen constituyendo parte de las zonas de bosques más importantes de África. Su pérdida plantea riesgos graves para los modelos climáticos regionales, que están estrechamente vinculados a la presencia de la cobertura de bosques. Irónicamente, la producción de cacao depende de las condiciones climáticas y la sobreproducción de cacao podría en última instancia amenazar el éxito del cultivo.

El FMI recientemente ha presionado a Costa de Marfil para que amplíe sus sectores minero y petrolero. (Por: Jason Tockman, Boletín del WRM N° 54, enero de 2002).

Ghana: Los impactos de la minería

En muchas áreas ubicadas en los trópicos la minería constituye una de las principales causas de deforestación y degradación de los bosques, generando una serie de impactos sociales y ambientales. Un reciente estudio publicado por la Red del Tercer Mundo-Africa suministra un detallado panorama de tales impactos en el Distrito Wassa de Ghana. A continuación presentamos algunos fragmentos de dicho trabajo.

Los principales minerales extraídos de Ghana son oro, diamantes, bauxita y manganeso, siendo el oro el más importante mineral de exportación. La estructura de propiedad en el sector minero es mixta, aunque las compañías extranjeras controlan alrededor del 70% de la explotación en las minas ghanesas. Los actores dominantes son principalmente compañías "junior" de Canadá, Australia y Sudáfrica, pero

también actúan empresas de EE.UU., Reino Unido, Noruega y China. Mientras que las empresas “principales” tienen la propiedad de la mayoría de las minas, la prospección generalmente corre a cargo de compañías junior, principalmente de la propia Ghana, Canadá y Australia. Las empresas “junior” se caracterizan por ser generalmente *joint-ventures*, operar de manera inescrupulosa desde el punto de vista financiero y no atender normas ambientales, mientras que las “principales” son de mayor envergadura y aducen mantener una ética social y ambiental.

En lo que refiere específicamente a los bosques, tales inversiones han demostrado ser devastadoras. La minería de superficie representa una seria amenaza para los últimos vestigios de bosque en Ghana, a la vez que pone en riesgo la rica biodiversidad de los bosques tropicales húmedos del país. Existe un conflicto creciente entre el manejo forestal sustentable y las actividades mineras. La zona de Tarkwa, donde se realizó la investigación, se encuentra en la principal región productora de madera, que coincide parcialmente con áreas de reserva forestal. Se presume que la misma contiene el 44% de los bosques primarios del país. En esta zona los árboles alcanzan alturas de hasta 45 metros, encontrándose éstos en la cima de las colinas, donde la actividad minera todavía no ha llegado. Resulta irónico que aquí se concentre la mayor parte de las compañías que practican minería de superficie y exploración —8 de las 14 minas de gran escala se encuentran aquí— algunas de las cuales contando incluso con licencias para operar dentro de reservas forestales.

La eliminación de la cubierta boscosa está provocando el rápido descamamiento de los cursos de agua, a la vez que la extinción de las especies animales y vegetales que allí habitan. En estos bosques viven especies protegidas, tales como el chancho del río Rojo, el antílope ruano, el mono rojo colobo y el mono negro colobo. Tal amenaza a la biodiversidad tiene implicancias a nivel de las comunidades: el aumento de las actividades mineras en la zona ha traído consigo la reducción o la extinción de ciertas especies de la flora y la fauna de las cuales las comunidades dependen. Muchas de éstas se quejan de que —en parte debido a las actividades mineras— ya no encuentran disponibles caracoles, hongos, plantas medicinales, etc.

Por otra parte, la minería ha generado crecientes conflictos entre las comunidades desplazadas por las operaciones mineras, así como problemas sanitarios y sociales vinculados con las mismas (por ejemplo: malaria, tuberculosis, conjuntivitis, enfermedades de la piel, prostitución, drogadicción, aumento del costo de vida, alojamiento inadecuado, etc.) e impactos tales como la contaminación de las fuentes de agua de las comunidades, contaminación atmosférica y acústica, destrucción de las fuentes de agua subterránea, etc.

Como lo indica el propio autor del estudio, “en tanto los cambios que se han dado a nivel político generan incentivos para los inversores, los beneficios de tales inversiones para el país resultan por demás dudosos”. (Boletín del WRM N° 41, diciembre de 2000).

Ghana: FMI, minería y madereo

Desde 1983, Ghana ha estado instrumentando programas de ajustes estructurales del FMI centrados en el crecimiento orientado a las exportaciones, lo que ha incluido medidas para devaluar la moneda y eliminar distintas barreras al comercio. Si bien esto ha determinado ganancias económicas importantes, también ha significado graves consecuencias perjudiciales para los bosques tropicales y para los pueblos que habitan en los bosques de esta nación del occidente de África. El préstamo de tres años más reciente concedido por el FMI a Ghana por un monto de US\$ 239 millones de dólares se inició en 1999 y fue modificado en 2000.

Siguiendo las recomendaciones del FMI, Ghana disminuyó las reglamentaciones mineras y fomentó las inversiones de la industria minera a través de generosos incentivos y reducciones tarifarias durante las décadas de los 80 y 90. Como resultado, más de 250 compañías mineras han recibido concesiones por un total de 58.167 kilómetros cuadrados. La mayoría de estas compañías explotan minas de superficie, aunque algunas tienen operaciones subterráneas. Diamantes, bauxita, manganeso, y especialmente oro son los metales predominantemente buscados en Ghana, y la mayoría son extraídos por compañías canadienses, australianas, sudafricanas, estadounidenses y otras empresas de capital extranjero.

Las divisas generadas por las exportaciones del sector minero han superado los ingresos generados por el cacao. Desde 1992 a 1995, las exportaciones mineras aumentaron de US\$ 107,9 millones a US\$ 682, 2 millones. La producción sólo de la industria del oro de Ghana creció 500 por ciento entre 1983 y 1995, y 750 por ciento entre 1983 y 1998.

La minería en Ghana ha tenido un efecto tremendamente prejudicial sobre los bosques tropicales del país, que cubren un tercio de su territorio. El sesenta por ciento de los bosques tropicales del distrito Wassa Oeste de Ghana ya ha sido destruido por las operaciones mineras, que también han contaminado aguas superficiales y subterráneas con cianuro y otras sustancias químicas.

Las minas también han devastado las comunidades locales. Los poblados vecinos sufren a raíz del suministro de agua contaminada y de la rotura de sus edificaciones a causa de las explosiones en las minas. En muchos casos, la tierra que se usa para las operaciones mineras en Ghana ha sido adquirida por la fuerza de productores campesinos mediante la aplicación de reglamentaciones ambiguas. A veces estas adquisiciones se realizaron sin compensación alguna. En algunas instancias las minas han sido responsables por el desalojo y reasentamiento forzado de comunidades que se cuentan por cientos e incluso por miles. También se han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en relación a las minas, entre las que se incluyen tiroteos y golpizas.

Desde 1981, Ghana ha sufrido pérdida de bosques que alcanzan un promedio de 750.000 hectáreas por año. La cobertura de bosque ha disminuido a un 25 por ciento de su extensión original, debido a que la tasa de deforestación ha aumentado un 50 por ciento en diez años.

La combinación del madereo realizado por compañías multinacionales y por pobladores rurales que buscan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas ha alimentado lo que hoy es el tercer sector exportador más importante de Ghana. Entre 1983 y 1988, los ingresos provenientes del sector forestal se multiplicaron por seis. Si se mantiene este ritmo, se estima que los árboles ghaneses de caoba, odum y afromosia se agotarán hacia fines de 2007. (Por: Jason Tockman, Boletín del WRM N° 54, junio de 2002).

Ghana: El gobierno pone el ultimo clavo en el ataúd de los bosques del país

Más de 800.000 hectáreas de bosque se pierden anualmente en Ghana a manos de la minería, en tanto las concesiones mineras abarcan más del 70% del total de territorio, con la consecuente considerable reducción de la producción de alimentos. El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial que canaliza préstamos al sector privado) proporcionaron capital inicial e indujeron con engaños a los países africanos a adoptar la desregulación, la liberalización y la privatización de los sectores de extracción para atraer la inversión extranjera directa.

Ahora, cinco compañías mineras multinacionales con actividad en Ghana (Chirano Goldmines Limited, Satellite Goldfields Limited, Nevsun/AGC, Birim/AGC y Newmont Ghana Limited) van a destruir varios miles de hectáreas de bosque de la Reserva del río Subri, la reserva Cape Three Points, Supuma Shelterbelt, Opon Mansi, Tano Suraw y Suraw Extension en la región occidental, y en el bosque de Atewa Range y en Ajenjua Bepo en la región oriental. Las compañías invirtieron millones de dólares y encontraron cantidades asombrosas de depósitos de oro debajo de los exuberantes bosques cuando el anterior gobierno del Consejo Democrático Nacional (National Democratic Council - NDC) les dio vía libre para buscar oro en las reservas de bosques. Actualmente el NDC ya no está en el poder y las empresas quieren que el actual gobierno del Nuevo Partido Patriótico (New Patriotic Party - NPP) les permita pasar a la etapa de explotación minera real.

Los ambientalistas y activistas en favor de los derechos humanos afirman que la concesión de permisos de extracción a cielo abierto en estas reservas ecológicamente frágiles agravará la ya alarmante tasa de deforestación y degradación de los bosques del país, y hará estragos en los sistemas de agua dulce y las cuencas. También han planteado su grave preocupación sobre la minería a cielo abierto en relación al impacto resultante del uso de cianuro en el proceso, que incluso en niveles bajos podría producir efectos graves sobre la salud ante la exposición crónica a largo plazo.

Las reservas incluyen los únicos bloques importantes de bosques que quedan en el país; los mismos ayudan a contener los incendios, conservan los niveles de humedad y lluvias a nivel local, y proporcionan un santuario para una variedad sorprendente de especies que figuran en las listas internacionales de especies bajo riesgo de extinción. Si el actual gobierno accede a los deseos de las compañías mineras, se abrirán carreteras hasta el corazón de las reservas de bosque, se levantarán campamentos y se removerán grandes franjas de suelo superficial junto con los añosos árboles que allí existen. Las toneladas de tierra y escombros que caerán en avalancha montaña abajo, en algunos casos también cubrirán ríos y arroyos y con ellos los lechos de desove de peces. La afluencia de gran número de mineros y la construcción de carreteras en áreas previamente inaccesibles generarán también condiciones de explosión urbana, atrayendo más ocupantes ilegales, taladores de árboles, "garimpeiros" (mineros tradicionales que extraen oro en pequeña escala), quioscos de lotería y comercios a las reservas. El personal de las compañías mineras seguramente cazará animales del bosque para abastecer su mesa.

Un argumento clave usado por los más decididos partidarios de la minería en las reservas de bosque es que "el país necesita dinero". Este argumento se basa en la teoría económica que afirma que los países en desarrollo deben explotar sus recursos naturales para desarrollarse, y que la contaminación, el desplazamiento de comunidades y otras consecuencias son efectos secundarios necesarios e inevitables.

Toda clase de compañías extranjeras que operan en Ghana han amasado fortunas enormes pero los beneficios no quedan en el país. Lambert Okrah del Instituto de Asuntos Culturales (Institute of Cultural Affairs) afirma: "No se trata de si debemos morir de hambre en tanto el oro se acumula bajo los árboles. Se ha extraído oro en Tarkwa, Prestea y Obuasi durante muchos años; y ahora, ¿acaso los habitantes de esas regiones no tienen hambre? Esos lugares son tan desolados que nunca se creería que allí hay oro".

En relación a la generación de empleo, el sector ha demostrado una capacidad relativamente limitada, porque las operaciones de extracción a cielo abierto son tecnológicamente intensivas y dependen de

un número reducido de trabajadores de alta calificación que en muchos casos son extranjeros. Sitios históricos y arqueológicos valiosos ubicados en algunas de esas reservas, incluso arboledas sagradas, serán destruidos. También tierras agrícolas y cuencas importantes se verán amenazadas, y las magníficas reservas se convertirán en un paisaje industrial monstruoso destrozado por carreteras, tuberías, escombros de construcción, latas de sardinas y bolsas plásticas. La propia Evaluación de Impacto Ambiental de cuatro compañías mineras que trabajan en la región indicó que el número total de pobladores desalojados ascendería a 22.267 personas de 20 comunidades.

En referencia al impacto de la minería en el área de Wassa, el profesor y escritor Thomas Akabza resalta lo siguiente: “Mientras las compañías mineras y el gobierno central se benefician con las ganancias de la minería si las hay, las comunidades que habitan las zonas mineras reciben muy pocos o ningún beneficio. Estos pobladores, que en su mayoría practican la agricultura tradicional y de subsistencia son desplazados de sus tierras de cultivo, lo que lleva a la pérdida de sus formas de sustento y a la ruptura de sus vínculos sociales. Además, la minería provoca conflictos cada vez mayores entre las comunidades desplazadas por las operaciones de extracción, a la vez que acarrea graves problemas sociales y de salud asociados a la minería, como malaria, tuberculosis, conjuntivitis, enfermedades de la piel, prostitución y consumo de drogas”.

Abraham Baffoe, integrante de Amigos de la Tierra, afirmó: “Podemos prosperar como nación sin tener que destruir nuestras reservas de bosque para la extracción minera. Sabemos muy bien que después de la minería no quedarán bosques. Intentan convencer a todo el mundo que se puede regenerar los sitios degradados, pero no debemos engañarnos; no se trata simplemente de plantar pasto y árboles aquí y allí, porque la realidad es que las plantaciones no son bosques”.

Trabajando en red con otras comunidades afectadas por la minería a nivel nacional, regional e incluso mundial, las comunidades de Ghana han incrementado su lucha por los derechos humanos, la autodeterminación y la justicia social y ambiental, y han exhortado también a los prestamistas privados a rechazar proyectos de minería que generan problemas a las comunidades. Sin embargo, las violaciones

de los derechos humanos siguen aumentando, con varios casos de arrestos arbitrarios, violaciones al derecho al acceso a los alimentos, desalojos forzosos, compensaciones insuficientes y demolición de poblados.

“Cuando se destruyan las reservas de bosques, los ríos se secarán y también nuestras vidas”, afirman los pobladores. “Cuando fuimos al bosque a plantar ñame o taro (*Colocasia esculenta*), plátano y pimienta para alimentar a nuestras familias, la gente del gobierno nos obligó a salir y nos prohibió volver a plantar allí. Nos dijeron que es una reserva de bosque y que allí no se permite plantar. Ni siquiera nos dejaron recolectar caracoles en la reserva, pero ahora el propio gobierno quiere enviar excavadoras para destruir el bosque porque los blancos así lo dicen. Hermano, ¿acaso eso es justo? Cuando un hombre pobre corta una rama o mata un roedor en la reserva, termina preso; cuando una compañía minera tira abajo una reserva de bosque, los hombres importantes de Accra viajan hasta aquí para celebrar con ella, ¿eso es justo?”, preguntó Sisi Nana, de treinta y tres años y madre de cuatro hijos, habitante de Bibiani. (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Ghana: Resistencia a la fiebre del oro en las reservas forestales

Una coalición internacional cada vez más amplia de grupos de intereses públicos, derechos humanos, trabajo y medio ambiente se ha comprometido a resistir a la minería en las reservas de bosques de Ghana.

En una conferencia de prensa realizada el jueves 8 de mayo de 2003, para lanzar una campaña contra la minería en las reservas, la coalición expresó su condena a la decisión del gobierno de Ghana de abrir algunas de las reservas a la minería de superficie. Los miembros de la coalición exhortaron al gobierno a anular su decisión y retirar las autorizaciones ya otorgadas a algunas compañías para realizar actividades mineras en las reservas de bosque.

La coalición está integrada por 13 grupos de la sociedad civil, entre los que se incluyen: Red de Información y Acción “FoodFirst” (FIAN), Amigos de la Tierra, Red del Tercer Mundo, Centro por la Ley de Interés Público, Organización “Green Earth”, Abantu for Development, Sin-

dicato de Agricultores, Asociación de Comunidades Afectadas por la Minería en Wassa (WACAM), Amigos de la Nación, Ceres, y el Centro de Desarrollo Social Integral (ISODEC).

La coalición sostiene que la cubierta boscosa total del país se ha reducido de 8,3 millones de hectáreas al inicio del período de la independencia en 1957 a los actuales 1,2 millones de hectáreas, sobreviviendo menos del dos por ciento de su cobertura de bosque nativo.

Los miembros de la coalición afirmaron que cada año se pierden aproximadamente 800.000 hectáreas de tierras forestadas debido a la minería. Actualmente queda muy poco bosque cerrado fuera de la red de reservas de bosque, estando la mayoría distribuido en pequeñas zonas en pantanos y arboledas sagradas. La concesión de licencias que permiten a los mineros operar las reservas diezmará el poco bosque que queda escondido en las reservas, advirtieron.

En un país que ya experimenta una de las tasas de deforestación más altas del mundo, la coalición acusó al gobierno de Ghana de priorizar el desarrollo comercial por encima de los intereses ecológicos. Los portavoces resaltaron que tener como objetivo final el aumento de la inversión en Ghana a costa del rendimiento ambiental y social es peligroso.

Hablando en nombre de la coalición, George Awudi de Amigos de la Tierra dijo que las reservas de bosque afectadas incluyen la Reserva de Bosque del río Subri, un área de biodiversidad de importancia mundial, que también es la reserva de bosque más grande del país y una cuenca esencial entre dos grandes ríos.

También se ven afectadas las reservas de Supuma Shelterbelt, Opon Mansi, Tano Suraw y Suraw Extension, y la de Cape Three Points en la región occidental. Entre los bosques en riesgo en la región oriental están Ajenjua Bepo, y la reserva Atewa Range, un área especial de protección biológica que está considerada la reserva más mineralizada del país.

Awudi dijo que la reserva de Atewa contiene muchas especies únicas como dos tipos de árboles endémicos así como seis especies endémicas de mariposas y varias especies de pájaros.

En Tano Suraw, la compañía Red Back Mining de Australia obtuvo en abril un permiso para ejecutar su proyecto Chirano Gold de un millón de onzas. La compañía recibió un contrato de minería para el proyecto que incluye partes de las reservas de bosques productivos de Tano Suraw y Tano Suraw Extension. Se espera que el proyecto Chirano Gold produzca entre 120.000 y 130.000 onzas de oro al año con un período de vida útil de la mina de ocho años.

Otras compañías involucradas en la fiebre del oro en las reservas forestales son Satellite Goldfields Limited de Sudáfrica, Ashanti Goldfields Limited de Ghana, y Newmont Mining Company con sede en Denver, la compañía productora de oro más grande del mundo. Newmont y Ashanti Goldfields ya han recibido permisos para operar en las reservas de bosque de Ajenjua Bepo y Kubi.

Awudi afirmó que el gobierno al conceder esos permisos está dando una puñalada por la espalda a los esfuerzos por conservar y mantener las reservas de bosque y otras áreas protegidas de Ghana. La decisión del gobierno de permitir la minería contradice su propia política de conservación de recursos naturales y es un precedente peligroso que podría establecer un mal ejemplo para otros mineros, madereros, y cazadores furtivos.

La decisión del gobierno socavará el desarrollo económico, ambiental y social de los pobladores y del país, explicó Awudi. Mencionó recursos específicos que podrían resultar dañados, como el agua dulce, los recursos genéticos vegetales, el suministro de medicinas, el control climático, la agricultura, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

Arrasar las reservas de bosque podría producir consecuencias ecológicas y sociales múltiples como la erosión del suelo debido a la eliminación de la cubierta de árboles, la pérdida de tierra superficial valiosa, grandes inundaciones en áreas rurales y urbanas producidas por el exceso de sedimentación en los sistemas fluviales y cambio climático debido al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera como resultado de la pérdida de árboles, explicó Awudi.

La minería en las reservas de bosques contradice en primer lugar los principios en los que se basa la creación de las reservas de bosque,

declaró la coalición, y viola varios tratados internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito por Ghana.

Citando ejemplos de la región occidental de Ghana, Awudi dijo que la minería en Ghana ha tenido un efecto perjudicial sobre los bosques tropicales que antiguamente cubrían un tercio del país.

El sesenta por ciento de los bosques tropicales en el distrito Wassa oeste de Ghana ya fueron destruidos por minería. Además, el cianuro y otras sustancias químicas contaminaron las reservas de agua y los edificios se han agrietado debido a las explosiones de las minas.

Según afirma Awudi, en Ghana, en muchos casos las actividades mineras se realizan en tierras tomadas por la fuerza a los campesinos, en algunos casos sin compensación alguna. En algunas instancias, las minas han sido responsables por la desarticulación y reubicación forzosa de comunidades que suman miles de personas. También se han documentado varios casos de violaciones de derechos humanos como palizas y ataques con armas de fuego.

La coalición ha exhortado al gobierno a promulgar un marco de regulaciones bien definido que prohíba la minería en las reservas forestales, y también ha solicitado al Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional que no financien a las compañías mineras que pretenden explotar minas de superficie en las reservas de bosque del país.

Awudi sospecha que el objetivo real de la decisión del gobierno de conceder permisos de minería en las reservas de bosque es preparar el terreno para la apertura de todo el sistema de reservas de bosque del país para la extracción de oro.

Realizó un llamado a los ghaneses y a la comunidad internacional a interesarse activamente en la amenaza de desastre ecológico en Ghana y a unirse a la coalición en su campaña de resistencia a la minería en las reservas de bosque del país. (Por: Mike Anane, Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Ghana: El Banco Mundial detrás del escenario del oro

Décadas de deforestación y degradación de los bosques han provocado que solo queden intactos menos del dos por ciento de los bosques nativos de Ghana. Estos bosques han sido la fuente de sustento de los pueblos dependientes de los bosques, proporcionándoles leña, carbón, materiales de construcción, forraje, frutos, nueces, miel, medicinas, tinturas. También juegan un papel ambiental importante en la prevención de la erosión del suelo, la protección de las cuencas, fertilidad y sombra para el suelo, protección contra el viento, prevención de inundaciones y desprendimientos de tierras, retención de agua y mantenimiento de la pureza del agua. Son además hogar de 2.100 especies de plantas, más de 200 especies de mamíferos (incluyendo búfalos, leopardos, gatos dorados, chimpancés, elefantes e hipopótamos pigmeos), 200 especies de aves (entre las que se cuenta el loro gris africano) y mariposas, todas especies reconocidas a nivel internacional como especies en riesgo de extinción, lo que ha hecho que estos bosques hayan sido designados Áreas de Protección Biológica Especial y Áreas de Biodiversidad de Importancia Mundial.

En 1994, algunos esfuerzos realizados para proteger los remanentes de sabana y bosques tropicales húmedos dieron lugar a la creación de un borrador de Política de Bosques y Vida Silvestre. Sin embargo, la teoría económica dominante que sentencia a los países del sur al agotamiento de sus recursos naturales con vistas a su desarrollo —un camino que ha producido contaminación, desplazamiento de comunidades, miseria y hambre para la mayoría, y grandes ganancias para un puñado de compañías y elites locales— ejerce una fuerte presión a través de sus instrumentos de poder multilaterales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional).

En el caso de Ghana, han definido a la minería de oro como el destino del país. Ghana es el segundo productor de oro de África, logrado a expensas de la naturaleza y los derechos humanos. Las operaciones de minería en Ghana son responsables por el desplazamiento de 50.000 pobladores indígenas sin una indemnización justa, por haber empleado a menos de 20.000 ghaneses (debido a la dependencia de los trabajadores extranjeros), por haber incendiado aldeas, detenido ilegalmente a activistas, violado mujeres y negado permanentemente la

cultura local. Pero éste es un modelo bien establecido y común a casi todas las comunidades mineras.

En un momento en que los precios internacionales del oro alcanzaban el nivel más alto de los últimos seis años debido a la precaución de los inversores ante la guerra inminente contra Irak, el gobierno indicó que estaba listo para abrir a la minería el bosque protegido, entregando así la riqueza biológica del país. Newmont –una compañía productora de oro y líder en tecnología de procesamiento y exploración con sede en Denver, Colorado, EE.UU.– y otras compañías mineras habían hecho amenazas veladas de juicios o cierre completo y reubicación en Tanzania para “convencer” al gobierno de mantener los permisos después del inicio de la exploración.

Las operaciones de minería dentro de ecosistemas de bosques prístinos acelerarán la deforestación masiva y la degradación ambiental del país, y contaminarán los frágiles ecosistemas de agua dulce y la capa superior del suelo con cianuro y arsénico. “Sólo miren el patrimonio de bosques de este país. Teníamos cerca de 8,3 millones de hectáreas de las cuales ahora sólo quedan 1,2 millones y todavía queremos entregar algunas más para dedicarlas a la minería, cuando sabemos muy bien que después de la minería no habrá más bosques”, afirmó Abraham Baffoe de Amigos de la Tierra. “Nuestros poblados ya han sido deforestados en forma rapaz por la minería, y la salud y la calidad de los bosques que nos quedan se sigue deteriorando, y ahora nos piden que entreguemos las reservas de bosques; ¿creen que los ghaneses son tontos? Por favor escriba todo lo que acabo de decir y diga a las autoridades que yo lo dije”, afirmó Akosua Birago, un agricultor de sesenta y dos años de Abekoase, en la región occidental de Ghana.

Pese a que la Ministra de Minas Cecilia Bannerman había negado que se hubieran otorgado permisos de minería a ninguna compañía minera para explotar áreas dentro de las reservas de bosques, el Presidente aseguró a Newmont que su gobierno tiene la voluntad de apoyar a la compañía para que pueda realizar sus operaciones en el país sin problemas.

El 14 de enero de 2004, la Coalición Nacional de la Sociedad Civil y Grupos Comunitarios de Ghana (Ghana National Coalition of Civil So-

ciety and Community Groups) contra la minería en las reservas de bosques, que incluye a más de 17 ONGs y grupos comunitarios, envió una segunda carta al Presidente del Grupo del Banco Mundial, James Wolfensohn. En la carta, le recordaron al Presidente la carta con firmas que le enviaron el año pasado, demandando que el Gobierno de Ghana anule todos los permisos ya otorgados para la explotación minera en las reservas de bosques del país y exhortando al Grupo del Banco Mundial a declarar claramente que no apoya y no tiene intención de apoyar la autorización de actividades mineras en las reservas de bosques de Ghana, y solicitando además una respuesta formal del Banco Mundial a la solicitud de la Coalición. Hasta la fecha, la Coalición no ha recibido respuesta del Banco Mundial.

Por el contrario, las compañías mineras han seguido adelante con los procesos preparatorios para la extracción minera en algunas de las reservas de bosques. En diciembre de 2003 el gobierno de Ghana y Newmont Mining firmaron un contrato de inversión. En enero de 2004, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana hizo pública la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la compañía Chirano Gold Mines en la reserva de bosque de Tano-Sraw, en la región occidental de Ghana. La empresa canadiense de extracción de diamantes PMI Ventures anunció este año el comienzo de la siguiente fase de perforación para la extracción de diamantes en las nueve concesiones y solicitudes de exploración minera, que comprende a la mina de oro Ashanti II ubicada en el sudoeste de Ghana.

Las organizaciones sociales consideran que el Grupo del Banco Mundial (GBM) está al tanto de esto y respalda totalmente al gobierno y a las compañías, lo que explica el largo silencio y la evidente indiferencia ante su carta. El GBM tiene una larga historia de participación en los sectores de la minería y la explotación forestal de Ghana, proporcionando asistencia técnica en materia de reforma de políticas e instituciones, así como inversión y apoyo a las operaciones del sector minero.

Esto sucede en un momento en que el GBM está considerando su respuesta al informe de la Revisión de las Industrias Extractivas (EIR, por su sigla en inglés) que recomendó la búsqueda vigorosa del buen gobierno, el respeto por los derechos de las comunidades en los pro-

yectos de minería y la plena implementación de la Política de Hábitats Naturales como base para una clara determinación de zonas de acceso prohibido.

El silencio del Banco Mundial es por lo tanto una muestra evidente de su voluntad de apoyar a las compañías mineras en la destrucción de los bosques que quedan en el país; es una señal de que continuará apoyando la destrucción del sustento de los pobladores locales y de que no le preocupa el destino de ninguna especie amenazada. (Boletín del WRM N° 80, marzo de 2004).

Kenia: Gobierno cuestiona proyecto canadiense de minería de titanio

Tiomin Kenya Limited, una subsidiaria de la compañía Tiomin Resources Inc. de Canadá, comenzó a explorar las arenas minerales de la costa keniana en busca de titanio. Con una longitud de 402 kilómetros, esta zona es una cultura tropical única con arquitectura árabe antigua, arrecifes de coral y ecosistemas frágiles.

Investigaciones posteriores demostraron la existencia de cinco sitios ricos en titanio con 650 millones de toneladas en Mambui y 1.200 millones de toneladas en Sokoke. Hay a su vez cantidades desconocidas en Sabaki, Mombasa y Kwale. Se trata de depósitos tan grandes que se podría extraer titanio durante 20 años a una tasa de 480.000 toneladas métricas por año. Contienen rutilo, ilmenita y circón, los dos primeros fuentes de dióxido de titanio (usado principalmente para la producción de pigmentos para pinturas, plástico y papel), mientras que el circón se utiliza para la fabricación de cerámica y esmaltado, materiales refractarios y equipos electrónicos.

En 2002, el anterior gobierno de Ghana –de la Unión Nacional Africana de Kenya-KANU– otorgó un permiso ambiental a Tiomin, permitiendo el inicio de negociaciones sobre un enorme contrato de arriendo para la explotación de minas de titanio a cielo abierto en el distrito de Kwale, cerca de la costa sudeste del país. La decisión ayudó a promover el proyecto propuesto de US\$ 120 millones, que desplazaría casi 5.000 personas de sus hogares y campos, abarcando un área de aproximadamente 2.400 hectáreas.

La población local, preocupada por la profanación de tumbas ancestrales y el destino de sus bosques sagrados, además de la pérdida de sus hogares, su salud y sus formas de sustento, ha opuesto considerable resistencia al proyecto minero. Los científicos keniatas han manifestado también su preocupación por las emisiones de dióxido de sulfuro, el riesgo para la salud resultante de la liberación de uranio y torio radioactivos de las arenas ricas en titanio de Kwale (actualmente en estado termodinámico estable), y la amenaza que representan la explotación minera para la vida marina y los arrecifes de coral.

Ahora el proyecto está siendo cuestionado por el nuevo gobierno de la National Rainbow Coalition, que anunció que está planificando la realización de un foro público para discutir si se debe autorizar o no a Tiomin Resources Inc. a comenzar la extracción del mineral en Kenya. La viceministra de medio ambiente, la reconocida ambientalista y catedrática Wangari Maathai, afirmó que “el gobierno todavía tiene dudas” sobre la autorización a la compañía “porque hay problemas ambientales que todavía no han sido resueltos”. Su ministerio anunció que un equipo independiente realizará otra Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) “para evaluar los peligros que plantea la operación minera para el ecosistema”, debido a que el Informe de Evaluación Ambiental previo presentado por la compañía minera al gobierno anterior ha recibido muchas críticas, y ha sido calificado como pésimo por algunos actores involucrados.

Un segundo estudio dirigido por el Dr. Wamicha, de la Universidad de Kenia, que advierte sobre el nivel de radioactividad y la presencia de azufre durante la extracción, fue menospreciado por la Tiomin. El vicepresidente de la compañía, Mathew Edler, afirmó al respecto que “Kenia no tiene asesores ambientales con la experiencia necesaria para realizar una EIA para el proyecto Kwale. Colocar el nombre de EIA en la carátula no lo hace creíble”, lo que desató una airada reacción de las mismas personas que hoy están en el gobierno.

Sin duda este tipo de corporaciones sí saben producir todas las EIA necesarias. Pueden fácilmente contratar todos los asesores necesarios para estampar un sello de aprobación en cualquiera de sus proyectos. Tienen el dinero. Pero les falta algo mucho más importante: las credenciales sociales y ambientales que tienen algunos de los

actuales funcionarios gubernamentales keniatas. Todo indica que las cosas han cambiado y el proyecto de minería parece estar hoy bastante más lejos que antes. (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Madagascar: El FMI abre el país a la minería

Llamada la “tierra prometida de los naturalistas” por el explorador francés Phillippe de Commerson en 1771, Madagascar es uno de los países con mayor riqueza ecológica del mundo. Esta isla del tamaño de Texas alberga doce mil especies, el 80 por ciento de las cuales son endémicas, y no existen en otro lugar. Recientemente se descubrieron nueve especies nuevas de lémur en Madagascar, colocando al país en segundo lugar después de Brasil por la cantidad de primates que tiene allí su hogar.

En 1996, el gobierno malgache aceptó un préstamo a tres años por US\$ 118 millones y se inclinó ante la presión del FMI en su acuerdo, aceptando profundizar la liberalización de las políticas comerciales y la apertura de su economía a la inversión extranjera. Entre las medidas adoptadas se incluyó el permiso a la propiedad de extranjeros sobre la tierra y la eliminación de impuestos a la exportación.

La liberalización de las políticas de comercio e inversión de Madagascar ha alentado los proyectos mineros de una subsidiaria de Rio Tinto, una compañía minera con sede en Londres. Clasificada como la compañía minera más grande del mundo, Rio Tinto tiene un registro interminable de violaciones de los derechos humanos y ambientales, que se extiende desde Indonesia a Sudáfrica (en la época del apartheid) y hasta Brasil.

El polémico “Proyecto Arenas Minerales” (Mineral Sands Project) implicaría la extracción de ilmenita, que se procesa para obtener dióxido de titanio, utilizado para producir un pigmento blanco para la producción de pintura, plástico y otros productos. Extrayendo un estimado de 350.000 a 700.000 toneladas de ilmenita por año, la mina produciría ganancias entre US\$ 25 y US\$50 millones anuales.

Si se aprueba la explotación de la mina, la misma abarcaría unas 6.000 hectáreas y se extendería a lo largo de más de 60 kilómetros de

costa. El sitio propuesto para la mina incluye más de dos tercios de los únicos bosques de litoral que existen en la costa sudeste de Madagascar. La diversidad vegetal del área minera es alta, e incluye 16 especies que existen solo en el lugar destinado a la mina. Si continúa adelante el proyecto de la mina, esas especies se enfrentan al peligro potencial de extinción; también está amenazado el lémur de cuello marrón, especie endémica local.

Varias acciones realizadas por la compañía y el gobierno indican que la mina se aprobará. En 1998, el gobierno malgache acordó reducir la tasa impositiva sobre el propuesto Proyecto Arenas Minerales a un dos por ciento, siendo la tasa estándar un cinco por ciento. La corporación Rio Tinto ya ha gastado como mínimo 30 millones de dólares en la evaluación de los depósitos minerales, y ha realizado una evaluación de impacto ambiental extensiva. El gobierno malgache ha acordado tomar la decisión de dar su aprobación o no al proyecto en diciembre de 2001, una vez que Rio Tinto haya finalizado la evaluación ambiental. (Por: Jason Tockman, Boletín del WRM N° 54, enero de 2002).

Madagascar: Minería promovida por el FMI amenaza bosques del litoral

Madagascar está considerado el decimoprimer país más pobre del mundo y una de las tres zonas claves en materia de biodiversidad. Originariamente habitado por distintos grupos de origen mixto de Asia y África que vivían de sus recursos a través de la caza, la cría de animales y la agricultura “tavy” (de roza y quema), a la “manera de los ancestros”, fue colonizado por los europeos en el siglo XVI y se convirtió en colonia francesa en el siglo XIX.

El país sufrió grandes pérdidas ambientales debido al madereo de bosques tropicales primarios con gran variedad de especies, utilizados para la construcción de carreteras y exportación de madera; se realizó la tala a gran escala de las zonas más fértiles para dar paso a cultivos comerciales, especialmente plantaciones de café.

Durante la época colonial, los franceses instrumentaron lo que llamaron actividades de “reforestación”, sobre la base de plantaciones de pinos y eucaliptos. También establecieron los primeros parques na-

cionales para la preservación de la flora y la fauna, que causaron consecuencias sociales y en última instancia ambientales perjudiciales. En la medida que se consideraba a la población local malgache como inferior e incompetente, los parques fueron administrados por colonos (que con frecuencia llenaron sus bolsillos gracias al madereo ilegal). Con un criterio de protección estrecho, se privó a los pobladores locales de sus medios tradicionales de subsistencia, generando dificultades extremas, resentimiento y condiciones que llevaron a intensificar los cultivos “tavy” para la subsistencia en otros lugares. Los franceses prohibieron los cultivos “tavy”, pero la decisión fue contraproducente porque se convirtieron en un símbolo de independencia y liberación contra el gobierno colonial.

La independencia llegó en 1960, y después de intentos fallidos de mejorar la situación económica del país, Madagascar finalmente se sumó a la privatización y la liberalización del mercado y a principios de los años 80 fue forzado por el FMI a adoptar programas de ajuste estructural para asegurar la financiación del Banco Mundial, con efectos funestos.

En los años 80, desastres “naturales” como sequías y ciclones asolaron el territorio de Madagascar. Las emisiones de carbono de los países industrializados tienen mucho que ver con el cambio climático mundial, incluso en el aumento de la frecuencia y severidad de las condiciones climáticas extremas. Si bien la práctica malgache de cultivos “tavy” contribuye naturalmente a las emisiones de carbono, su contribución al efecto invernadero mundial y por lo tanto a la exacerbación de desastres naturales es mínima en comparación con las emisiones de combustible fósil de los países más ricos.

La deforestación de Madagascar ha tenido impactos importantes por sí misma. La erosión y encenagado de ríos facilita el tipo de inundaciones devastadoras que sufrió la isla en el año 2000; las inundaciones a su vez contaminaron el suministro de agua, empeorando la epidemia de cólera que todavía causa estragos en toda la isla.

Al mismo tiempo que los bosques siguen bajo la amenaza de intereses empresariales occidentales como la minería, la presión del FMI continúa provocando la apertura de la economía a la inversión extran-

jera, por ejemplo a través de la eliminación de impuestos a las exportaciones. En esa dirección, el gobierno anunció recientemente su decisión de conceder un permiso ambiental a QIT Madagascar Minerals S.A. (QMM) (80% propiedad de Rio Tinto y 20% de un organismo del gobierno de Madagascar llamado OMNIS) para su proyecto de extracción de ilmenita en el sudeste de Madagascar, en la provincia autónoma de Tulear, cerca del pueblo de Fort-Dauphin (Tolagnaro).

Un informe elaborado por Amigos de la Tierra (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) para presentar al gobierno malgache, destaca el impacto de esa actividad. La minería del sector Mandena, según datos de la propia QMM, destruirá 203 hectáreas de bosques de litoral. Los cálculos de la compañía también podrían resultar erróneos si “se produjera una migración importante a la región sin la planificación adecuada”. La compañía confiesa en su propia Evaluación de Impacto Ambiental y social que “es ... difícil estimar con precisión el área que quedará en Mandena cuando finalicen las operaciones de minería”, aunque “las tendencias históricas nos llevan a creer que el bosque residual habrá desaparecido incluso antes del inicio de las operaciones de dragado”. El informe de Amigos de la Tierra calificó esta sección esencial de la evaluación como “de una especulación inaceptable. Se basa en la conjetura no fundamentada (por cierto, un falso silogismo) de que sin los elementos de conservación de la mina, todo el bosque de litoral desaparecerá en los próximos 20 años”.

También Conservation International ha denunciado que “la operación minera [podría causar] una pérdida neta de acceso a los bienes y servicios de los cuales depende la comunidad [del bosque tropical]”. Las reservas esenciales de recursos vitales podrían ser puestas en peligro tanto en calidad como en cantidad.

La compañía también se propone la construcción de una carretera nueva entre Fort Dauphin y Eholá, como componente integral del plan de desarrollo regional, omitiendo discutir su impacto sobre los bosques existentes y sobre la economía local y regional que probablemente será tragada por la economía de mercado con su conocido resultado de empobrecimiento. (Boletín del WRM N° 55, febrero de 2002).

Madagascar: Proyecto minero de Rio Tinto avanza... para peor

Madagascar es ampliamente reconocido como uno de los países con mayor riqueza ecológica del mundo, hogar de especies vegetales y animales únicas. Pero ya en los tiempos de la colonización francesa se introdujo en el país el modelo de producción orientado hacia la exportación. Se talaron bosques tropicales primarios para la construcción de carreteras y para exportar madera, y se despejaron áreas importantes de bosque en las zonas más fértiles para dedicarlas a cultivos comerciales, sumiendo así a una sociedad que practicaba principalmente la agricultura de subsistencia en la hambruna y la escasez.

Ahora, Madagascar está entre los países más pobres. Pero sería sabio que el lenguaje reflejara la verdad: el pueblo malgache no es pobre, sino que ha sido empobrecido, al igual que la mayoría de los países del sur.

Actualmente no hay países extranjeros que lleven abiertamente las riendas del gobierno, pero el colonialismo todavía tiene sus garras clavadas a fondo en la economía del país. Los piratas modernos han venido a "salvar" el país: el FMI preparó las condiciones (a través de los requisitos de liberalización que son condición de sus créditos) para que el gigante minero anglocanadiense Rio Tinto implemente un proyecto en la isla.

QIT Madagascar Minerals S.A.(QMM), una compañía malgache 80% propiedad de Rio Tinto y 20% del Estado, comenzó a realizar un estudio de factibilidad y en noviembre de 2001 el proyecto obtuvo el permiso ambiental.

En el marco de la nueva iniciativa de las transnacionales de procurarse una imagen verde y ecologista, Rio Tinto está empeñado en demostrar lo imposible: ¡que la minería es una actividad sustentable para el medio ambiente y los seres humanos! Pero todo el mundo sabe (o debería saber) cuáles son las intenciones reales de cualquier compañía comercial: producir ganancias. Según el Manual para la Acción Corporativa (Handbook for Corporate Action), este proyecto "es un ele-

mento esencial para el mantenimiento de la participación futura de Rio Tinto en el suministro de dióxido de titanio como materia prima”.

El gobierno de Madagascar dio luz verde y las obras que comenzarán en 2005. El resultado electoral del 2002 llevó al palacio presidencial a Marc Ravalomanana, un magnate joven que ha triunfado por su propio esfuerzo y que promete progreso. Favorito de occidente, el nuevo presidente está a favor de la mina de ilmenita de Rio Tinto, con la esperanza de que el proyecto genere empleo 2003 en EE.UU. con el secretario de estado estadounidense Colin Powell, quien afirmó que Washington apoyaría al Presidente Ravalomanana en sus “esfuerzos por instituir reformas políticas y económicas”. Un mes después la noticia es que el Banco Mundial otorgará un crédito de 32 millones de dólares de la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) para “ayudar a Madagascar a administrar sus recursos minerales en forma más efectiva”.

En una entrevista con un periodista de *The Guardian*, Serge Lachapelle, director ejecutivo de QIT, anunció: “Seguiremos adelante, pese a todo”. La advertencia surgió en el momento en que el proyecto recibía fuertes críticas de organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra, Conservation International y WWF.

El “programa sustentable” de la compañía consiste en que cada uno de los tres sitios mineros propuestos dejaría sin tocar un área de conservación que abarcaría en total el 10% del área utilizada para la extracción minera. Además, la compañía restauraría otro 10% de bosque, y en la superficie restante plantaría árboles de crecimiento rápido, como eucalipto, para proporcionar carbón y madera a los pobladores locales. Rio Tinto espera que estas acciones “ayuden a crear ecosistemas desde cero”. Lo que la naturaleza tardó milenios en realizar, podría restaurarse con una receta: salvar del dragado la capa superior de suelo, plantar 50% de la superficie con los llamados árboles pioneros que necesitan sol, seguido luego en un 40% con árboles que necesitan sol y sombra, y por último con un 10% con árboles que necesitan sólo sombra. ¡Hacen que parezca tan fácil jugar a ser Dios!

Amigos de la Tierra ya elaboró un informe en el que concluye que el proyecto de minería no sería compatible con un auténtico desarrollo

sustentable en el sudeste de Madagascar, ni en el país en su conjunto. Durante una década y media de preparación y estudios intensivos, este proyecto supuestamente “verde”, respaldado por un conjunto impresionante de expertos de todo el mundo, no ha logrado evitar la creciente degradación del medio ambiente que según las declaraciones de la compañía, la mina abordará y mitigará en forma drástica. ¿Es esto intencional? ¿Está QMM/Rio Tinto retrasando deliberadamente el inicio de las medidas de conservación y restauración para poder promover mejor la idea de que el proyecto de la mina es indispensable para lograr este objetivo?, pregunta la organización Amigos de la Tierra.

WWF también emitirá un informe sobre la mina a fines de este año. Un miembro de la organización que vive en Fort Dauphin, un poblado que se verá afectado por el proyecto de minería, afirmó que las estaciones de investigación que mostraron a *The Guardian* no eran más que una farsa. Las áreas de conservación estaban demasiado fragmentadas para ser viables y ejercerían presión sobre determinadas especies. Por otra parte, la compañía tampoco ha pensado en el conflicto potencialmente explosivo que se generaría al establecer como mínimo 800 trabajadores extranjeros en un poblado pequeño con 3.000 jóvenes desempleados.

Un recorrido por los poblados de los alrededores mostró que había opiniones encontradas: la mayoría de los pobladores, descalzos y vestidos con harapos, sabía que se estaba planificando una mina, pero no exactamente dónde ni cuándo, ni los impactos que podría producir. “Destruirá la agricultura tradicional, sin duda”, dijo Karae, jefe del poblado Houtotmotre. Después de consultar con otros ancianos, añadió: “Pero debido a la sequía no tenemos cultivos, o sea que puede ser que otra vez no tengamos nada que perder”. Albert Mahazoly, de 45 años, fue recientemente despedido de una plantación de sisal, prácticamente la única forma de conseguir ingresos en el poblado de Ankitry. Ahora su familia está entre los que hacen cola para recibir sacos de maíz del Programa Mundial de Alimentos. Esto ha sido una humillación que el Sr. Mahazoly no piensa tolerar por mucho tiempo. “Estoy listo para ir a la mina. Voy a hacer cualquier cosa que me pidan”, afirmó. La posibilidad de que su trabajo no calificado no sea requerido supuso un golpe duro. “Pero haré lo que sea”, dijo. Y de esta

forma se cierra el círculo: privados de su sustento, empobrecidos y saqueados. (Boletín del WRM N° 72, julio de 2003).

República Centroafricana: FMI, madereo y minería

Los bosques densos y húmedos de la República Centroafricana cubren aproximadamente cuatro millones de hectáreas. Si bien el país ha mantenido acuerdos de préstamo con el FMI que se remontan a la década de los 80, la presión aumentó cuando la República Centroafricana firmó un préstamo a tres años por US\$ 66 millones con el FMI en 1998. El FMI ha promovido que el país aumente la explotación de sus recursos forestales y minerales. “Los recursos minerales en la República Centroafricana hasta ahora han sido explotados en forma insuficiente...” afirma un documento marco elaborado por el FMI, el Banco Mundial y la República Centroafricana en 1998.

La República Centroafricana siguió los consejos del FMI, y entre 1993 y 1999 triplicó su producción total de madera rolliza. Aproximadamente la mitad de las áreas de bosques húmedos está ahora en manos de un grupo reducido de compañías madereras transnacionales. A pesar de los esfuerzos del gobierno por asegurar que las exportaciones sean de madera procesada como forma de captar los puestos de trabajo que se generan a partir de los productos con valor agregado, las exportaciones de troncos sin procesar han dominado cada vez más el sector, constituyendo hasta un 71% de las exportaciones de madera en 1999.

El madereo en la República Centroafricana tiende a ser de naturaleza selectiva. Si bien la ausencia de operaciones de corta a talar rasa puede dar la impresión de que el impacto sobre los bosques sea menor, en realidad el efecto ha sido que las empresas madereras han penetrado más profundamente en el bosque en busca de las especies más valiosas, en particular los árboles de sapelli, ayous, y sipo.

Una vez finalizadas las actividades de madereo, se producen daños adicionales ocasionados por los colonos y los cazadores furtivos (en busca de carne de animales y de marfil) que logran acceso a nuevas áreas a través de los caminos abiertos para el madereo. Esto ha tenido trágicas consecuencias para las poblaciones de gorilas, elefantes y rinocerontes de la República Centroafricana:

- La supervivencia de dos especies de gorilas en peligro de extinción está amenazada por la continua intrusión humana y la caza furtiva ilegal.
- La expansión del maderero comercial, la habitación humana y el comercio de marfil han llevado a la reducción del hábitat disponible para los elefantes del bosque, que migran entre la República Centroafricana, Camerún y el Congo. Se estima que en la República Centroafricana y el Congo se matan más de 200 elefantes cada año.
- El rinoceronte negro occidental, una de las especies más amenazadas del mundo, del que quizás queden menos de 10 animales sobrevivientes, ya fue eliminado de la República Centroafricana, debido a la caza furtiva excesiva.

También se aprobaron nuevos códigos de minería en el año 2000, de acuerdo a las instrucciones del FMI. En 2001, se aprobó una nueva ley financiera que dispuso la reducción de impuestos sobre la exportación de minerales. Se anticipa que estas medidas causarán daños adicionales a las áreas naturales del país. (Por: Jason Tockman, Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Congo. R.D.: Teléfonos celulares, destrucción de bosques y muerte

¿Alguien podría imaginar que los teléfonos celulares están manchados de la sangre de 3,5 millones de muertos desde 1998? ¿Y que lo mismo ocurre con los video juegos infantiles? ¿Y que las megatecnologías contribuyen a la depredación de los bosques y a expoliar los ricos recursos naturales de pueblos paradójicamente empobrecidos?

En el caso de estas nuevas tecnologías, lo que está en juego es el coltan. Se trata de los minerales columbio y tantalio (de ahí el nombre coltan), que en la naturaleza se presentan asociados. El tantalio es un metal raro, duro y denso, muy resistente a la corrosión y a altas temperaturas y excelente conductor de electricidad y calor. Utilizado en los microchips de las baterías de los teléfonos celulares para prolongar la duración de su carga, permitió la eclosión del negocio de

estos aparatos, cuya previsión para 2004 es de 1.000 millones de unidades. A esas propiedades se agrega que su extracción no requiere grandes costos—se obtiene cavando en el barro— y es fácil de vender, por lo que las empresas involucradas en el negocio obtienen suculentos dividendos.

Si bien se extrae en Brasil, Tailandia y principalmente Australia—primer productor mundial de coltan—, es en África donde reside el 80% de las reservas mundiales. Dentro de este continente, la República Democrática del Congo concentra más del 80% de los yacimientos, en los que 10.000 mineros se afanan a diario en la provincia de Kivu (este del Congo), un territorio ocupado desde 1998 por los ejércitos de Ruanda y Uganda. Se formó en la zona toda una serie de empresas asociadas entre los grandes capitales transnacionales, los gobiernos locales y las fuerzas militares (estatales o “guerrilleras”) en una disputa por el control de la región para la extracción del coltan y de otros minerales. La ONU no duda en afirmar que este mineral estratégico financia una guerra que la propia ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright llamó “la primera guerra mundial africana” (y entendemos por guerras mundiales aquéllas en las que las grandes potencias se reparten el mundo), y es una de sus causas.

En agosto de 1998, la Unión Congoleña por la Democracia (Rassemblement Congolais pour la Démocratie-RCD) inició una rebelión en la ciudad de Goma, apoyada desde entonces por el Ejército Patriótico de Ruanda (RPA). Desde entonces dos bandos se enfrentan en una contienda en la que por detrás del mito de las rivalidades étnicas se esconden las antiguas potencias coloniales que continúan saqueando las riquezas del África postcolonial. Por un lado, el RCD y los gobiernos de Ruanda y Uganda, apoyados por Estados Unidos, que cuentan con bases militares como la construida en Ruanda por la compañía estadounidense Brown & Root, subdivisión de Halliburton, donde se entrenan fuerzas ruandesas y se da apoyo logístico a sus tropas en la RDC, así como con helicópteros de combate del ejército estadounidense y satélites espías. El otro bando está compuesto por la República Democrática del Congo (liderada por uno de los hijos de Kabila, luego de que su padre fuese asesinado por ruandeses), Angola, Namibia y Zimbabwe.

Pero por detrás de los Estados son las empresas las que se reparten la zona. Se han creado distintas empresas mixtas con este fin, la más importante de las cuales es SOMIGL (Sociedad Minera de los Grandes Lagos), una empresa mixta creada en noviembre de 2000 e integrada por Africom, Premeco, Cogecom y Cogear, las dos últimas belgas (no en vano la RDC, ex Congo Belga, fue colonia de Bélgica). Otras son la empresa fantasma Cogear (con dirección ficticia en Bélgica), Masingiro GmbH (alemana), y varias que cesaron sus actividades en enero de 2002 por distintos motivos (caída del precio del coltan, condiciones de trabajo difíciles, suspensión de las importaciones de coltan proveniente de la RDC) y están a la espera de mejores condiciones: Sogem (belga), Cabot y Kemet (estadounidenses), la empresa mixta estadounidense-germana Eagles Wings Resources (ahora con sede en Ruanda), entre otras.

Las compañías de transporte son de propiedad de parientes cercanos a los presidentes de Ruanda y Uganda. En esas verdaderas zonas militares las compañías aéreas privadas ingresan armas y se llevan minerales. La mayor parte del coltan extraído es posteriormente refinado por un pequeño número de compañías de Alemania, Estados Unidos, Kazajastán y Lejano Oriente. La filial de Bayer, Starck, es la productora del 50% del tantalio en polvo a nivel mundial. Con el tráfico y la elaboración están vinculadas decenas de empresas, con participación en grandes empresas monopólicas de Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos. Y, faltaba más, el Banco de Comercio, Desarrollo e Industria, creado en 1996 con sede en la capital de Ruanda –Kigali–, ejerce de corresponsal del CITIBANK en la zona y mueve fuertes sumas de dinero procedente de las operaciones relacionadas con coltan, oro y diamantes. Treinta y cuatro empresas importan coltan del Congo; de ellas, 27 son occidentales, la mayoría belgas, holandesas y alemanas.

La compañía aérea belga Sabena, una de las vías de transporte del mineral desde Kigali (capital de Ruanda) a Bruselas, y asociada a American Airlines, anunció el 15 de junio la suspensión del servicio, fuertemente presionada por la campaña mundial “Que no haya sangre en mi celular” (“No blood on my cellphone!” o “Pas de sang sur mon GSM!”), que exhorta a no comprar teléfonos celulares con coltan por su repercusión en la prolongación de la guerra civil en la RDC. Como

consecuencia de esta campaña, el instituto de investigación belga International Peace Information Service (IPIS) produjo en enero de 2002 el documento “El apoyo a la economía de guerra de la RDC. Las empresas europeas y el comercio de coltan” (“Supporting the War Economy in the DRC. European Companies and the Coltan Trade”), que documenta el papel protagónico de las empresas como promotoras de la guerra a través de su cooperación con los militares y exhorta a priorizar la consideración internacional del comercio de coltan por encima de su aspecto local.

Las principales zonas de extracción de coltan se internan en zonas de bosque, como el bosque de Ituri. La irrupción de los comandos militares y de trabajadores (muchos de ellos antiguos agricultores desposeídos de sus tierras y recursos en busca de la promesa de ingresos un poco mejores), la instalación de los campamentos mineros, la construcción de caminos para llegar y salir con el codiciado mineral, todo conspira contra el bosque en su totalidad. Además de las funciones que cumplen los bosques para la región y las poblaciones aledañas, lo que otrora fueran tierras tradicionales de pueblos indígenas cazadores y recolectores como los Mbuti y lugar de reserva de gorilas y okapis —parientes de la jirafa—, hábitat de elefantes y monos, se ha convertido en escenario de guerra y depredación.

El periodista africano Kofi Akosah-Sarpong llega a decir: “El coltan en términos generales no está ayudando a la gente local. En realidad, es la maldición de Congo”. Revela que incluso hay evidencias de contaminación de este mineral que señalan su conexión con deformaciones congénitas de bebés de la zona minera, que nacen con las piernas torcidas.

Lejos de ser limpias e inocentes, estas tecnologías sobre las que se asienta y edifica la concentración de capitales que ha adquirido en la “globalización” su máxima expresión, contaminan y quiebran la trama de la vida en sus múltiples y ricas manifestaciones. Mientras tanto, sobre la tumba de los 2000 niños y campesinos africanos que mueren por día en el Congo ¿podremos, distraídos, seguir usando nuestros celulares? (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Senegal: Gobierno limita minería como forma de proteger los bosques

Senegal anunció que no otorgará nuevos permisos para la explotación de canteras y minería en las 233 zonas de preservación de bosques del país. El gobierno de Abdoulaye Wade declaró que alentará a las compañías que ya operan allí a trasladarse fuera de esas zonas, como parte del esfuerzo por reducir la deforestación y proteger el medio ambiente.

El ministro de Medio Ambiente Modou Fada Diagne declaró que su cartera iniciará en breve los contactos con las compañías de explotación de canteras que ya operan dentro de los cinco millones de hectáreas de reservas de bosques y parques nacionales del país, con vistas a desplazarlas de la zona. Agregó que el otorgamiento de todos los nuevos permisos de minería y explotación de canteras estaría condicionado a la aprobación de estudios de impacto social y ambiental y al compromiso de las compañías involucradas de restaurar el medio ambiente a su estado original una vez terminada la extracción de minerales.

La nueva política apunta particularmente a la reducción de la deforestación alrededor de la capital, Dakar, y las ciudades de Tambacounda, Louga, Thies y Kaolack. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Senegal perdió más de 45.000 hectáreas de bosques entre 1990 y 2000. Según los expertos en medio ambiente, la expansión descontrolada de la explotación de canteras en Senegal ha producido erosión costera, la reducción del área de tierra cultivable y problemas pulmonares y dérmicos a la población que habita en las zonas cercanas. Sin embargo, el presidente Abdoulaye Wade no ha otorgado ningún permiso de minería o explotación de canteras dentro de las reservas de bosque de Senegal desde que fuera elegido hace ya tres años.

Se espera que la postura del presidente Abdoulaye Wade y su ministro de Medio Ambiente Modou Fada Diagne aliente a otros líderes africanos a seguir su ejemplo y a luchar para que sus países no se desangren. Los llamados “conflictos” africanos (actualmente guerras declaradas con cientos de miles de muertos) son en su mayoría pro-

vocados y alimentados por los intereses mineros, y en muchos de esos casos, las corporaciones extranjeras juegan un papel preponderante. (Boletín del WRM N° 72, julio de 2003).

Sudáfrica: Las minas se alimentan de los bosques

El período colonial de la historia de Sudáfrica ha dejado como herencia una mentalidad que fomenta la explotación de todo lo que se pueda extraer de la tierra y exportar para alimentar el apetito rapaz de las industrias y consumidores del primer mundo. Éste fue el motor del imperativo colonial de Inglaterra, Portugal, Francia y España en los siglos pasados, y si bien hubo transformaciones políticas en los países africanos antes colonizados, las fuerzas económicas siguen siendo en gran medida las mismas. En todo caso, el logro de la independencia ha empeorado la situación, ya que los nuevos gobiernos, sometidos a la presión de equilibrar sus presupuestos, han permitido la explotación de minerales y otros recursos, para acelerar la aún no lograda independencia económica.

Sudáfrica es famosa por su oro y sus diamantes, pero tiene muchos otros minerales. La mayoría de ellos se exportan sin procesar. En un principio, la minería se realizaba principalmente mediante pozos de extracción que requerían soportes de madera. El auge del oro produjo la demanda masiva de madera para la infraestructura minera, la construcción de viviendas, vagones de transporte y durmientes para vías férreas, madera que fue extraída de bosques que en ese momento abundaban en la región oriental de Sudáfrica. Cuando se tornó obvio que los recursos eran limitados, se establecieron plantaciones de árboles exóticos. Teóricamente, la presión de los bosques fue transferida a las plantaciones, pero existen muchas formas en las que las plantaciones a su vez generan impactos negativos sobre las pocas zonas restantes de bosques naturales.

La tecnología y equipos modernos han hecho posible la extracción minera a escala mucho mayor. En lugares donde los minerales están ubicados cerca de la superficie, hay pozos abiertos masivos de los cuales se extrae el mineral. La mina a cielo abierto más famosa de Sudáfrica es el Gran Pozo de Kimberley, actualmente agotado. La minería a cielo abierto fue común a lo largo de la costa oeste, en la

hermosa zona de Namaqualand, y también en Cabo del Norte (Sishen) y en la Provincia del Norte (Phalaborwa).

También se realizó extracción con excavadoras en el litoral oriental, que está geológicamente activo en el sentido de presentar movimiento en la interface costera causado por el proceso natural de formación de dunas de arena. Este proceso ha estado activo durante más de 100.000 años, pero las dunas más recientes (hasta 25.000 años) han representado una oportunidad para la extracción de minerales. La primera extracción en gran escala de estos minerales—especialmente ilmenita, zircón y rutilo— se realizó en la costa sur de KwaZulu Natal (KZN) en la década de 1950. Esta operación produjo un valor económico limitado y fue abandonada.

A principio de la década de 1970, la empresa RBM (Richards Bay Minerals) comenzó a realizar actividades de extracción en las dunas cubiertas de bosque a lo largo de la costa noreste de KwaZulu Natal. Este proceso tuvo lugar en una época de aislamiento político, en que Sudáfrica estaba bajo la presión, tanto interna como externa, de terminar con el Apartheid. El país se volvió víctima de un gobierno ilegal y de los planes de sus aliados extranjeros de explotar cualquier tipo de mineral bruto disponible. Las compañías extranjeras que querían minerales recibían incentivos bajo la forma de subsidios, desgravación fiscal y reintegros a la exportación. Los costos ambientales derivados de estas operaciones impulsadas artificialmente fueron ignorados y efectivamente trasladados a las comunidades locales. Como consecuencia, futuras generaciones de sudafricanos deberán soportar las consecuencias de un medio ambiente gravemente dañado, y la pérdida del uso de los recursos que les fueron robados. El único beneficio tangible de estas actividades fueron las divisas extranjeras que tan desesperadamente necesitaba Sudáfrica para sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional y el bajo costo para las empresas mineras, aumentando las ganancias de las operaciones de procesamiento e industrialización en países como Canadá.

Si bien todo tipo de minería crea problemas en términos de destrucción ambiental y explotación de recursos (incluidos los recursos humanos), el ejemplo de Richards Bay Minerals es seguramente uno de los peores.

La escala y extensión de la destrucción ambiental deliberada que forma parte del proceso de minería continúa hasta hoy día. Es de una escala tan vasta que es difícil de imaginar. La expresión “mover montañas” podría dar una idea de la cantidad de tierra que se mueve y procesa en el curso de la extracción de minerales que se lleva a cabo en las dunas.

La compañía minera obtuvo contratos de prospección y extracción del gobierno sudafricano. Los acuerdos iniciales parecieron favorecer a los pobladores locales que habían sido trasladados fuera del área de extracción, pero con el transcurso del tiempo, los aspectos de los acuerdos que fueron diseñados para proteger y compensar a las comunidades locales han sido sistemáticamente eliminados.

El medio ambiente natural, en el que primaban bosques prístinos con árboles de más de trescientos años, fue destruido. Miles de hectáreas de este raro tipo de bosque fueron destruidas y reemplazadas por ensayo de restauración de la vegetación (que quizás algún día llegue a parecerse al bosque original), en las montañas de arena creadas en las áreas ya explotadas.

La compañía minera ha gastado cantidades astronómicas de dinero en propaganda, afirmando que sus esfuerzos por regenerar la vegetación han tenido éxito. Si se mira detrás de la fachada de relaciones públicas se puede ver una imagen muy diferente, una especie de Frankenstein ecológico. No han cumplido las condiciones de los contratos donde se establecía que el área a lo largo de la duna frontal (frente al mar) no debía ser explotada. En forma similar, áreas a lo largo de vías fluviales navegables y lagos que debían ser protegidas, han sido explotadas ilegalmente, y el gobierno no ha impuesto ninguna sanción a la compañía.

También existen muchos otros impactos, que van más allá del lugar de explotación minera, que son en gran medida ignorados. El hundimiento de las dunas producto del incumplimiento de respetar el margen de retiro a lo largo de las dunas costeras ha producido una grave erosión y ha vuelto las playas efectivamente inutilizables para el turismo y otras actividades recreativas. La autoridad pertinente, el Departamento Nacional de Minería y Energía, aparentemente ha ignorado

estos problemas, porque a su entender los beneficios percibidos por concepto de la minería superan los daños al medio ambiente.

Existe una gran falta de comprensión del valor intrínseco de los bosques y los beneficios que obtienen los seres humanos de las funciones ecológicas de los mismos. La no demostrada afirmación de la compañía de que su programa de vegetación permitiría finalmente reestablecer los bosques de duna originales sobre las montañas de arena ya procesada ha reducido la antipatía pública hacia sus operaciones. La misma mentira fue contada tantas veces que ahora incluso parece que personas con un buen nivel educativo son incapaces de ver la realidad. La compañía celebró acuerdos de financiación con instituciones académicas como el Mammal Research Institute (Instituto de Investigación sobre Mamíferos) de la Universidad de Pretoria, que consistentemente ha presentado hallazgos de investigaciones que parecen respaldar las declaraciones de éxito de la compañía. Sin embargo, existen muchos puntos de vista contradictorios, e investigaciones realizadas por científicos de la Universidad de Ciudad del Cabo han cuestionado las afirmaciones de aquellos que fueron pagos por la compañía minera. En términos de evidencia empírica, hay muy poca que apoye la noción de que el experimento actual llevará al reestablecimiento del bosque y matorrales destruidos.

Las futuras generaciones que habiten el área que está siendo explotada actualmente tendrán que pagar un alto precio por todo lo sucedido en los últimos 30 años. No habrá recursos minerales después de que termine la extracción, y el valor intrínseco del paisaje se habrá virtualmente eliminado cuando la compañía minera empaque sus maletas y se vaya en busca de lugares más productivos. El área que ha sido explotada en Richards Bay es ahora básicamente una pila de arena homogénea que ya no tiene la capacidad de funcionar ecológica o hidrológicamente como las dunas originales. La tierra no podrá sostener la agricultura como antes. No habrá recursos de madera dura para suministrar madera para instrumentos y vivienda. Las plantas y animales que proporcionaban medicinas y alimentos habrán desaparecido. Dos tercios del área será plantada con *Casuarina* exótica que tendrá cierto valor como leña para los pobladores locales pero con beneficios muy limitados. Los árboles indígenas de *Acacia natalitia* que se han plantado también tendrán un uso limitado como leña y la maleza quizás permita realizar algo de pastoreo.

Otra táctica de relaciones públicas de la compañía minera ha sido establecer “proyectos de comunidades” que supuestamente ayudarán a generar capacidades que permitan a los pobladores locales sostenerse después de que finalice la actividad de extracción. La capacitación brindada incluye oficios básicos y actividades agrícolas, que pueden ayudar en cierta medida, pero al mismo tiempo se han perdido las habilidades y conocimientos tradicionales. La intrincada relación entre los pobladores locales y su ambiente natural se verá reemplazada por la mentalidad explotadora de la corporación multinacional que ha dominado la economía local desde que comenzó la minería.

Pero para ese momento no quedará nada para explotar. (Por: Wally Menne, Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Tanzania: La minería del oro, otro problema para el Lago Victoria

El territorio de Tanzania comprende una gran variedad de paisajes, como montañas, sabanas, matorrales y bosques. Alrededor de 53.000 km² de su área está ocupada por lagos, siendo el mayor el lago Victoria. Con una superficie total de 69.490 km², el lago es compartido por Tanzania y Uganda. A Tanzania pertenecen 32.890 km², siendo el lago Victoria el segundo más grande del mundo. Constituye un recurso esencial para la vida de la región, que tiene una de las densidades poblacionales más altas de Africa. La agricultura, la pesca y la construcción de embarcaciones son las actividades económicas más significativas que dependen directamente del lago.

La salud ecológica del lago Victoria se ha visto profundamente afectada por la combinación de factores degradantes de diferente naturaleza, tales como la corta de la vegetación natural existente en sus orillas, el boom de la industria pesquera de exportación, la desaparición de varias especies de peces, la eutrofización del cuerpo de agua y su contaminación por vertido de efluentes de variado origen industrial. Los estilos de vida tradicionales de las comunidades costeras se han visto perturbados y se teme que, con la degradación del lugar, puedan desaparecer definitivamente.

Esta historia se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando los colonizadores ingleses empezaron a explotar la cuenca del lago

Victoria, y se continúa luego de la independencia política del país ocurrida en 1963. En la época colonial la selva que rodeaba el lago fue cortada y los pantanos que formaban parte de su complejo sistema hidrológico fueron desecados. En su lugar se establecieron cultivos de exportación, como té, café y azúcar. Con los años el área cultivada fue creciendo. Dado que para estos cultivos se adoptó la tecnología de la Revolución Verde, una parte significativa de los productos químicos utilizados va a parar a los ríos en la estación de lluvias y terminan en el lago. Ello provoca eutrofización y suministra nutrientes que posibilitan la explosión de la población de algas, lo que altera por completo la dinámica del cuerpo de agua.

El exagerado crecimiento de las actividades económicas en el lago y su zona circundante ha superado la capacidad de carga del ecosistema. No sólo las tierras de los alrededores, sino también el propio cuerpo de agua han sido objeto de sobreexplotación. Con la introducción de métodos de pesca modernos, la sobrepesca se convirtió en un problema y las capturas disminuyeron. Un estudio sobre el lago realizado en 1980 reveló una completa alteración en la composición de su biomasa. Como consecuencia la población de pequeños peces, que han sido tradicionalmente la fuente de sustento de las comunidades vecinas, fue diezmada por los grandes predadores y la sobrepesca.

Las industrias contaminantes —desde textiles y curtiembres a papele-
ras y cerveceras— localizadas en las proximidades del lago constituyen otra de las causas del actual estado de cosas. Un reciente estudio muestra que las plantas industriales localizadas en la parte de la costa del lago Victoria que corresponde a Tanzania producen diariamente dos millones de litros de efluentes y desperdicios industriales sin tratamiento, que van a parar al lago.

Para agravar todavía más el problema, ha comenzado en la zona una nueva actividad contaminante: la extracción de oro. Las empresas que están operando son Ashanti Goldfields de Ghana y AngloGold de Sudáfrica. El propio Presidente de Tanzania Benjamin Mkapa, quien inauguró la mina de oro de Geita —la mayor en el este de Africa— localizada a 20 km de la costa sur del lago Victoria, prometió más incentivos para la inversión en el sector.

Ambientalistas de Tanzania y Uganda han expresado claramente su oposición a la minería del oro y han advertido que existe un alto riesgo de que el cianuro de sodio, un poderoso veneno utilizado para la extracción del oro de la mena, termine en el lago transportado por los afluentes, provocando así un efecto negativo adicional al ya castigado sistema hídrico. Voceros preocupados desde el sector académico en ambos países también han criticado duramente al gobierno de Tanzania por el apoyo que está dando a un proyecto que puede hacer peligrar el ambiente del lago y la vida de las comunidades que viven en las orillas. Se ha señalado también que la minería traerá consecuencias económicas negativas tanto para la región como para el país, ya que la Unión Europea está por establecer una veda a la importación de pescado proveniente del este de Africa, debido a que se detectó al presencia de elementos tóxicos en la carne de los pescados. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Tanzania: Pérdida de biodiversidad promovida por el FMI

Tanzania es un país profusamente provisto de bosques, donde predominan los bosques abiertos de madera dura, pero también hay bosques cerrados y manglares. Tiene 33,5 millones de hectáreas de cubierta boscosa de gran riqueza en diversidad biológica, que representan un tercio de la superficie total del país.

Sin embargo, esta diversidad biológica está siendo amenazada por distintos procesos directos y subyacentes que han ocasionado el taldado de bosques a un ritmo de 400.000 hectáreas por año en las últimas dos décadas. Uno de esos procesos negativos se relaciona con la sustitución del bosque por actividades agrícolas y mineras, que a su vez tiene relación con las políticas orientadas a la exportación que están siendo ampliamente instrumentadas a nivel nacional y mundial.

Durante los últimos años, el gobierno de Tanzania ha dado prioridad al desarrollo de la producción agrícola destinada a los mercados de exportación. Atrapado en las altas y bajas de los precios de mercado fijados por poderosos grupos económicos, la caída de los precios de los principales rubros de exportación del país, más el costo cada vez mayor de los productos importados, ha conducido a Tanzania a sufrir el mismo destino de otros países del Sur. En 1986, firmó un acuerdo

de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y siguió firmando los acuerdos de préstamos del FMI durante los quince años siguientes, aumentando de esta forma el peso de la deuda. A fines de la década de los 90 los servicios anuales de la deuda promediaban los US\$ 438 millones, el 37% del total de los ingresos por exportación.

Los préstamos del FMI asociados a los Programas de Ajuste Estructural (PAE) requieren la instrumentación de una serie de políticas como el apoyo a la agricultura a gran escala orientada a la exportación (por ejemplo, mediante la eliminación de los impuestos a los productos agrícolas de exportación) o como el apoyo la extracción de piedras preciosas y otros minerales por parte de empresas nacionales y extranjeras.

Entre 1980 y 1993, Tanzania perdió el 25% de sus bosques. El madeiro, la deforestación y la minería están entre las causas principales, pero casi la mitad de la pérdida de bosque se debió a los cultivos para la exportación. En el distrito de Simanjiro, por ejemplo, más de 50.000 hectáreas de tierra se talaron para dar paso a la producción de porotos. Ochenta establecimientos agrícolas a gran escala, de entre 90 y 13.000 hectáreas, producen estos cultivos, que se exportan fundamentalmente a Holanda, y han determinado el desplazamiento de los Maasai que pueblan la zona.

Mientras tanto, la agricultura para el consumo doméstico sigue siendo escasa y el modelo de producción dominante ha implicado el desplazamiento de miles de pobladores locales, problemas de tenencia de la tierra, y más pobreza. También, en la medida en que las compañías adquieren grandes concesiones, los pastores y agricultores locales pierden acceso al derecho a la tierra y al agua, y los bosques han sido saqueados para obtener el combustible requerido por las minas. De esta forma, se han perdido los bosques como formas de sustento de los pueblos y también como hábitat de la fauna y flora silvestres.

Casi 10 años han pasado desde el lanzamiento del Convenio sobre Diversidad Biológica. En estos 10 años, los PAE han continuado imponiendo sus políticas en Tanzania, reforzando la división de trabajo en el mundo: los productos básicos los producen los países empobre-

cidos y ricos en biodiversidad del Sur para alimentar los mercados consumistas y ricos en dinero del Norte. El FMI y el Banco Mundial lo saben. El gobierno de Tanzania lo sabe. Las compañías transnacionales lo saben. Los gobiernos de los países consumidores lo saben. Pero las tendencias destructivas no solamente no disminuyen, sino que por el contrario, crecen.

Este escenario muestra claramente que los países del Sur como Tanzania, que se ubican del lado de los países más débiles del “orden internacional”, son forzados a seguir las políticas impuestas por las instituciones multilaterales, y sus países líderes del Norte. Esas políticas son inherentemente insustentables, ya que implican la destrucción o la degradación de la diversidad biológica de los países en todos los niveles. La voluntad política dentro de los gobiernos del Sur de conservar la diversidad biológica es por esta misma razón un requisito previo necesario pero insuficiente para la conservación de la biodiversidad. Ése es precisamente uno de los temas centrales que resulta necesario abordar en el Convenio sobre Diversidad Biológica. ¿Tendrán los delegados el coraje político necesario para abordarlo en el encuentro en La Haya? (Boletín del WRM N° 56, marzo de 2002).

Tanzania: Banco Mundial apoya saqueo minero canadiense

En agosto de 1996 las autoridades del gobierno de Tanzania, en colaboración con una compañía de propiedad canadiense llamada Kahama Mining Corporation Ltd. (KMCL), desalojaron de sus tierras por la fuerza a más de 400.000 mineros artesanales, campesinos, pequeños comerciantes y sus familias en un área llamada Bulyanhulu en la región de Shinyanga, en la zona centro oeste de Tanzania. KMCL era en ese momento una subsidiaria de propiedad total de Sutton Resources, empresa con sede en Vancouver, Canadá.

Los desalojos fueron la culminación de una lucha de dos años entre los mineros y la compañía por el control de los depósitos de oro en Bulyanhulu. Pocos días después de la operación de desalojo surgieron graves denuncias según las cuales más de 50 mineros artesanales murieron al ser enterrados vivos en pozos de extracción cuando las autoridades y los funcionarios de la compañía decidieron rellenar los pozos.

El gobierno de Tanzania se negó a investigar las atrocidades denunciadas. Nunca se pagó ninguna indemnización ni por pérdida de propiedad ni por las vidas humanas. Por el contrario, los abogados tanzanos Tundu Lissu y Rugemeleza Nshala, de la organización Equipo de Acción Ambiental de Abogados (Lawyers' Environmental Action Team - LEAT), que encabezaron una campaña sobre los asesinatos denunciados, fueron acusados de sedición por sus acciones, con el argumento de que debían proporcionar evidencia que apoyara las denuncias.

En marzo de 1999, la Barrick Gold Corporation, otro gigante de la minería canadiense adquirió los depósitos de Bulyanhulu al comprar la Sutton Resources y su subsidiaria tanzana. La Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones (MIGA, por su sigla en inglés), brazo de seguros de riesgo político del Grupo del Banco Mundial, y la Corporación para el Desarrollo de la Exportación (Export Development Corporation - EDC) de Canadá garantizaron el proyecto, cubriendo la inversión contra los riesgos de restricción de transferencias, expropiación, y guerra y disturbios civiles.

Desde entonces Barrick Gold ha construido una mina de oro subterránea ultramoderna en Bulyanhulu, que fue abierta con bombos y platillos por el presidente tanzano Benjamin W. Mkapa en julio de 2001.

Sin embargo, en una presentación a la Revisión de Industrias Extractivas (EIR, por su sigla en inglés) del Banco Mundial realizada en Maputo, Mozambique entre el 13 y el 17 de enero de 2003, el Equipo de Acción Ambiental de Abogados (LEAT) proporcionó amplias pruebas sobre los impactos sociales, ambientales y económicos de esta mina. Esta presentación resume sus hallazgos de la siguiente manera:

“La inversión se hiergue como un monumento al saqueo de los recursos naturales de países pobres como Tanzania, a manos de las corporaciones multinacionales de los países industriales ricos del norte; y al empobrecimiento y la consecuente marginación de las comunidades principalmente rurales en las áreas ricas en minerales de Tanzania y otros lugares. Es un testimonio viviente del principio que dice que cuando los intereses corporativos multinacionales están en juego, las nociones de ley, buena gestión y respeto por los derechos

humanos son de importancia secundaria y se pueden hacer a un lado cuando resulte conveniente. Constituye una prueba de la acusación de que el Banco Mundial casi siempre actúa contra los intereses de la vasta mayoría de los grupos pobres y marginados de la sociedad. El Grupo, por tanto, no puede seguir exhibiendo credenciales de alivio de la pobreza mientras mantiene su apoyo a proyectos socialmente ruinosos como la mina de oro de Bulyanhulu". (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica: Empresa minera canadiense pretende silenciar oposición

Una vez más una empresa extranjera es motivo de conflicto para los pobladores de la Provincia de Puntarenas. La empresa Río Minerales, subsidiaria de la transnacional minera canadiense Wheaton River Minerals Ltda. recibió a comienzos de este año los permisos ambientales para abrir una mina de oro a cielo abierto en Bellavista de Miramar para extraer 60 mil onzas anuales de oro durante 7 años mediante la técnica de lixiviación en pilas utilizando cianuro.

Para desarrollar todo este proceso de minería a cielo abierto, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie, dando como resultado cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Las consecuencias son: la producción de grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, los impactos sobre las poblaciones aledañas y la transformación completa del entorno junto a una severa modificación de la morfología del terreno.

Sabedora de los graves impactos que acarrea la minería de oro a cielo abierto, Marta Ligia Blanco Rodríguez, educadora y regidora de Montes de Oro, provincia de Puntarenas, se declaró contraria a las actividades de Río Minerales, al igual que el alcalde, Roberto Aguilar y el resto de los regidores comunales. Para la regidora, este proyecto arries-

ga la fuente de agua y el derecho a una vida sustentable para su cantón. Como resultado de su oposición, actualmente enfrenta una demanda judicial presentada por la empresa minera. El poder de la empresa canadiense parece ser tan grande, que en setiembre de 1999 fue exonerada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (con la excusa de que ya existía un estudio aprobado en 1986), exigiéndosele tan solo un Plan de Gestión Ambiental.

Según pobladores de la zona, el juicio contra Marta Blanco tiene claros fines intimidatorios, refleja el poder de las transnacionales y responde a intereses creados en torno a la explotación minera; intereses que no son, por supuesto, los de la comunidad de Montes de Oro. Esta afirmación se confirma cuando Río Minerales presenta la demanda por “difamación de persona jurídica”, sosteniendo que la regidora responsabilizó a la empresa por “la tala de miles de árboles”, cargo que la empresa descarta por tener permiso para las excavaciones.

La empresa alega además que la regidora Blanco y sus compañeros del Concejo tienen por política “oponerse a todos los proyectos”. Por su parte, la regidora municipal cuenta con el apoyo de los vecinos de la comunidad, que no quieren que se establezca la mina de oro a cielo abierto. Ante un intento de conciliación, la empresa minera pretendió que la regidora renunciara a su puesto para evitar que tanto ella como el Concejo Municipal en pleno continuaran oponiéndose a la apertura de la mina. El intento fracasó ante la clara intención de coartar la libertad de expresión de los representantes comunales.

Sonia Torres, vecina de Miramar, señaló que este juicio se enmarca dentro de las políticas que siguen las transnacionales con las personas en cualquier parte del mundo que se opongan a sus intereses. “Hace 4 años yo también fui enjuiciada en ese mismo tribunal por no haber cedido a las medidas de amedrentamiento hechas por empleados de Posiciones Gran Galaxie S.A., subsidiaria de la empresa minera canadiense Rayrock, dueña del proyecto minero Bellavista en ese entonces.

Parece que estas compañías se han acostumbrado a enjuiciar a quienes ejercen la libertad de expresión en defensa del medio ambiente, la

salud y la vida en Costa Rica. ¿No será hora de que el gobierno de este país, aparentemente tan preocupado por la temática ambiental, se ponga del lado de quienes defienden el ambiente y detenga la expansión de esta actividad minera destructiva? (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Costa Rica: El pueblo dice Sí a la Vida, No a la Minería

Los habitantes de la zona norte de Costa Rica, organizados en el Frente Norte de Oposición a la Minería, se oponen al proyecto Minero Crucitas para la explotación de oro en minería a cielo abierto, y organizó una marcha en San Carlos, bajo la consigna “Sí a la Vida, No a la Minería”. Reclaman la suspensión de los proyectos mineros y el impulso a un desarrollo sostenible, ecoturístico y agroindustrial de las comunidades fronterizas hasta ahora abandonadas.

El Proyecto Minero Crucitas tiene su antecedente en la solicitud inicial del permiso de exploración presentada el 30 de agosto de 1991 por Maurice Eugene Coates, geólogo canadiense, representante de la empresa Vientos de Abangares S.A. En 1995, se certificó que la totalidad del capital social de la referida empresa pertenecía a la sociedad Placer Dome de Costa Rica, cuyo presidente era en ese momento William Earl Threlked, geólogo estadounidense y tenía como tesorero a Robert Pease, geólogo de origen canadiense. A su vez, la totalidad del capital social de Placer Dome de Costa Rica S.A. pertenecía a Placer Dome Latin America Limited, que tenía como apoderados a William Earl Threlked, estadounidense, y Robert Bruce Pease, canadiense. En 1998, Placer Dome Latin America inició el proceso de venta de su proyecto en Costa Rica, a través de la venta de las acciones de Placer Dome de Costa Rica, que se concretó en 1999 a favor de la empresa canadiense Lyon Lake Mines Ltd. que modificó su razón social pasando a ser Industrias Infinito Sociedad Anónima (IISA).

El 13 de marzo, IISA presentó ante la Secretaría Técnica Nacional ambiental (SETENA) el Estudio de Impacto Ambiental del referido Proyecto Minero Crucitas. El hecho de que este estudio haya sido presentado a la SETENA —en el marco de la oposición comunal, nacional y de los dos candidatos que disputan actualmente la presidencia del país— es interpretado como una maniobra para adelantar todo lo que se pueda el

proceso, pues la compañía es consciente de que la oposición es total y que el proyecto sólo es apoyado por el actual gobierno, que ha puesto a disposición de las transnacionales los recursos del país.

Los derechos mineros en el área —que abarca 305,9 hectáreas— rigen por un período de 10 años a partir del 16 de enero del 2002, y la tecnología que se utilizará será la de minería a cielo abierto con lixiviación por cianuro, prohibida actualmente en muchos lugares del mundo por la contaminación de gran alcance que acarrea. Además de la degradación que la actividad supondrá para el ambiente local —en particular por el uso de cianuro— requerirá también la tala de una importante área de bosque.

Conscientes de los daños ecológicos y sociales que esa actividad traerá a la región, las autoridades comunales han declarado que “no puede ser posible que se permita la destrucción de nuestra flora y fauna a cambio de una limosna que a fin de cuentas es lo que le quedará a nuestro país”.

En el esquema de índices inversión-beneficios, apertura total del mercado, venta irrestricta de los recursos naturales, privatización y extranjerización de las empresas, poco lugar queda para las consideraciones ambientales y sociales. Pero el pueblo costarricense que sufre esas políticas, sabe que en la defensa de su naturaleza le va la vida. Y en eso están. (Boletín del WRM N° 56, marzo de 2002).

Costa Rica: Resolución esperanzadora para moratoria a minería y petróleo

El 11 de marzo de 2002, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de Costa Rica, rechazó de plano el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Industrias Infinito S.A. (IISA) para el Proyecto Minero Crucitas, el cual se encuentra ubicado dentro del área de la Concesión de Explotación Minera otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en el gobierno anterior.

El MINAE otorgó la concesión de explotación el 17 de Diciembre del 2001, mediante la Resolución R-578-2001-MINAE. Dicha resolución

fue otorgada en completa reserva. El decreto fue publicado y dado a conocimiento público el 30 de enero de 2002, dos días antes de las elecciones, lo que hizo casi imposible interponer una apelación. Pero sí reaccionaron las comunidades del norte costarricense, quienes en una gran movilización el 22 de marzo de 2002 repudiaron la decisión y dejaron en claro que no permitirían que se realizara una actividad tan nociva como la autorizada.

El Proyecto Minero Crucitas tiene su antecedente en el Permiso de Exploración Minera otorgado —también furtivamente— el 1º de octubre de 1993. Con fundamento en dicho permiso se llevaron a cabo obras de exploración durante un período de cinco años, cuyo resultado fue el descubrimiento de un depósito de oro importante. El 13 de Diciembre de 1999 se presentó a la Dirección de Geología y Minas la solicitud de Concesión de Explotación Minera, solicitud a la cual se le asignó el expediente administrativo No. 2594. Los derechos mineros en el área contemplados en la Concesión rigen por un período de 10 años a partir del 16 de enero de 2002.

En la reciente resolución, SETENA fundamenta su rechazo en base a razones legales como lo es no presentar cédula jurídica e introducir un cambio en el uso de la tierra. Entre los aspectos técnicos manejados figura que el área de influencia está mal definida, que para SETENA debió ubicarse en la subcuenca del río San Juan. Desde el punto de vista social debió preverse que la situación de pobreza genera la aparición de nuevas poblaciones y tampoco se tuvieron en cuenta los antecedentes de conflictos que provocó el intento de exploración anterior. La importancia turística y arqueológica de la zona es un aspecto social importante que también fue ignorado. Un elemento que merece rigurosidad y ha sido tratado laxamente, según SETENA, es el referente al uso y manejo de sustancias tóxicas como el cianuro; por otro lado no existe un Plan de Cierre y los planes de contingencia presentan deficiencias.

La resolución cuestiona también que los estudios en los que se apoya la EIA son desactualizados, la evaluación de campo es insuficiente y se omiten datos de la composición florística. Para la plenaria de SETENA, la eliminación de 108 hectáreas de bosque primario y de 117 de bosque secundario promoverá la desaparición de especies en peligro de extinción.

Otro aspecto importante es lo referente a los compromisos internacionales, donde el país se ha comprometido con los demás países centroamericanos a la evaluación conjunta de los proyectos trasfronterizos; en ese sentido la EIA no hace ninguna valoración sobre los efectos en la gran cuenca del río San Juan, que es la zona limítrofe de Costa Rica con mayores conflictos diplomáticos, jurídicos y migratorios. Más aún, la resolución deja claro que en el área de influencia debió incluirse el territorio nicaragüense.

OILWATCH Costa Rica evalúa esta resolución como un paso más hacia la moratoria: “Estamos contentos por esta resolución y esperamos que se cierre la posibilidad de abrir la minería de oro en Miramar de Puntarenas, y que además la SETENA rechace de plano la explotación petrolera en la Zona Norte. Con esto y la derogatoria de la ley de hidrocarburos y una ley de moratoria, Costa Rica estará a la vanguardia internacional”, argumentó Mauricio Álvarez, facilitador de OILWATCH . (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Costa Rica: Golfo de Nicoya y agua potable de la región en peligro por minería de oro

La minería ha sido una de las actividades que el reparto internacional del trabajo le ha impuesto a los países del Sur ricos en recursos naturales. Pero en ninguno de los casos eso ha redundado en el bienestar general del país, y ha sido más bien una maldición.

En Costa Rica, el Comité de Oposición a la Minería de Oro es activo en la denuncia de los numerosos y devastadores impactos de la minería, que tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos.

El 30 de enero del 2001, pese a la fuerte oposición de las comunidades y la municipalidad, el gobierno de Costa Rica autorizó a la compañía canadiense Glencairn la realización de un proyecto de minería de oro a cielo abierto con lixiviación (es decir, la aplicación de productos químicos, en este caso cianuro, para filtrar y separar el metal del resto de los minerales). El proyecto prevé la extracción de 560 mil onzas de

oro en un período de poco más de 7 años, con la producción secundaria de 15 millones de toneladas de desechos.

La mina de Glencairn ha sido abierta a 14 kilómetros del Golfo de Nicoya, un estuario marino de gran belleza, con islas rocosas y acantilados, un extenso hábitat de manglares y una biodiversidad excepcionalmente alta. El golfo tiene cuatro islas designadas como Refugios de Vida Silvestre, así como el Parque Nacional Palo Verde, el más importante humedal de Costa Rica que alberga a una gran variedad de animales en peligro de extinción. Además, más de 5 mil pescadores artesanales dependen de ese Golfo.

Las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) implican generalmente eliminar la vegetación de la zona, dinamitar extensamente y remover la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Estas actividades pueden haber sido las causantes de los recientes deslizamientos de tierra en el río Ciruelas, en la zona próxima a la mina, ya de por sí propensa a deslizamientos de tierra, sobre todo en la época de las inundaciones. El peligro agregado de esto es que esa tierra contaminada con cianuro, al llegar al río puede comprometer, además, el suministro de agua potable de la ciudad de Miramar y los ricos estuarios del Golfo de Nicoya.

A partir de las denuncias del Comité de Oposición a la Minería de Oro, la Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (CEUS del Golfo) ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) que investigue dichos deslizamientos, que pueden tanto ser resultado del impacto de las construcciones en el frágil terreno de la región como el retiro de tierra para hacer las edificaciones, reclamándole a las autoridades que “paren la minería de oro en Miramar porque no se hacen negocios destruyendo el agua y el Golfo de Nicoya.” (Boletín del WRM N° 80, marzo de 2004).

Honduras: No es oro todo lo que reluce

El sol se posa sobre el Valle de Siria; la temperatura está arriba de los 38 grados centígrados. Siempre fue caliente, es un valle, pero jamás antes el calor había alcanzado los niveles que hoy presenta; de los

ríos y quebradas ya sólo queda el recuerdo, ahora parecen carreteras desérticas y polvorientas como resultado de la deforestación y la extracción de miles de metros de arena.

Son apenas los efectos iniciales de la explotación minera que realiza la Mina San Martín en el municipio de San Ignacio, situado a unos 70 kilómetros al norte de la capital. Aquí, en este municipio y propiamente en la aldea Palos Ralos, se comprobó que existe un enorme yacimiento de oro que oscila entre las 600 mil y el millón de onzas del precioso metal.

Sólo en el año 2001 la empresa Entre Mares extrajo más de cien mil onzas de oro, para lo cual utilizaron unas 6 mil toneladas de cianuro de sodio, que representan 16,5 toneladas al día para procesar 18 mil toneladas de broza diariamente. Con esos datos, se estima que la transnacional tuvo ingresos brutos superiores a los 25 millones de dólares en ese período.

Se escucha el ruido ensordecedor de las máquinas que trituran las piedras, de donde se levanta una espesa nube de polvo de varios metros de altura. Un cerco de alambre de más de un kilómetro de largo, con serpentinas de seguridad, encierra la Mina San Martín.

La seguridad en el interior de la empresa es extrema. Guardias armados por todos los sectores de la planta, garantizan la normalidad requerida por los ejecutivos de Entre Mares, una empresa subsidiaria de la transnacional Glamis Gold Ltd. De Reno, Nevada, Estados Unidos, que cuenta con una concesión para explotar la Mina San Martín.

Grandes y poderosas máquinas circulan dentro de la planta; allí se observa a la intemperie la broza regada con cianuro. Predomina el color rojizo de la tierra. Antes hubo una montaña en la aldea de Palo Ralo, hoy ya no existe. Ya no hay árboles, ya no hay vida, sólo queda el recuerdo de la montaña que una vez fue.

El Valle de Siria ha cambiado, jamás volverá a ser el mismo; unos 7 mil árboles fueron talados y muchos miles más están por correr la misma suerte. Las fuentes de agua se agotan y más temprano que tarde, ningún ser podrá sobrevivir al ambiente desértico de la zona,

gracias a una compañía minera y a las autoridades estatales, como la Secretaria de Recursos Naturales y el Ambiente, que avalan el desastre ecológico que existe.

Cuando llegó a Honduras, la empresa Entre Mares trajo consigo un saco de ilusiones para los moradores del valle; llenaron de esperanzas a muchos diciéndoles que el pueblo iba a prosperar y que ganarían bastante dinero para resolver sus problemas económicos.

Pero no fue así. A dos años del inicio de las operaciones, aún no se ve por ninguna parte el desarrollo prometido; los beneficios son ínfimos comparados a la devastación masiva de los bosques y de las fuentes de agua para extraer oro.

Adin Escoto, originario de San Ignacio y conductor de transporte pesado dijo que hace dos años llenó la solicitud de empleo, pero aún no le dan la oportunidad de trabajar en la empresa minera: “cuando ellos vinieron, prometieron que habría empleo para muchos de nosotros; yo prefiero trabajar aquí porque aquí nací y aquí vive mi familia, pero trabajo en Olancho para una compañía maderera y sólo vengo de pasada al pueblo”, enfatizó.

Recalcó además que la empresa minera no ha cumplido las promesas que le hizo al pueblo de San Ignacio. “Dijeron que iban a pavimentar las calles y continúan igual; prometieron empleo y sólo para unos pocos hay, en su mayoría de otros lugares y además, han dañado el ambiente”, expresó Escoto.

“Cielos Abiertos” es una técnica minera que consiste en afectar la superficie de la tierra, incluyendo los bosques y removiendo diariamente miles de toneladas de tierra y piedra para extraer el oro, el cual se encuentra en partículas microscópicas, según lo explica Juan Almeydares Bonilla, médico, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, catedrático universitario y un eminente ambientalista.

“La técnica de ‘Cielos Abiertos’ ocasionará la liberación de metales pesados altamente tóxicos al ambiente y ello aumentará el deterioro ecológico y las enfermedades”, asegura preocupado.

Este método –sostiene el ambientalista– lo utiliza la minera porque el oro se encuentra en partículas microscópicas, no en vetas ni concentrado en un sólo lugar, por lo tanto, no puede ser sacado por métodos subterráneos (túneles). De esta manera, la compañía remueve diariamente unas 18 mil toneladas de tierra para extraerles el mineral, bañando la broza con cianuro y con miles de litros de agua.

“La empresa taló miles de árboles durante las operaciones de construcción; contaminó de polvo los pulmones de la población y ahora los deja sin agua”, lamenta Almendares, criticando a la vez, que las autoridades no hacen nada para detener esa destrucción.

Para Almendares, este método es el más dañino para el medio ambiente y para los humanos; primero, por la destrucción de la flora, por el desequilibrio ecológico que ocasiona a la fauna y por las grandes cantidades de agua que se necesitan para la extracción del mineral y finalmente, por el uso en grandes cantidades de cianuro, uno de los venenos más mortales que existen.

Para el psicólogo Daniel Matamoros, el excesivo ruido producido por las máquinas causa varios efectos, tanto para el personal, como para los pobladores que viven cerca de la mina. “A nivel fisiológico, el ruido causa estrés, haciendo que la persona no pueda descansar normalmente por la constante tensión.

Asegura además, que el polvo produce enfermedades respiratorias, pulmonares, y bronquiales, así como sordera y enfermedades alérgicas, que pueden volverse crónicas por falta de atención médica.

“Cuando las personas tienen expectativas favorables, pero al poco tiempo descubren que son falsas, se sienten resentidos, afectados e impotentes porque no pueden hacer nada para volver a su estadio anterior”, dijo el experto al referirse al traslado que ocurrió con toda la comunidad de Palo Ralo a otro sector del municipio. “Se sienten afectados porque les han cambiado su forma de vida y roto sus tradiciones”, aseveró el psicólogo.

Sin embargo, nada de eso parece preocupar ni a la empresa minera ni a los organismos del gobierno y la situación es resumida irónicamente

te por Almenares quien dice: “La operación con cianuro a ‘Cielos Abiertos’ la usan porque le resulta más económica a la empresa; es un proyecto que vela por los intereses de la minera y no por los del país; y es lógico que así sea, cuando lo más importante es acumular riquezas y no las condiciones ambientales y humanas”. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Honduras: Asesinato de periodista enfrentado a la minería

El día miércoles 26 de noviembre del 2003 fue asesinado de un disparo en la cabeza el periodista Germán Antonio Rivas, director gerente de la Corporación Maya Televisión de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en la región occidental de Honduras, en la frontera con Guatemala. Rivas era director del noticiero “CMV-Noticias”, que se caracteriza por su contenido crítico frente a la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional “El Guisayote de Ocotepeque”, en el departamento del mismo nombre. En dicho programa se cuestionaban las actividades de la empresa minera por el impacto sobre el ambiente y la conservación de los recursos naturales.

El 24 de febrero de ese mismo año Rivas había sobrevivido a un intento de asesinato y había recibido reiteradas amenazas de muerte por teléfono y en forma anónima. Estaba convencido de que el ataque sufrido estaba relacionado con sus informes televisivos sobre los daños ecológicos causados por la empresa minera Minerales de Occidente (MINOSA), particularmente sobre un derrame de cianuro en el río Lara, afluente del río Higuito que abastece de agua potable a la ciudad de Santa Rosa de Copán. “No me atrevo a asegurarlo [que haya sido blanco del atentado por las denuncias] pero no lo descarto. Decirlo pone en grave riesgo mi vida y la de mi familia”, admitió Rivas.

En un caso similar, Marisol Tábora, integrante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), una coalición de la sociedad civil, fue amenazada judicialmente por efectuar investigaciones acerca de la muerte de peces y otras especies, tras el derrame de cianuro en las cercanías de la mina ubicada en el municipio de La Unión, Copán.

La policía ha guardado silencio con relación al asesinato de Rivas, argumentando que no ha encontrado un móvil para el atentado. ¿Aca-

so los antecedentes no alcanzan para por lo menos considerar a la industria minera como posible sospechosa? (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

Jamaica: Deforestación vinculada a minería, agricultura y turismo

Jamaica, la tercera isla más grande del Caribe, está dominada por una extensa cordillera. La isla estuvo en algún momento casi completamente cubierta por bosques, que se dividen en cuatro tipos principales, cuya distribución está determinada por el patrón pluviométrico: bosque seco en las montañas y tierras bajas del sur, bosque intermedio en las tierras altas del centro del país, bosques húmedos y muy húmedos en Cockpit Country y en las montañas John Crow, y bosques tropicales muy húmedos (en tierras bajas y montañas).

Actualmente las tierras bajas de Jamaica han sido taladas principalmente para dedicarlas a la agricultura, y en total se han perdido más de 75% de los bosques originales. Los bosques que quedan son en su mayoría secundarios y solamente el bosque de montaña en la parte más remota e inaccesible de la isla ha sobrevivido sin alteraciones.

El huracán Gilbert sembró el caos en Jamaica en 1988, con lluvias torrenciales y vientos fortísimos. A continuación hubo grandes inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron un gran número de muertos, personas sin vivienda y gran parte de la infraestructura del país destruida. Pero no toda la culpa debe atribuirse a la naturaleza. La creciente deforestación de las montañas jamaicanas y la erosión del suelo resultante empeoró el impacto del huracán.

El país tiene un triste record en cuanto a la velocidad de la deforestación, en gran parte debido al rápido crecimiento de la industria turística y la expansión de la agricultura, principalmente las plantaciones de café. En la medida que la industria turística reemplaza playas y bosques por medio de la construcción de nuevos hoteles y carreteras, las prácticas agrícolas inadecuadas sobre las tierras en donde antes crecían los bosques producen una erosión del suelo acelerada que causa sedimentación aguas abajo e inundaciones. Como una reacción en cadena, esto determina la degradación de los arrecifes de coral que rodean la isla.

Pero las minas de bauxita, la segunda industria generadora de divisas después del turismo, son consideradas como la principal causa de deforestación en Jamaica. Por un lado, esta actividad destruye grandes áreas de bosque debido a que la bauxita se extrae en minas a cielo abierto, que requieren la remoción total de la vegetación y del horizonte superficial del suelo. Pero al mismo tiempo, las minas de bauxita son causa indirecta de deforestación debido a la apertura de vías de acceso dentro de los bosques. Una vez que los caminos de acceso han sido despejados, los madereros, los productores de carbón, los comerciantes de varas para tutores destinados a la producción de ñame hacen su entrada, devastando los árboles en las áreas mineras y en sus alrededores. Por lo tanto la minería es responsable por graves procesos de deforestación mucho más allá de las propias áreas mineras.

Kaiser, propiedad de la compañía del mismo nombre con sede en EE.UU., Alumina Partners (Alpart), propiedad conjunta de Kaiser y Norwegian Hydro, y Alcan, propiedad de Alcan Canada y el gobierno de Jamaica, son los actores principales cuyos intereses en las minas preceden a cualquier otro de acuerdo a las leyes jamaicanas.

En los últimos años, la deforestación ha llevado al deterioro de más de un tercio de las cuencas de Jamaica, secándose ríos y arroyos, produciendo escasez de agua en ciudades y poblados. La diversidad de la fauna y la flora también es amenazada por la destrucción de los bosques, lo que lleva a la pérdida de las formas tradicionales de vida, el conocimiento sobre las plantas locales y su uso medicinal y de otros tipos.

Aunque existen actualmente planes y proyectos para el manejo sustentable de los bosques existentes y la restauración de las áreas degradadas a través de actividades de plantación de árboles, resulta evidente la necesidad de abordar las causas directas y subyacentes que han llevado a la deforestación, para crear las condiciones apropiadas para lograr esa meta. Y si las minas de bauxita son la “causa principal de deforestación en Jamaica”, entonces ése deberá ser el punto de partida para revertir el proceso. (Boletín del WRM N° 50, setiembre de 2001).

Nicaragua: Minera canadiense acusada de derrame de cianuro

El municipio de Bonanza pertenece a la Región Autónoma del Atlántico Norte. Ya desde 1880, en que se descubrieron yacimientos de oro, la región sufrió el embate de la “fiebre del oro”. Esto incentivó además fuertes corrientes migratorias de muchas partes del mundo en la búsqueda del metal. Actualmente, las principales actividades económicas de la región siguen siendo la explotación y el procesamiento industrial y artesanal de material aurífero, además de la agricultura de subsistencia.

El 14 de enero de 2003, en la empresa canadiense HEMCONIC y/o Greenstone se produjo un derrame de solución cianurada –producto del proceso industrial para la obtención del oro– equivalente a 30.433 galones, con concentraciones mayores a cien mg/litro. El accidente se originó por fallas mecánicas y fue denunciado públicamente por los habitantes de la localidad. Según técnicos de la empresa, el agua cianurada vertida en el río Bambana tenía un porcentaje de 0.9 ptm (partes por millón), lo que no representa peligro para los seres humanos.

Sin embargo, promotores de salud de la comunidad indígena de Prinzubila, municipio de Prinzapolka, informaron de la muerte de siete niños que se sospecha pueden haberse envenenado por tomar agua del río Bambana, en cuyas riberas está ubicada esta comunidad. También se informó de la muerte de otros cinco niños de la comunidad vecina de Wasa King (municipio de Rosita).

Una comisión del Ministerio de Salud hizo un seguimiento de los casos y concluyó que ninguno de ellos tuvo como causa el envenenamiento. Pero la organización Centro Humboldt –que ha monitoreado las actividades de la empresa minera desde su inicio– conformó un equipo técnico con el fin de constatar la magnitud del evento. Los días 24 y 25 del mes de enero de 2003 se procedió a tomar cinco muestras con el fin de conocer la concentración de esta solución, que luego fueron enviadas al Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (CIRA), para su debido análisis. De los resultados obtenidos surgió que, a excepción de la muestra 4, todos los análisis presentaron re-

sultados por encima de la norma, lo que demostraba que la mezcla derramada contenía cianuro.

HEMCONIC tiene desde 1994 la concesión del lote BONANZA, con una superficie de 12.400 hectáreas, por un período de 50 años. El sistema de procesamiento principalmente utilizado por la empresa es el de lixiviación. Ya en 1995 la mina de Bonanza descargaba soluciones de cianuro a los ríos Tunky, Concha Urrutia y Bambana, causando daños al medio ambiente y a las comunidades aledañas a la zona, básicamente comunidades rurales e indígenas que se abastecen del agua procedente de fuentes superficiales, con lo cual están más directamente expuestas.

En 1999, el Centro Humboldt había recurrido a la Procuraduría Ambiental para denunciar formalmente a la empresa HEMCONIC por la contaminación de los mantos acuíferos y ríos aledaños a la laguna cianurada. El Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua realizó una inspección y muestreo de la laguna cianurada de la mina y concluyó que el proceso de tratamiento era inadecuado para reducir las concentraciones de cianuro previo a su descarga.

En el año 2000, el Centro Humboldt presentó ante la 1ª sesión del Honorable Tribunal del Agua, desarrollada en la ciudad de San José, Costa Rica, denuncia formal en contra del Estado nicaragüense y la empresa minera canadiense HEMCONIC y/o Greenstone, por la no supervisión estatal en las tareas de monitoreo y por el descargue de cianuro en los ríos Tunky, Concha Urrutia y Bambana, atentando con la calidad de vida de los pobladores y afectando los recursos hídricos del municipio de Bonanza. El veredicto del Tribunal fue a favor de la demanda.

En este nuevo episodio de contaminación, Centro Humboldt presentó el 20 de febrero a los medios de comunicación los resultados del análisis que había realizado. También envió al Ministerio del Ambiente los resultados y una carta solicitando su pronunciamiento al respecto, y denunció los hechos ante la Procuraduría del Medio Ambiente, solicitando ejecutar acciones correctivas al caso. Hasta la fecha no se ha conocido alguna acción por parte de dicha Procuraduría Ambiental. Mientras tanto, las poblaciones locales siguen so-

medidas al riesgo de envenenamiento por cianuro. (Boletín del WRM N° 74, setiembre de 2003).

Panamá: Minería, bosques y derechos de los pueblos indígenas

El istmo de Panamá está ubicado en América Central, una de las regiones de mayor diversidad natural y cultural del mundo. Sus distintos ecosistemas son un componente esencial de esa riqueza. Varios pueblos indígenas han encontrado su hogar y su fuente de subsistencia en los bosques. En Darién, San Blas y Panamá Oriente viven los Emberá-Wounan y los Kuna, mientras que los Teribe ocupan la zona de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, junto con los Ngobe-Bugle, que también habitan en parte de las provincias de Veraguas y Chiriquí Oriente. Según el Censo Nacional de 1990, la población indígena de Panamá está integrada por 180.700 personas que representan el 7,8% de la población total del país.

Según los registros existentes, desde 1850 el área de bosques ha disminuido a gran velocidad. En ese año se estimó que los bosques cubrían el 91% del área del país, incluso después de haber sufrido un severo proceso de deforestación producido por la colonización española, que comenzó en el siglo XVI. Durante el siglo XX la disminución fue muy notoria. Por ejemplo, entre 1950 y 1960 la cobertura boscosa se redujo de 68% a 58%. Según las estimaciones oficiales, en 1992 el área de bosques se redujo a 3.358.304 hectáreas, que representan 44% del área del país. Actualmente la tasa de deforestación se estima en 75.000 hectáreas por año.

Si bien actualmente Panamá tiene el segundo porcentaje más alto de bosques primarios de Centroamérica y el porcentaje más alto de áreas protegidas (un tercio del área total de bosques) de la región, todos los demás bosques primarios de Panamá están amenazados, y junto con ellos el rico patrimonio natural que contienen y los territorios y el sustento de los pueblos nativos. El maderero industrial, la construcción de carreteras, la producción de cacao y la minería han sido identificados como las causas principales de la deforestación y la degradación de los bosques. La construcción del Canal de Panamá y la proyectada carretera panamericana a través de la región del Darién en la frontera

entre Panamá y Colombia son ejemplos claros de megaproyectos que ya han tenido consecuencias destructivas o se espera que produzcan graves impactos sobre los bosques.

Como también sucediera en la vecina Costa Rica y Nicaragua, la minería ha producido y sigue produciendo efectos desastrosos en distintas zonas del país, generando al mismo tiempo conflictos con las comunidades indígenas que viven allí. En 1994, el 25% del territorio del país estaba ocupado por concesiones o por solicitudes de concesiones mineras y en la actualidad algo más de la mitad del territorio nacional está sujeta a solicitudes de concesión para la exploración minera. Muchas minas están ubicadas en los bosques, y el 70% de las concesiones ha sido otorgadas en territorios indígenas en San Blás, Boca del Toro, Veraguas y Chiriquí. El Consejo Panameño de Recursos Naturales informó que el 70% de los aproximadamente 20.000 km² del territorio nacional que se considera tienen potencial minero están en tierras reclamadas como propias por grupos indígenas. El gobierno ya aprobó grandes concesiones para la extracción de cobre y oro dentro de los territorios de los Ngobe-Bugle y de los Kuna. En el caso de Kuna Yala, las concesiones otorgadas a la empresa canadiense Western Keltic Mines Inc. abarcan más del 50% del territorio Kuna. A su vez otra serie de empresas también canadienses –como PANACOBRE, subsidiaria de la Tio Mine Resources Inc, Adrian Resource, Innet Mining Corp– poseen importantes concesiones en territorio Ngobe Bugle.

Se pueden mencionar varios casos en Panamá que demuestran las consecuencias destructivas que tiene el desarrollo de la industria minera sobre los bosques y los pueblos que viven en ellos. Por ejemplo, el Proyecto de Cerro Petaquilla en la Provincia de Colón implicará la pérdida de 2.500 hectáreas de bosques como mínimo, para crear la infraestructura de la propia mina y las carreteras que permitirán el acceso a la zona. También se teme que el proyecto afecte a los vecinos Parque Nacional El Copé y Reserva Forestal Donoso. Esta provincia tuvo la segunda tasa de deforestación más alta entre 1986 y 1992, representando el 22,35% del total de pérdida de bosques. Se ha producido otro conflicto importante debido a la explotación de cobre en la provincia de Chiriquí, entre la empresa canadiense Panacobre S.A. y el pueblo Ngobe-Bugle, el grupo indígena mayoritario del país. Aunque

el Congreso Nacional de los Ngobe-Bugle rechazó el proyecto, el gobierno otorgó a la compañía una concesión por veinticinco años, que incluso se puede prorrogar. El pueblo indígena Kuna, la segunda nación nativa más numerosa de Panamá, también debe enfrentar la agresión de los proyectos mineros en sus territorios tradicionales.

El tema central para detener esas actividades mineras destructivas y proteger los bosques que aún quedan es el reconocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a sus territorios—incluyendo el subsuelo—recursos y cultura. El primer reconocimiento de un territorio indígena por parte del gobierno panameño fue el de la Comarca San Blás y se produjo en 1938. En 1983 se reconoció la Comarca Emberá-Wounan en la provincia de Darién, en 1996 la Comarca Kuna de Madungandi en la provincia de Panamá, y en 1997 el territorio de los Ngobe-Bugle, que fue resultado de una larga lucha de esa nación indígena contra los intereses de los mineros, madereros y criadores de ganado que se oponían a la demarcación y reconocimiento del territorio indígena.

Los pueblos indígenas son quienes están en mejor posición para ser los guardianes de los bosques y por tanto, para favorecer la conservación de los mismos. Es necesario entonces seguir tomando medidas que apunten al reconocimiento del derecho de esos pueblos a sus territorios. (Boletín del WRM N° 46, mayo de 2001).

AMÉRICA DEL SUR

Argentina: Poblaciones y bosques amenazados por empresa minera canadiense

La ciudad de Esquel, se encuentra enclavada sobre las márgenes del arroyo Esquel entre cerros cuyas faldas forman un imponente anfiteatro, realzado por bosques marginales de la región de los bosques subantárticos y en particular de la llamada selva Valdiviana, en la Provincia de Chubut, al Oeste de la Patagonia Argentina. Sus 31.000 habitantes viven y disfrutan de un entorno que ellos describen como una ciudad cuya naturaleza sorprende al viajero todas las estaciones

del año por paisajes de inusitada belleza, árboles milenarios, ríos y cientos de espejos de agua protegidos por enigmáticos bosques. Muchos de sus habitantes se sienten orgullosos de anunciar que cultivan el respeto y el cuidado por la naturaleza. Pertenecen a una comarca donde quienes “habitamos aspiramos a que nuestros hijos y nietos puedan disfrutarla”.

Este sentimiento parece no ser de mucha importancia para quienes promueven la instalación de una planta de tratamiento minero con cianuro para la explotación de oro a sólo 5 kilómetros aguas arriba de esta hermosa ciudad. Lamentablemente, éste sería sólo el primero de muchos otros proyectos de extracción minera, que afectarán a toda la región andino patagónica y en general a toda la cordillera de Los Andes de Argentina y Chile, debido a los privilegios otorgados a las multinacionales a través del Tratado de Integración Minera, firmado en diciembre de 1997.

La extracción del oro es una de las actividades más destructivas y contaminantes. La de Esquel en particular sería extremadamente depredadora, ya que se realizaría dinamitando 42.000 toneladas de roca por día, de las cuales se molerían 3000 toneladas hasta reducirlas a polvo, que serían luego tratadas con cianuro de sodio disuelto en agua. Como consecuencia, en forma inmediata aumentaría el consumo de agua, sin que se haya estudiado el potencial agotamiento de arroyos, lagunas y vertientes usadas en los campos y la ciudad. Habría además problemas sonoros por las explosiones y generación de polvos, especialmente durante el verano y riesgos de accidentes de todo tipo durante el transporte y uso de estas enormes cantidades de cianuro, considerado uno de los venenos más potentes que se conocen, además de ácido sulfúrico y otros compuestos letales. La calidad de vida de los habitantes, se vería enormemente afectada, tal como lo afirma un reciente informe elaborado por la Red Nacional de Acción Ecológica, RENACE. Se comprometería además irreversiblemente el potencial turístico de la región conocida internacionalmente por su aún naturaleza prístina.

Haciendo uso de las facilidades y privilegios otorgados por el gobierno –tales como la exoneración total del pago de impuestos– la Meridian Gold, multinacional de capitales canadienses, dueña del 90% del pa-

quete accionario de la empresa argentina El Desquite SA, obtendría ganancias que superarían los 1.000 millones de dólares “a cambio de unas docenas de puestos de trabajo y regalías prácticamente inexistentes”, como también afirma el informe de RENACE.

La empresa no ha escatimado medidas para convencer a la población local de que no habrá contaminación ni fugas tóxicas, haciendo alarde del mito de la responsabilidad ambiental de las empresas canadienses. Sin embargo, es sabido que esto es solamente un mito, ya que “las peores repercusiones sociales y ecológicas de los últimos 15 años se pueden atribuir a algunas de las mayores empresas de Canadá, respaldadas por sus más respetadas instituciones privadas, financieras y gubernamentales”, tal como lo afirma el informe del WRM sobre empresas mineras canadienses.

En ambos informes se pueden encontrar ejemplos de la irresponsabilidad con la que han actuado las empresas y los desastres ambientales producto de ella. Sin embargo, las empresas utilizan todo tipo de métodos para que la población no reaccione mientras ellas “vacían las montañas”: los llevan de visita a otros países, dan charlas para la comunidad y amenazan a quien se oponga. Algunos han mordido ingenuamente el anzuelo de las promesas de trabajo, que ya están desmintiendo las autoridades mineras y del supuesto desarrollo, que como ya ha ocurrido, es para pocos a expensas de los bienes públicos.

En Esquel se ha repetido el mismo esquema. Invitados por la empresa, un grupo de vecinos viajó recientemente a Antofagasta, al Norte de Chile a visitar un emprendimiento minero que se realiza en medio del desierto más árido del mundo, imposible de ser comparado con esta región, vecina al Parque Nacional Los Alerces, donde existen bosques (de *Fitzroya cupressoides*) de más de 2000 años, un verdadero sagrario natural.

Por otro lado, el Auditorio Municipal de Esquel fue el escenario de una vergonzosa conferencia –por el cúmulo de errores e inexactitudes– dictada por un representante de Dupont, una de las empresas que posiblemente venda el cianuro, mientras representantes locales de la Dirección de Minas repartían folletos de Dupont y el propio Director ayudaba con la proyección de las imágenes.

Para completar el panorama, la Dra. Silvia González, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, recibió amenazas telefónicas luego de haber presentado en escuelas de la ciudad un trabajo científico sobre los efectos del cianuro.

Pese a todo, esta comunidad, al igual que la de Tambogrande en Perú, de Los Encuentros en Ecuador, del Planalto en Colombia, de San Carlos en Costa Rica, está dispuesta a defender sus tierras, sus bosques y su calidad de vida y a exigir a las autoridades nacionales que no permitan el saqueo. (Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Argentina: Pequeña gran victoria contra empresa minera canadiense

Los habitantes de la ciudad de Esquel, una pequeña ciudad argentina en la Provincia de Chubut, llevan adelante una importante lucha en defensa de sus bosques y su ambiente. Un número cada vez mayor de habitantes de la ciudad y de toda la comarca andina y de organizaciones regionales y nacionales se oponen al proyecto minero a cielo abierto y la instalación de una planta de tratamiento de cianuro para la extracción de oro que estaría ubicada a sólo ocho kilómetros de esta ciudad rodeada de lagos y milenarios bosques de alerces.

A pesar de que los vecinos de Esquel están sufriendo todo tipo de amenazas, no les ha faltado fuerza e imaginación para enfrentar a la transnacional canadiense Meridian Gold y su subsidiaria El Desquite, beneficiarias en este proyecto. Manifestaciones, actos, marchas, reuniones, charlas, declaraciones y hasta conciertos de *rock* se han organizado en estos últimos meses contra la minería de oro en la región. También se han creado varias páginas web para dar difusión sobre el tema y buscar apoyo internacional para la campaña. Se han aprovechado además las escasas herramientas legales de que disponen los afectados en estos casos. En el mes de diciembre los vecinos de la ciudad presentaron una Acción de Amparo Ambiental, usada para proteger todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución y en especial "El derecho de todo habitante a defender su medio ambiente".

El 19 de febrero se ha recibido una grata noticia. El Juez en lo Civil Dr. Claudio Alejandro Petris ha ordenando la paralización urgente de to-

dos los trabajos, obras y actos en curso de la Minera El Desquite en el Cordón Esquel, y la prohibición de iniciar nuevos trabajos y obras hasta tanto se cumpla con todos los recaudos de la ley Provincial 4032 de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario.

“Ahora queda por resolver la cuestión de fondo que básicamente consiste en declarar la ilegalidad de todos los trabajos realizados, ordenar la total recomposición del ambiente alterado, y la aplicación de una multa a los particulares y/o empresas responsables por el monto de hasta un 5% del total del proyecto. Si bien será una batalla judicial muy dura, creo que ésta es una señal muy positiva” comenta un vecino del lugar.

Esta resolución sienta un precedente muy importante en cuanto a la aplicación de las leyes provinciales, como la 4032 de Impacto Ambiental, que exige en todos los casos la realización de audiencias públicas, mientras que el código de minería, que las empresas habían logrado modificar a su favor, no las exigía. Lo que había venido ocurriendo hasta ahora era que los estudios de impacto ambiental eran meros trámites burocráticos que venían con el sello de aprobado de antemano. Es importante además, dado que esta resolución afecta potencialmente a cualquier otro proyecto minero, por lo menos de la Provincia de Chubut.

Es por ello que los pobladores de Esquel consideran que la decisión judicial es una “pequeña” aunque a la vez gran victoria. Para ellos es muy claro que el poder de las empresas, tanto económico como político, es muchas veces capaz de ganar batallas en los tribunales de justicia, logrando veredictos en su favor que poco tienen que ver con la justicia. Por tal razón, la lucha en Esquel continúa, ahora tonificada por la reciente decisión judicial. (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Argentina: Ecos de plebiscito contra explotación minera canadiense

Aún retumban en las calles de la patagónica Esquel los festejos de la contundente victoria del NO, que obtuvo el 81% de los votos en el plebiscito no vinculante realizado el pasado 23 de marzo. La monstruosa maquinaria propagandística empresario-gubernamental no pudo

convencer a la población para que diera su apoyo a la explotación de la mina de oro y plata ubicada a unos 6 kilómetros de esa ciudad. La urbe valletana más importante de la cordillera chubutense, habitada por unas 30 mil personas, dijo NO y tembló la Argentina Minera.

Tanto el gobierno provincial como el municipal –partidarios del SÍ– debieron anunciar que respetarían la voluntad popular. Sin embargo, el Consejo Federal Minero (CoFeMin) –integrado por representantes de las provincias mineras– desconoce la voluntad popular y la canadiense Meridian Gold Inc. afirma que no renuncia a sus pretensiones extractivas.

Con el envión de la victoria, el 29 de marzo de 2003 cientos de esquelenses clausuraron simbólicamente el camino de acceso al yacimiento. A su vez, el 2 de abril el Concejo Deliberante local promulgó una ordenanza por la que declara a Esquel Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable. A través de ella se prohíben las “actividades industriales y mineras que empleen técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas o cualquier otra técnica que requiera el uso de explosivos e insumos tóxicos, como asimismo técnicas que liberen en el ambiente y dejen disponibles en el mismo sustancias de cualquier índole que por sí mismas o en combinación con otras pudieran resultar tóxicas y/o nocivas a la salud humana, al conjunto de los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, paisaje, fuentes de energía convencional y no convencional y atmósfera en función de los valores del ambiente”.

Mediante dicha ordenanza también se declaró Área de Paisaje Protegido Especial las zonas de cerros, cumbres y filos situados dentro del ejido municipal, con el objeto de preservar sus características naturales.

Durante algunos días Esquel, ignota ciudad para millones de argentinos, fue la nota de tapa de varios periódicos. De golpe estaba integrada a la aldea global y desaparecieron los 2000 kilómetros que la separan de Buenos Aires, sede del poder político y económico. La devaluación de la moneda argentina fue la señal esperada por las corporaciones para el inicio del ciclo minero, un nuevo ciclo de la economía del país, según estimaciones de la Subsecretaría de Minería. Pero el emprendimiento elegido como hito nacional es resistido por un pueblo.

La política de promoción minera iniciada en la década del 90, con la explotación de los yacimientos auríferos Bajo La Alumbreira –en Catamarca– y Cerro Vanguardia –en Santa Cruz– sufría un inesperado revés.

Algunas miradas ya se han posado en la provincia de San Juan, ubicada en el centro oeste de la Argentina, por el malestar que genera en la población la contaminación en la zona del Valle del Cura. Tras una investigación realizada por el Consejo de Minería local en el yacimiento aurífero Lama se encontraron residuos tóxicos enterrados en alta montaña. Según ese organismo la compañía de capitales canadienses Barrick Exploraciones Argentina S.A. no cumplió compromisos asumidos en el Informe de Impacto Ambiental, por lo que deberá pagar una multa de \$240 mil (US\$80 mil).

Ante este hecho la publicación Prensa Geo Minera, vinculada a intereses del sector, advirtió meses atrás: “De no elaborar (Barrick) un concreto programa de información sobre la protección del medio ambiente y la relación con las comunidades ambos emprendimientos (auríferos de San Juan, Lama y Veladero) podrían ver en peligro su puesta en marcha, tal como sucede en la actualidad con el proyecto de explotación de oro Esquel, propiedad de la compañía Meridian Gold”.

En tanto en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, continúan las denuncias por filtraciones en el dique de cola en el emprendimiento aurífero de Bajo La Alumbreira. La contaminación por drenajes ácidos de la cuenca del Río Vis Vis pondría en peligro la reserva de agua más grande del norte argentino.

El plebiscito en Esquel no tiene fuerza legal. Es cierto. Pero posee el enorme poder de constituir el sentir popular libremente expresado contra la destrucción ambiental resultante de la actividad minera. Representa a su vez el sentir de otras poblaciones que en Argentina sufren los impactos de la minería y que ahora ven a Esquel como un ejemplo a seguir. Con su voto en el plebiscito, los pobladores de Esquel han puesto al sector minero en general y a una empresa canadiense en particular, en una situación de gran debilidad. (Por: Hernán Scandizzo, Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Argentina: Diferentes formas de lucha contra la minería

Más de 7 meses lleva la lucha del pueblo de Esquel, en la Patagonia argentina, contra las pretensiones de la canadiense Meridian Gold Inc. de explotar una mina de oro en el Cerro 21. De las movilizaciones y los “escraches” (manifestaciones masivas frente al domicilio de las personas responsables) al plebiscito popular y las acciones legales, de la clausura simbólica del acceso al campamento y las pintadas y murales a los “pu trawun” (parlamentos) del Pueblo Mapuche y el Foro del NO. La ciudad cordillerana ubicada a 2000 km al sudoeste de Buenos Aires se ha convertido en un referente nacional de la lucha contra la minería y el avance de las corporaciones en la vida económica y política del país.

Esta localidad del noroeste de la provincia de Chubut fue sede del “Primer Foro del NO” organizado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel (VAE). Entre los días 4 y 7 de junio confluyeron allí miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, indígenas, ambientalistas, asamblearias, de mujeres, medios comunitarios de comunicación y plataformas de lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las consecuencias de la globalización neoliberal. La misma lucha contra la minería y la preservación del medioambiente que permitió a muchos esquelenses comprender las demandas del Pueblo Mapuche y solidarizarse con él, despejó el terreno para que durante 4 jornadas el ¡No a la Mina! también fuera ¡No! al ALCA, al remate de la Patagonia, a los desalojos de las familias aborígenes, a la entrega de los recursos naturales, a la judicialización del conflicto social, a la guerra. Todos esos NO que sintetizaban un Sí a la Vida.

Si bien en los últimos meses en la ciudad no se registraron nuevas amenazas contra los vecinos devenidos referentes ‘antimina’, ni intimidaciones por parte de los miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y otros sectores cercanos al gobierno provincial, la tensión se trasladó a las comunidades mapuche. A mediados de marzo la policía local intentó desalojar a la familia Fermín de la comunidad Vuelta del Río. El operativo incluyó la destrucción total de una vivienda, aunque el juez de Instrucción de Esquel, José Colabelli, dijo haber ordenado sólo el ‘lanzamiento’ de los originarios.

Actualmente existe la posibilidad de que se inicie un juicio político al magistrado por presunta aversión hacia el Pueblo Mapuche y porque su esposa es titular de una mina de cuarzo en la región.

En esa misma área, noroeste de Chubut, unas 20 familias de la comunidad originaria Cushamen recibieron notificaciones de cateo por parte de la empresa Teck de Argentina (subsidiaria de la canadiense Teck Gold), que está interesada en localizar minerales de primera y segunda categoría en una superficie de 10 mil hectáreas. También a la comunidad Cerro Centinela (en la Cordillera de los Andes) llegaron notificaciones: la pretensión de catear otras 10 mil hectáreas, pero ya no de árida (aunque viva) estepa, sino de bosques y nacientes de agua.

En tanto, quedó en evidencia la engañosa legislación provincial sancionada después del plebiscito del 23 de marzo. En efecto, recientemente se supo que muy pocas ONGs ambientalistas participarán de las comisiones de reglamentación de la norma que prohibiría la minería a cielo abierto y la lixiviación con cianuro, aunque contemplaría zonas de excepción. Los vecinos de Esquel y la comarca quedarían excluidos del debate por no tener personería jurídica. El ánimo de las autoridades una vez más quedó en evidencia: jugar a escuchar al pueblo pero gobernar a sus espaldas.

Por otra parte la reciente llegada del justicialista Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación despierta expectativas dispares. Su origen patagónico alimenta las esperanzas de algunos, al igual que su aparente honestidad en la gestión pública. Sin embargo, otros no olvidan que siendo gobernador de Santa Cruz inició la explotación del yacimiento aurífero Cerro Vanguardia.

Actualmente las obras en el Cerro 21 se encuentran paralizadas por un dictamen judicial, aunque ello no implica que Meridian Gold haya renunciado al Proyecto Cordón Esquel. La compañía aclaró que se tomará un año para rediseñar su estrategia comunicacional y revertir su mala imagen; hasta lograrlo trasladaría su enclave administrativo a un pueblo de la meseta.

El 4 de diciembre de 2003, nuevamente miles de personas de ciudades y parajes de las provincias de Chubut y Río Negro marcharon junto a los vecinos de Esquel para decir No a la Mina.

Asimismo, la contagiosa entereza de los esquelenses, que no se doblegaron ante las amenazas y los ataques contra su local de “Vecinos Autoconvocados por el NO”, y la gravedad de la amenaza minera posibilitaron que el 24 y 25 de noviembre de 2003 se reunieran en Buenos Aires delegaciones de Catamarca, San Juan, Chubut, Tucumán, Córdoba y Río Negro y conformaran la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. El encuentro permitió que se conocieran problemáticas del centro, oeste y noroeste de Argentina.

En tanto, los vecinos de Esquel siguen buscando nuevas formas y espacios para expresar y enriquecer su oposición a la explotación de la mina de oro. De la asamblea local al debate sobre la sociedad global, del plebiscito al Parlamento Mapuche, de la marcha al mural. La resistencia al proyecto minero adquiere diferentes formas y continúa proyectándose hacia el resto del país. (Por: Hernán Scandizzo, Boletines del WRM N° 71 y 77, junio y diciembre de 2003).

Bolivia: Áreas protegidas a disposición de las petroleras

Con un proceso de participación pública muy dudoso en algunos casos y despertando enérgicas reacciones en contrario en otros, el proyecto de Ley de Áreas Protegidas ha sido sometido a consulta. En general se rechaza su pretensión de legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras a áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas, el Parque Amboró y el Madidi. Las organizaciones campesinas de Cochabamba dijeron que si las áreas protegidas son para las petroleras o empresas de extracción de madera, entonces prefieren que no existan.

Las empresas petroleras acuden a los más altos niveles de gobierno para hacer aprobar proyectos de exploración sísmica, tendido de ductos y explotación petrolera dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, tratando de reducir al mínimo el cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales y sin respetar los planes de manejo y zonificación. A ello se suma el otorgamiento de concesiones mineras ligadas al poder político. Ocho empresas petroleras obtuvieron 24 concesiones para explorar y explotar hidrocarburos en nuevas áreas protegidas de Bolivia, según datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Andina, Total, Chaco, Repsol, Maxus, Petrobras y

Don Wong son algunas de las empresas que se dedican a tales operaciones en las áreas bolivianas de preservación.

De aprobarse el proyecto de ley, se dismantelarían las propuestas de uso sustentable de la biodiversidad, como la Empresa de Ecoturismo Indígena Mapajos en la Reserva y Territorio Indígena Pilon Lajas, los proyectos comunitarios de ecoturismo en el Parque Amboró (La Chonta, Mataracú, Villa Amboró) y otros en la Reserva Eduardo Abaroa y en el Parque Sajama y en todas las áreas protegidas de Bolivia. Según José Coello, del Sernap, los ingresos por concepto de turismo en zonas de preservación de la naturaleza pueden generar más que los réditos de la explotación de petróleo. En Bolivia recién empieza la actividad turística en las áreas y ya genera más de 4 millones de dólares, sólo en la región del Madidi.

El proyecto de ley establece la readecuación y recategorización de todas las áreas protegidas para su homologación mediante ley lo cual implica que los parques nacionales donde existe interés petrolero podrán ser recategorizados para permitir el ingreso de esas actividades; este sería el caso de los parques Amboró y Madidi. Si bien establece una excepción en las zonas núcleo, parques y santuarios, la protección se reduciría a pequeñas islas de conservación, como ocurre en Pilon Lajas, una de las más importantes áreas protegidas de la región andino amazónica de Bolivia, que forma parte del corredor ecológico Vilcabamba (Perú) - Amboró (Bolivia).

Es claro que de aprobarse el proyecto de ley uno de los primeros resultados sería la aprobación del proyecto de exploración sísmica de la Petrobras, en espera en el Ministerio de Medio Ambiente. Para la exploración sísmica se trazan líneas rectas de 1,5 a 4m. de ancho a través de bosques, ríos, cultivos o poblados, retirando la cubierta vegetal o lo que se encuentre en ella, con el fin de ubicar estructuras geológicas de almacenamiento de hidrocarburos, mediante equipos detectores. Además se construyen caminos, helipuertos, campamentos, zonas de almacenamiento de material y equipos, causando la deforestación de extensas superficies de bosque, el vertido de contaminantes en ríos, suelos y aire, impactos a la fauna del lugar. Las poblaciones de estos territorios sufren la invasión de campamentos de trabajadores ajenos al lugar, quienes alteran totalmente la vida de la comunidad.

La mayoría de las disposiciones legales sobre áreas protegidas prohíben expresamente la realización de actividades nuevas de explotación de hidrocarburos, minería y madera. Por lo tanto, a pesar de que las leyes sectoriales de hidrocarburos y minería han definido estas actividades como prioridad nacional, la aprobación de licencias ambientales no está garantizada y ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones ecologistas, sociales y comunidades locales. En 2001 el departamento de Santa Cruz y numerosas instituciones nacionales lograron detener la aprobación de la licencia ambiental para la petrolera Andina (Amoco), que pretendía ingresar al Parque Amboró, donde hay proyectos de ecoturismo, albergues, proyectos de investigación y capacitación que hacen del mismo una de las áreas de conservación más promovidas e importantes de Santa Cruz.

Otro de los aspectos fuertemente cuestionados del proyecto, es que para sus autores la biodiversidad es un asunto de flora, fauna y microorganismos. Han olvidado que las leyes vigentes en el país definen que la biodiversidad tiene un componente “intangible”, que se refiere a los conocimientos colectivos o valor cultural asociado. Esas mismas leyes reconocen la tuición de las comunidades locales sobre este componente.

El proyecto de ley no sólo legaliza las actividades petroleras, mineras y madereras en las áreas protegidas sino que coloca a los “usuarios” de estas actividades en los Comités de Gestión, como “actores de la gestión de Áreas Protegidas”, olvidando que son precisamente estas actividades y las empresas que las realizan las principales causantes de los problemas de contaminación y degradación allí donde operan. (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

Chile: Campaña contra proyecto canadiense de producción de aluminio

La Patagonia chilena actualmente se encuentra amenazada por un mega proyecto de la transnacional canadiense Noranda Inc., empresa minera de larga trayectoria y que se propone construir una de las plantas reductoras de aluminio mas grandes del mundo en la prístina región de Aysén.

Para dimensionar el daño que provocaría la materialización de esta planta de aluminio, cuyo nombre es “Alumysa”, es importante describir la zona donde pretende instalarse esta planta y obras anexas.

Aysén es una de las 13 regiones de Chile y tiene una superficie de más de 10 millones de hectáreas (108.494,4 km²), de las cuales 4,8 millones de hectáreas corresponden a bosques nativos, 1.1 millón de hectáreas a humedales y 1.8 millones de hectáreas corresponden a nieves y glaciares; es importante destacar que es la región de Chile con más bosque nativo.

La población humana de esta región es de 86.697 habitantes según el último censo realizado el año 2002, lo que implica una densidad de 0,8 habitantes por km². Los habitantes de la región de Aysén se concentran en algunos centros urbanos, siendo las ciudades más importantes Coyhaique y Puerto Aysén, ésta última muy cercana a donde pretende instalarse la planta reductora.

Este pedazo de Chile se destaca por mantener características que hoy en día son escasas en el mundo como: miles de hectáreas de bosques y ecosistemas vírgenes con especies de fauna y flora únicas en el planeta, cielos limpios y aire puro, lagos y ríos no contaminados. Además de las riquezas naturales de flora y fauna, es en esta región donde se encuentran numerosos glaciares como el de la laguna San Rafael y Campos de Hielos, que es considerado como una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

Sin duda la región se caracteriza por su enorme belleza natural, lo que hace que año a año aumente el número de turistas nacionales y extranjeros que llegan en busca de paisajes y lugares únicos en el mundo. También es importante destacar que los habitantes de esta región valoran el patrimonio natural de su territorio y es por eso que la denominan “Reserva de Vida”.

Es en ese contexto que se pretende instalar el megaproyecto denominado “Alumysa”. El proyecto actualmente sometido a Evaluación de Impacto Ambiental implica a lo menos la construcción de una planta reductora de aluminio, la construcción de tres centrales hidroeléctricas y seis represas para abastecer de energía eléctrica a la planta

(central hidroeléctrica río Cuervo, central hidroeléctrica lago Cóndor y central hidroeléctrica río Blanco), un puerto en Bahía Chacabuco y un embarcadero y muelle flotante. Por si esto fuera poco, el proyecto también incluye una planta para la fabricación de ánodos y cátodos, 79 kms. de líneas de transmisión eléctrica desde las centrales a la planta y 95 kms. de caminos y lagunas de decantación para efluentes líquidos

El proyecto Alumysa, propiedad de Alumysa Joint Venture y Noranda Holding Limited, domiciliados en las Islas Caimán, propone una inversión que alcanzaría los US\$ 2.750 millones, lo que lo sitúa como la mayor inversión extranjera, puesta de una vez en la historia de Chile, para un proyecto con una vida útil de 50 años.

Lo increíble es que sólo 101 millones de dólares del proyecto se utilizarían en la construcción de obras civiles y 350 millones de dólares serían usados en mano de obra; la mayoría de los restantes 2.200 millones de dólares se usarían en la compra de maquinarias para el funcionamiento de la planta. Esto resulta más curioso si consideramos que en Chile existen leyes especiales para las regiones extremas (entre las que se encuentra Aysén), que facilitan la importación de maquinaria con aranceles de importación muy bajos.

Si a esto sumamos que las empresas catalogadas como mineras en Chile no pagan impuestos, ya que existen mecanismos de incentivo a la instalación de este tipo de empresas que vienen de la dictadura militar, podemos llegar fácilmente a la conclusión que esto es un estuendo negocio para esta trasnacional extranjera y un nuevo atentado ecológico y económico a un país del tercer mundo.

Otros antecedentes importantes de aportar y que dan cuenta del atentado económico y ecológico son que:

- Chile no posee la materia prima necesaria para la producción de aluminio: ésta será importada. Durante la etapa de operación, la producción anual alcanzaría las 440.000 toneladas de aluminio al año, para lo que se requerirá la importación de aproximadamente 846.000 toneladas de alúmina, 146.000 toneladas de coque calcinado y 43.500 toneladas de alquitrán traídas de otros países, como Australia, Brasil o Jamaica.

- El proceso de producción de aluminio requiere de gran cantidad de energía eléctrica y la abundancia de recursos hídricos existentes en la región de Aysén permite la generación de electricidad a muy bajo costo, ya que el código de aguas nacional entrega los recursos gratuitamente, lo que no ocurre en el primer mundo.

- Para producir 440.000 toneladas de aluminio anuales, Alumysa requiere importar 1.100.000 toneladas de insumos, tanto para el proceso de producción como para la fabricación de ánodos y cátodos. Una simple resta permite apreciar que quedaría un mínimo de 660.000 toneladas/año de desechos o basura en la región.

- Además, durante 365 días al año se producirán emisiones masivas y continuas de gases tóxicos como: fluoruro particulado sedimentado, material particulado orgánico (altamente cancerígeno), gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, perfluorocarbono), gases sulfurosos que provocan lluvia ácida, monóxido de carbono y gran cantidad de efluentes líquidos industriales.

- Al producir 440.000 toneladas de aluminio al año se generarían 980.000 toneladas de dióxido de carbono; por tanto, durante 50 años estos alcanzarían las 49.000.000 toneladas de CO₂, a lo que se suma los gases del tipo perfluorocarbonos que son altamente peligrosos por su duración y efecto contaminante, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global del planeta.

- A esto se agrega una cantidad no evaluada de metano y CO₂ producidos en los embalses al inundar casi 10.000 hectáreas de terrenos con materia orgánica.

En resumen:

- Chile tiene ventajas comparativas para la inversión extranjera por su débil legislación, en cuanto a las bajas exigencias ambientales, laborales y tributarias, ya que en este caso sólo un 15% iría al fisco chileno.

- Los costos ambientales, sociales y económicos para la región son enormes. Alumysa implica la destrucción de ecosistemas únicos en Chile y el planeta. La producción de aluminio genera emisión de fluo-

ruros al aire y agua, poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona, la fauna y flora terrestre y acuática, así como a la salud humana.

- Los bosques de la región son ecosistemas únicos en el planeta y se caracterizan por tener numerosas especies endémicas, varias de las cuales se encuentran amenazadas. En Chile la mayoría de las especies de peces de agua dulce son endémicas y se encuentran con un grado de amenaza de conservación y el proyecto Alumysa aumenta este riesgo.

- Esta región sería usada como un corredor en la producción de aluminio y un basurero en la región, pues se importa materia prima para realizar un proceso de producción altamente contaminante, se llevan las ganancias y se deja la basura, incluyendo desechos tóxicos y emisiones altamente contaminantes en el aire y las aguas.

- Es decir estamos claramente frente a un caso de maquila minera donde un país del primer mundo utiliza los beneficios de una economía abierta como la de Chile. Y todo esto ocurre con la aprobación, el beneplácito e incluso el claro apoyo de destacados políticos chilenos, entre los cuales cabe mencionar al Ministro de Economía.

Por esto, organizaciones ambientales y ciudadanas de Chile han conformado la Alianza Aysén Reserva de Vida para decir: ¿Alumysa? ... NO GRACIAS!!! (Por: Flavia Liberona, Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Colombia: Comunidad detiene licencia minera en reserva forestal

En la reserva forestal de Planalto, en Colombia, podrán seguir volando las 180 especies de mariposas diurnas que se han encontrado hasta ahora, los escarabajos Melolonthidae con sus diez géneros seguirán escarbando la tierra, también las hormigas que aquí habitan y que hacen parte de todas las subfamilias existentes en el neotrópico mantendrán su actividad. Las 160 diferentes especies de aves, 9% del total identificado en Colombia, no verán interrumpido su vuelo. Todo esto será posible gracias a la acción decidida de los habitantes de la región donde se encuentra la reserva y de quienes los apoyaron.

La reserva de Planalto se extiende a lo largo y ancho de 100 hectáreas, en uno de los extremos de la ciudad de Manizales; en ella se encuentra el mayor fragmento de bosques situado en las zonas de vida denominadas premontana y muy húmeda tropical del municipio. Un elevado porcentaje de las plantas que allí se encuentran, no se hallan en otros fragmentos de bosque y en cuanto a las especies de aves, menos del 55% de ellas se encuentran en otras áreas boscosas dentro de la misma zona de vida y algunas –como el colibrí pico de hoz coliverde– parecen estar restringidas a este bosque dentro del municipio.

La región cafetera de Colombia, en la cual se ubica el sitio en mención, ha sido objeto desde hace varias décadas de una transformación severa de sus ecosistemas de montaña, principalmente para acondicionar tierras para el monocultivo de café, aunque en estos momentos se está pensando en la diversificación de cultivos y en retomar formas tradicionales de producción como el uso de sombrero, debido a la crisis del sector, fenómeno obvio de esperar cuando la economía de toda una región pasa a depender de un único producto. Este proceso ha ocasionado la desaparición de la mayor parte de los bosques nativos que existían en la franja comprendida entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual ha sido agravado por la dinámica de colonización y concentración de población en el territorio (cerca del 70% de la población colombiana habita en la región andina).

Por otra parte, los Andes tropicales han sido propuestos como uno de las 15 áreas prioritarias (*Hotspots*) para la conservación en el ámbito mundial que albergan entre el 30% y el 40% de la biodiversidad terrestre.

Pero todos los motivos expuestos, sumados a la declaración de la reserva como “área de interés ambiental” en el plan de ordenamiento territorial del municipio, no fueron impedimento, como suele suceder comúnmente, para que la firma Ingeocom Ltda iniciara los trámites que le dieran vía libre para la explotación minera dentro de la reserva.

El 16 de junio de 2000 comenzó la gestión para adquirir los permisos necesarios para la explotación de roca anfibolítica en el Planalto en una cantera de 12 hectáreas, en la cual se proyectaba una producción

mínima (como siempre, no se aclaraba a cuánto podría ascender la máxima) de 10 mil metros cúbicos anuales.

De inmediato se escucharon voces de protesta y el enérgico rechazo de la comunidad frente a la posibilidad de tener una mina dentro de la reserva. Inicialmente fue el Centro de Investigaciones de Café, dueño del terreno, quien defendió la conservación de la zona por tratarse de un área dedicada a la investigación y protección de la biodiversidad, a lo cual se sumaron las posiciones de integrantes de la comunidad en general, así como de estudiantes y académicos. No obstante, un año después el proyecto ya contaba con la licencia de explotación que le fue otorgada por el Ministerio de Minas y Energía, con lo cual solamente faltaba la licencia ambiental para iniciar la actividad minera; licencia a la que se dio trámite el 19 de junio de 2001 ante Corpocaldas, autoridad ambiental del departamento.

El 22 de agosto siguiente sucedió el primer tropiezo de la empresa: Corpocaldas recomendó no continuar con el proyecto porque ambientalmente no era viable, frente a lo cual el representante de la firma le solicitó a Corpocaldas reconsiderar la decisión. La lucha de los defensores de la reserva se intensificó y de ese modo la situación llegó a oídos de gran cantidad de personas, quienes aun desde fuera del país enviaron mensajes a Corpocaldas exigiendo que negara la licencia. Las personas del centro de investigaciones en el cual se halla la reserva, vinculadas con la conservación, elaboraron un documento en el cual se muestra claramente la importancia de su preservación para la ciudad y la región en términos de conservación, educación e investigación.

Como resultado de la presión ejercida, la autoridad ambiental se vio obligada a convocar una audiencia pública en el mes de diciembre con el fin de escuchar a las partes, audiencia que a la postre se convirtió en uno de hitos de la lucha ambiental en la región, tanto por su alcance como por la asistencia masiva de todos los sectores de la comunidad que de alguna manera deseaban reflejar su compromiso y aportar al logro de una meta colectiva que también era la suya propia.

Finalmente, la pelea por la reserva fue ganada por los amigos de la biodiversidad quienes por fin escucharon de Corpocaldas la respuesta

que habían esperado: “No se otorga la licencia para la explotación minera en Planalto”, la cual fue ratificada por la resolución 0193 del 5 de febrero de 2002.

Lo conseguido entonces no es sólo el logro de la vida que prevalece sobre los intereses particulares, sino un gran paso adelante en la consolidación del alcance de metas de interés para toda una comunidad, la cual empieza a reconocer la importancia y el poder de actuar de forma conjunta, así como lo vital de hacer valer sus derechos y convicciones. Todo ello resaltado por el hecho de tratarse de una resolución proveniente de una corporación de conocida tradición y manejo político amañado, que a pesar de todo no pudo imperar sobre el poder popular. (Boletín del WRM N° 57, abril de 2002).

Colombia: Impactos de la explotación carbonera

En los últimos años de la década de los 70 la estatal carbonera Carbocol dio a conocer la existencia de grandes yacimientos carboníferos en la península de Guajira. El yacimiento se encontraba ubicado en territorio habitado tradicionalmente por la comunidad Wayuú, población indígena nómada que se movía en la región fronteriza con Venezuela. Tras una larga controversia sobre la conveniencia o no de la explotación de este combustible fósil, el Estado finalmente dio vía libre a dicha empresa con el argumento del desarrollo regional en materia energética. Esta autorización de explotación minera a gran escala de carbón térmico (el que se utiliza para la producción de calor) no solamente alteró las costumbres y contaminó el ambiente de los Wayuú, sino que sólo fue un antecedente para una larga lista de violaciones de normas del Estado colombiano y de conflictos entre los pueblos indígenas y empresas mineras nacionales y multinacionales.

El sistema productivo de los Wayuú, hasta ese momento basado en la producción agrícola a pequeña escala, la cría de cabras y otras especies, se vio totalmente alterado para facilitar la instalación de la mina de carbón más grande del mundo. La infraestructura de transporte carbonífero para 16 millones de toneladas anuales de carbón (caminos, ferrocarriles, grandes campamentos) no solamente transformó la vida tradicional de estas poblaciones sino que contaminó su ambiente. El acopio de una gran masa de carbón a cielo abierto resultó en la

dispersión de grandes cantidades de polvillo en el aire, que provocaron enfermedades respiratorias. Como consecuencia, muchas veces la única alternativa de sobrevivencia consistió en desplazamientos masivos de las comunidades.

A pesar de las demandas por problemas ambientales y de salud, a partir de la década de los 80 el negocio de la minería se vio acrecentado con el establecimiento de la multinacional Esso a quien el Estado entregó los yacimientos. En el mismo período se dieron a conocer nuevos yacimientos en el Departamento del César y se constituyeron nuevas empresas para la explotación del carbón. A través de alianzas con multinacionales se explotan a gran escala yacimientos como los de Carbones del Caribe, Carbones Soororia, Carbones del Cerrejón donde participan empresas angloamericanas y canadienses (Drummond, Glencore International, BHP Billiton entre otras), que continúan expandiéndose y recibiendo préstamos del Banco Mundial hasta la fecha.

Es claro que estas empresas han obtenido durante décadas cuantiosas ganancias. En cuanto a los resultados para los pueblos indígenas y las comunidades colombianas preferimos que una organización local –CENSAT– hable por si misma: “Las riquezas del territorio colombiano se dilapidan sin constituirse en bienestar, en comodidad, en vida para el pueblo colombiano. El valor de patrimonio natural en el imaginario colectivo del indígena, del campesino, del negro, del minero, se ha perdido y sólo subyace de manera repetitiva en su imaginario la idea de ‘explotación’, explotación del hombre, de la mujer, del niño y la niña, de la naturaleza, del pueblo y territorio colombiano. Alrededor de la minería en Colombia se respira tristeza, desidia, corrupción, poca ética, genocidios ambientales y culturales, violaciones de todo tipo. Tenemos confianza en que en algún momento llegará la buena vida, ‘para muchos’, que los árboles y la tierra volverán a organizarse de arriba hacia abajo y no de abajo arriba como quedaron, que las aguas dejen de ser pesadas y oscuras y que los hombres y mujeres se puedan volver a morir de viejos”. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Ecuador: Cuando un pueblo dice NO a la minería

La minería es una de las causas directas de deforestación. A pesar de ello, es una industria que no sólo no ha detenido sus actividades, sino que en los últimos años ha logrado introducir cambios en las leyes y políticas nacionales e internacionales para beneficio de los consorcios que la integran. Esto ha sido en detrimento de la legislación que ampara a los pueblos indígenas y al medio ambiente.

Por otro lado, los poderosos intereses que se mueven en esta actividad no juegan solos. Cuentan con la presión de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el marco de supuestos proyectos de “desarrollo” imponen programas de ajuste estructural que obligan a muchos gobiernos a liberar el flujo de capital para facilitar la expansión de la minería.

En Ecuador, sin embargo, una pequeña población se ha mantenido firme en sus derechos. En el sur de la Amazonía ecuatoriana, en el cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, en el punto de confluencia de los ríos Zamora y Nangaritzza, se ubica la población de Los Encuentros, capital de la parroquia del mismo nombre. Sus habitantes, empujados por la destrucción del bosque, emigraron de otros sistemas en busca de tierras mejores.

Recién llegados a la región, desconocían el ecosistema, lo que hizo que lo intervinieran de manera inadecuada. En estos momentos sufren las consecuencias de ese mal manejo, pero a su vez eso los llevó a reflexionar para tomar las medidas necesarias tendentes a corregir la situación, para que sus hijos no tengan que correr su misma suerte y vuelvan a tener que emigrar.

Pero en momentos en que han tomado conciencia de la dimensión ambiental y han empezado a planificar y tomar decisiones sobre el futuro ambiental de su zona, el Ministro de Energía y Minas dio en concesión 2.500 hectáreas, ubicadas en las riveras de los ríos Zamora y Nangaritzza, para realizar allí actividades de minería aluvial. Las comunidades costeras, para quienes el río es un elemento vital para su supervivencia –tanto como fuente de alimentos como para uso diario y para regar los valles donde producen alimentos–, saben que ine-

vitiblemente la minería supondrá su contaminación y sienten que eso constituye un atentado a su soberanía alimentaria.

Los pobladores de Los Encuentros, actuando por decisión de nutridas Asambleas Parroquiales, decidieron recurrir a la vía legal, donde expusieron sus reclamos y demostraron que el concesionario había violado preceptos constitucionales al omitir la consulta previa a la comunidad y al no haber presentado a su debido tiempo para su discusión, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental.

Las autoridades dieron curso a su petición y el propio subsecretario de Energía y Minas les pidió un mes de plazo para que en asamblea se discutiera y analizara la EIA, aceptando acatar su decisión. Aún cuando recibió el voluminoso documento sólo dos días antes de la fecha, el pueblo se mantuvo en su decisión de rechazo a la minería, apostando a un futuro digno para sus hijos. Si bien la decisión fue aceptada por el Director Nacional de Minas presente en la reunión, y quedó sentada en un acta donde además se dio un mes de plazo para que la empresa saliera de la región, a los 15 días llegó una notificación para los dirigentes que firmaron el acta. Se trataba de un amparo administrativo planteado por el concesionario y aceptado por la autoridad firmante, pidiendo la comparecencia de los dirigentes a una inspección administrativa y técnica, y acusándolos de terrorismo y vandalismo.

Los pobladores, armados de paciencia, acudieron en masa y reclamaron que se incluyera en el informe una serie de inseguridades evidentes, así como la falta de políticas ambientales en el campamento donde los desechos sólidos y líquidos eran vertidos directamente al río. Volvieron a esperar la fecha pactada para el retiro de la empresa, pero a los pocos días, en lugar de retirarse, el concesionario empezó a trabajar con respaldo militar. Entonces, los pobladores de Los Encuentros dijeron ya no más. Salieron a la orilla del río Zamora con sus herramientas –palas, picos, machetes– y cortaron los árboles que sostenían una barcaza construida para campamento y explotación minera, obligando a paralizar sus trabajos y dándoles plazo de 12 horas para que abandonaran el lugar. La policía y los militares intentaron reprimir, pero la presencia era demasiado multitudinaria. Finalmente, la empresa se retiró el 18 de diciembre de 2001.

Para Los Encuentros, esa fecha quedó grabada en su historia, por haber defendido unida y valerosamente su derecho a vivir en un ambiente sano, expulsando una actividad contaminante que no querían y apostando a otras formas que no degraden el medio. Ellos supieron que su verdadera riqueza es la riqueza biológica y cultural. ¿Lo sabrá el gobierno? (Boletín del WRM N° 57, abril de 2002).

Guyana: El impacto de las transnacionales mineras sobre la gente y el ambiente

En el interior de Guyana se extiende una selva tropical de 150 kilómetros de ancho, la mayor parte de la cual en estado primario. Sin embargo, la percepción oficial desde los '70 según la cual la minería resultaba esencial para el "desarrollo", junto a la apertura económica del país –que implicó la promoción de la explotación de los recursos naturales, en especial madera y minerales– para enfrentar la creciente deuda externa y satisfacer las condiciones del ajuste estructural de 1991 impuesto por el FMI y el Banco Mundial, allanaron el camino a las empresas transnacionales. Gracias a la generosa concesión de vastas áreas a compañías madereras y mineras, éstas siguen haciendo el gran negocio y al mismo tiempo destruyen el ambiente y causan graves problemas a los pueblos indígenas.

Los resultados de un informe publicado el año pasado sobre el impacto de la minería en el Distrito Amerindio Alto Mazaruni de Guyana confirman este panorama general en una región particular del país. La región del Alto Mazaruni posee una prolífica selva, que constituye el último refugio de los aborígenes Akawaio (Kapon) y Arenuca (Pemon), cuyas tierras ancestrales comprenden también parte de la Gran Sabana venezolana y del norte del estado brasileño de Roraima. Su modo de vida en armonía con el ambiente se ha basado tradicionalmente en migraciones estacionales entre los tramos inferior y superior de los ríos Mazaruni y Kamarang, a fin de obtener recursos de la caza, la pesca y la agricultura.

Desde fines de la década de 1950 las autoridades indígenas de la región vienen reclamando a los sucesivos gobiernos por la invasión de sus tierras por parte de los mineros. En 1959 una tercera parte de la Reserva Amerindia de Alto Mazaruni fue redefinida como distrito mine-

ro y al resto de la misma se le dio la denominación Distrito Amerindio Alto Mazaruni. Al principio se trataba de mineros de pequeña escala, pero actualmente estamos hablando de poderosas empresas mineras extranjeras. Alrededor de 37 compañías mineras –la mayoría de las cuales canadienses– están registradas en Guyana. Muchas de ellas han estado y todavía se encuentran en Alto Mazaruni. Golden Star Resources y Vanessa Ventures, ambas canadienses, son las dos que han provocado el mayor impacto ambiental y consiguiente preocupación a nivel de las comunidades locales.

El uso de máquinas de dragado de tipo misil (enormes aspiradoras con forma de misil, que se acoplan a las dragas en el río para extraer los depósitos aluviales) es común en la zona. Dichas máquinas destruyen las riberas de los ríos y los bosques cercanos e incrementan la sedimentación, provocando severas pérdidas en las poblaciones de peces y drásticos cambios en la hidrología y la geomorfología de los ríos. A efectos de maximizar la producción de oro, las empresas mineras que actúan en Alto Mazaruni también utilizan mercurio, si bien se sabe desde hace décadas que el mercurio genera efectos graves sobre los ecosistemas y la salud humana. De acuerdo con los autores del citado informe, los impactos ambientales de la minería en la zona resultan evidentes: el agua está descolorida y cargada de sedimentos, las pilas de desechos se acumulan en las orillas, algunas de las cuales ya han desaparecido por el uso de las máquinas de dragado tipo misil. La Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la ley no existe más que en el papel.

La destrucción de los recursos naturales de los que dependen los pobladores locales para su sobrevivencia ha impactado en la vida cotidiana de los indígenas, especialmente sobre su provisión de alimentos. Ahora les resulta difícil encontrar pescado en el antes rico río Mazaruni. El ruido provocado por la minería y la caza insustentable que realizan los mineros ha provocado una disminución de la riqueza y abundancia de animales. La destrucción de las economías locales ha ido paralela con el surgimiento de serios problemas sociales, tales como alcoholismo, abuso sexual, prostitución y racismo.

En resumen, la apertura de Guyana a las empresas extranjeras acontecida desde mediados de la década de 1980 está provocando la des-

trucción de sus selvas tropicales –un caso raro de ecosistema intocado hasta entonces– en medio de una completa falta de consideración por los pueblos amerindios que allí han vivido durante siglos utilizando los recursos de manera sustentable. Este proceso continúa, en detrimento de los bosques del país y de sus pueblos indígenas, quienes se están movilizand para revertir esta situación. Lo que antes era un lugar paradisíaco, en el que la población local podía vivir según sus patrones culturales, se está convirtiendo en un ejemplo de destrucción. ¿Para qué? Para que se beneficien unas pocas megaempresas. ¿Quiénes son los responsables? Las propias empresas –que actúan de manera depredatoria, aprovechando las circunstancias favorables– y los sucesivos gobiernos de Guyana, que han demostrado ser incapaces de controlar las actividades de aquéllas y, en especial, no tener la voluntad de respetar y garantizar los derechos territoriales indígenas, cuestión que está en la raíz del problema. (Boletín del WRM N° 43, febrero de 2001).

Perú: Bosques y gente amenazados por empresa minera canadiense

Un duro golpe han recibido los agricultores y campesinos de los valles de Tambogrande, San Lorenzo y las comunidades Locuto y Nacho Távara, ubicadas en el Departamento de Piura, ante el anuncio del Primer Ministro de Alejandro Toledo, quien señaló que el país se convertirá en líder mundial minero, sin tomar en cuenta la decisión de las poblaciones asentadas en la zona por cientos de años.

En 1999 el gobierno peruano y la empresa canadiense Manhattan Sechura S.A. suscribieron un acuerdo que le otorgaba a la compañía minera 89 mil hectáreas de tierras alrededor del pueblo de Tambogrande, en el departamento de Piura, al norte del Perú, para la explotación minera. La empresa transnacional Manhattan Minerals Corp (de origen canadiense), pretende explotar un yacimiento polimetálico bajo la modalidad de tajo abierto (cielo abierto). La construcción de la mina, requerirá la reubicación de aproximadamente 25.000 personas, el desvío del cauce de un río, y provocará la destrucción de los bosques de algarrobo existentes en la zona.

Los pobladores de Tambogrande, que se ganan su sustento a través de la agricultura, rechazan la actividad minera en la zona por los ries-

gos que ella implica y han iniciado una agresiva campaña para impedir que se concrete el proyecto.

José Valeriano Márquez Nima se sienta sobre la loma de arena en Locuto y mira hacia el horizonte. Observa por un momento el río Piura y el pueblo de Tambogrande y vuelve sus ojos a los extensos bosques de algarrobales y pasturas a donde llevan a sus animales y por donde caminan a diario para recoger algarroba, que es la base económica de cerca de casi 1.000 campesinos de la Comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto.

La algarroba es un producto de demanda regional, y nacional, con preferencia para la alimentación del ganado vacuno de engorde y leche. La algarroba de Piura tiene como mercados los departamentos de Lima, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Cajamarca. Su producción es la actividad de mayor rentabilidad en relación con la producción de leña y carbón.

Las familias asentadas en las Comunidades de Locuto y Nacho Távora, que se verán afectadas por la extracción minera del Proyecto de la Manhattan Minerals Corp., obtienen ingresos significativos cercanos o mayores al 50% del total de sus ingresos como consecuencia de la venta de algarroba y de animales criados en el bosque, permitiéndoles satisfacer gran parte de sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta y educación. El 70% de los pobladores asentados en este medio, no sólo conservan sus bosques sino que les vienen dando un manejo adecuado, aportando de esta manera al mantenimiento del equilibrio ecológico del medio.

A pesar de que el poder económico ha descargado sus baterías y está usando todos los medios posibles para ser aceptado por la comunidad, existe una fuerte resistencia de las poblaciones de Tambogrande, San Lorenzo y Locuto, que basan su economía en la agricultura. Los agricultores se han organizado, han realizado varias movilizaciones y unos 28 mil ciudadanos han suscrito un memorial que el Municipio elevará al Ejecutivo solicitando se deroguen los decretos supremos que otorgaron a la Manhattan Minerals Corp. la concesión y piden que se declare la intangibilidad de sus tierras.

Es importante señalar que los graves impactos generados por las empresas mineras canadienses en todo el mundo han sido documentados y analizados en un trabajo realizado conjuntamente por el Forest Peoples Programme, el Philippine Indigenous Peoples Link y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Los resultados de dicho estudio fueron resumidos en la publicación "Socavando los Bosques. La necesidad de controlar las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense". (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Perú: Consulta popular dice NO a la minería en Tambogrande

Muchos gobiernos latinoamericanos, con el fin de obtener ingresos y satisfacer las condiciones de los programas de ajuste estructural del FMI y apoyados por los préstamos del Banco Mundial, han puesto a disposición de las empresas multinacionales los recursos naturales de sus países y otorgan concesiones a quienes a cualquier costo quieren perpetuar el modelo de explotación en su propio beneficio. Muchos pueblos latinoamericanos han comprendido que organizados pueden defender sus tierras, sus bosques y su supervivencia.

Tal es el caso de la entrega que realizara el ahora convicto Presidente Fujimori en 1999, de 89 mil hectáreas de tierras a la empresa canadiense Manhattan Sechura S.A. para una explotación polimetálica a cielo abierto. Varias comunidades de agricultores y campesinos de Tambogrande en el fértil valle San Lorenzo en el Departamento de Piura, verían amenazado su derecho a un ambiente sano y productivo de llevarse a cabo dicho proyecto.

La minería y muy especialmente la realizada a cielo abierto, puede ocupar y destruir amplias extensiones de terreno. Durante los últimos decenios gran parte de la exploración minera ha afectado a los ecosistemas forestales y representa la segunda amenaza principal (después de la explotación forestal comercial) para los bosques primarios a escala mundial. Los bosques no sólo son eliminados para dejar paso a las actividades mineras sino que para su construcción y para proveerlas de energía las minas emplean grandes cantidades de madera de los bosques circundantes. Al igual que el resto del ambiente

el bosque también puede sufrir “la muerte” cuando se ve expuesto a los contaminantes tóxicos, a la lluvia ácida de las instalaciones de tratamiento y a la asfixia por el polvo de las plantas procesadoras. Los bosques de algarrobales de Tambogrande aportan más del 50% del ingreso a los habitantes de la zona.

Durante todo este tiempo las comunidades se han organizado para oponerse a este proyecto en la convicción de que tendrá gravísimas repercusiones sociales y ambientales. Es sabido que incluso bajo condiciones controladas, se producen desastres muy frecuentes y graves, más que en cualquier otro proceso industrial. La explotación minera es una actividad fundamentalmente insustentable, ya que se basa en la extracción de concentraciones de minerales no renovables creadas durante millones de años. Una vez extraídos, los minerales no se pueden reponer, y el trastorno causado al medio ambiente produce un cambio y un daño permanente. A medida que se agotan los yacimientos mineros más fácilmente accesibles, una profunda ansia de nuevas fuentes minerales baratas empuja a la industria a una prospección cada vez más intensificada en los territorios indígenas y en zonas ambientalmente sensibles.

Las empresas mineras están asimismo desarrollando nuevas técnicas que permiten obtener beneficios del tratamiento de los yacimientos de inferior calidad. Este cambio, puede hacer que la minería sea incluso más invasora y ambientalmente dañina que antes. El tratamiento de esos yacimientos requiere la apertura de minas siempre más grandes que afectan a zonas siempre más extensas y la creación y el vertido de cantidades sin precedentes de residuos mineros. Los costos de estas pérdidas son asumidos por las zonas, comunidades y gobiernos afectados, más que por las empresas.

Una de las organizaciones más activas durante la oposición, el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, ha dialogado con representantes del Estado peruano, de la empresa minera Manhattan Sechura y diversas autoridades y personalidades del país y del mundo, haciéndoles saber su preocupación por el impacto social y ambiental de una posible explotación minera en Tambogrande, una de las regiones de más alta productividad agrícola del país. En las zonas mineras de Perú se constatan los índices más altos de pobreza y

desempleo. Durante este período también los miembros de dicha organización y sus familiares han sido víctimas de varios atentados, secuestros y amenazas de muerte. Las autoridades no han podido esclarecer aún, luego de un año, el asesinato de uno de los líderes ecologistas opositores al proyecto y asesor técnico del Frente, el Ing. Godofredo García Baca.

Las comunidades locales, apoyadas por organizaciones internacionales, han logrado que el pasado domingo 2 de junio de 2002 se llevara a cabo una consulta vecinal convocada por la Municipalidad Distrital para que la población se pronunciara respecto a la explotación minera. La oposición fue contundente. Aunque la consulta era voluntaria, hubo un altísimo grado de participación, mayor aun que en las elecciones nacionales: el 74% de los tambograndinos participó en ella. De los votantes, el 98.05% señaló su oposición al proyecto minero.

A pesar de que al acto eleccionario concurrieron observadores peruanos, italianos, suizos, canadienses, alemanes y estadounidenses que constataron que la población participó libremente y sin coacción, los partidarios de la explotación han afirmado que la consulta vecinal era una acción ilegal.

Los tambograndinos no solamente han ratificado su rechazo a la empresa minera y al falso desarrollo que ésta les ofrece, sino que han brindado un ejemplo de cómo una sociedad organizada puede defender sus recursos y el derecho a elegir en forma democrática su forma de subsistencia.

En el marco de la actual ola de violencia desatada a raíz de la venta de empresas públicas que el actual presidente había prometido – durante su campaña electoral– no privatizar, sería bueno que el gobierno comenzara a escuchar más a su pueblo y a sus demandas que a las del FMI, Banco Mundial y las empresas. Si así lo hiciera, en el caso de Tambogrande debería reconocer la evidencia y ordenar la cancelación del proyecto minero, democráticamente rechazado por la amplia mayoría de la población local. (Boletín del WRM N° 59, junio de 2002).

Venezuela: Plan de gobierno pone en peligro el bosque de Imataca

El bosque nativo de la Reserva Forestal de Imataca, en el extremo oriental del país, con imponentes bellezas escénicas y una rica diversidad biológica, cumple un papel fundamental en la protección de suelos y aguas –de los ríos Yuruan, Cuyuni, Orinoco, Brazo Imataca, río Grande, Botanamo, Barima, Orocaima– y es también reserva cultural y sagrada de pueblos indígenas.

Imataca tiene una superficie de 38.219 kilómetros cuadrados, de los cuales más de tres millones de hectáreas, o sea 80% de su extensión, son bosques tropicales húmedos. Seis de cada diez metros cuadrados de territorio están legalmente bajo algún régimen de protección ambiental, pero ahora quedaría afectado por el nuevo Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de IMATACA, elaborado por el Ministerio del Ambiente.

Dicho plan, según las autoridades, limita la actividad minera hasta (un máximo de) 11% del área contra el 38% previsto en un decreto anterior de 1997. Pero sus críticos argumentan que constituye una legalización frontal de la minería, habilitando la prospección, exploración, explotación, procesamiento, transformación y transporte de minerales metálicos y no metálicos, en una zona que por su elevada fragilidad ecológica y su bajísima capacidad de regeneración una vez intervenida se sitúa en la categoría de “bosques en peligro de desaparecer”. Alexander Luzardo, del Colegio de Sociólogos, considera que la nueva norma afectaría “el derecho de la sociedad venezolana de preservar a perpetuidad sus bosques en condiciones prístinas”, lo que tiene un valor para las futuras generaciones superior al beneficio económico inmediato.

El propio informe final para el Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, realizado por el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales, en diciembre de 2002 reconoce que “el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima, la vegetación, la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general”.

Por otro lado, la relación agua-bosque es indivisible y la deforestación que indefectiblemente trae aparejada la minería, interrumpe la protección y el flujo continuo del agua, cuya protección es vital para el futuro de la vida en el planeta.

La organización ecologista Amigransa, que reclama al Presidente Chávez el cumplimiento de los compromisos asumidos durante su campaña electoral, en la cual manifestó públicamente, que, si para sacar el oro había que acabar con los bosques, entonces se quedarían con el bosque, presenta los siguientes puntos:

- 1) Ratifican la Visión Global del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca.
- 2) Proponen que el Ministerio del Ambiente declare un área importante de los Bosques de Imataca, como Parque Nacional Imataca.
- 3) Solicitan que se excluya el uso minero del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca.
- 4) Solicitan sanear a Imataca de los focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal de Imataca y que se prohíba el otorgamiento de nuevas concesiones e infraestructura minera en Imataca.
- 5) Solicitan una moratoria a la explotación forestal en Imataca.
- 6) Exhortan a que el Ministerio de Ambiente promueva con tiempo una discusión nacional amplia, con una participación interactiva real.
- 7) Exhortan al gobierno a concluir la Demarcación de los Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, previo a cualquier ordenamiento y asignación de usos en Imataca.

El desarrollo sostenible del país debe verse como un asunto integral y no como un aprovechamiento de recursos aislados, dice Amigransa, y pregunta: “¿Necesitamos para sobrevivir destruir también los bosques de Imataca? ¿No debemos mas bien salir de una vez por todas

de esa política extractiva–rentista, que sometería también a Imataca, con este Plan, a una salvaje explotación forestal y minera? La entrega de este territorio de casi 4 millones de hectáreas a empresas nacionales y transnacionales madereras y mineras, ameritaría una discusión nacional más amplia, una participación activa y protagónica, mucho análisis sobre el desarrollo que queremos, cómo lo queremos y dónde lo queremos”. (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

ASIA

Birmania: Violaciones de derechos humanos vinculadas a inversiones extranjeras

Las inversiones extranjeras en minería, explotación de gas y megaproyectos de represas –identificadas con el “desarrollo”– constituyen de hecho una causa directa de violación de derechos humanos y una amenaza para la sustentabilidad ambiental en Birmania. Desde 1962 el país está gobernado por una dictadura militar, que ha impuesto un régimen caracterizado por el terrorismo de Estado.

En el informe “Grave Diggers” (“Cavadores de tumbas”), elaborado por Roger Moody y difundido por un grupo de ONGs ambientalistas canadienses, se analiza el daño social y ambiental provocado por la minería en Birmania. El documento destaca las actividades de Robert Friedland y su imperio financiero y minero Ivanhoe Capital Corporation (ICC). Friedland es conocido por los desastres ambientales causados por las operaciones mineras de su propiedad en EE.UU. y Guyana, y por sus vínculos corporativos con los ejércitos mercenarios en Sierra Leona. En 1994 ICC llegó a un acuerdo con el régimen militar de Birmania para explotar la mina de cobre de Monywa. Estas operaciones, realizadas en completa ausencia de medidas de seguridad, han provocado la contaminación del agua y problemas dermatológicos en los habitantes locales. Por otra parte los moradores locales se vieron amenazados por el uso de explosivos. Resulta sorprendente que si bien el financiamiento para esta operación está manejado por una operación registrada en Canadá (Ivanhoe Mines Ltd.) y organizaciones de derechos humanos a nivel mundial han condenado a las em-

presas que hacen negocios al amparo del brutal régimen birmano, el gobierno canadiense ha optado por mirar hacia otro lado en lo que respecta a las inversiones de Ivanhoe en ese país.

El gasoducto de Yadana constituye otro caso en el cual la actuación de compañías extranjeras en connivencia con el gobierno ha sido severamente objetada debido a sus impactos ambientales y las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los campesinos locales. El 7 de setiembre de 2002, un Juez federal de Los Angeles emitió un fallo por el que Unocal Corp –uno de los mayores inversores estadounidenses que todavía operan en Birmania– fue declarado exento de responsabilidad en la violación de derechos humanos durante la construcción del gasoducto de Yadana, por la que había sido denunciada. Unocal Corp posee el 28,6% de las acciones del consorcio que realizó las obras culminadas en 1998. Los abogados que representan a los aldeanos birmanos que presentaron la demanda en 1996, aduciendo haber sido forzados por los militares a trabajar en el proyecto o haber sido atemorizados por negarse a hacerlo, dijeron que apelarían la decisión. Unocal Corp no negó estar enterada de que existió violación a los derechos humanos por parte del gobierno anfitrión durante el proyecto. Sin embargo, de acuerdo con la decisión judicial, no se comprobó que la empresa conspiró con los militares para forzar a los aldeanos a trabajar. La cuestión es si la justicia puede aceptar la “omisión” de una poderosa transnacional en un caso relacionado con la violación de derechos humanos, especialmente cuando sus actividades se ven favorecidas por quienes son responsables de tales actos.

Por último, pero no por ello menos importante, un proyecto a cargo de la compañía tailandesa GMS Power y la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (EGAT), que se propone construir una gigantesca represa en el Río Salween –el único río importante de la región aún no represado– también ha provocado violaciones de los derechos humanos en Birmania. A partir de 1997 las aldeas de Kunhing Township existentes a orillas del Salween y su afluente el Nampang fueron relocalizadas. En conjunto 175 poblados, 4.018 hogares y más de 1.400 hectáreas de campo serán inundados cuando se termine la represa. Pero desde mayo pasado la situación empeoró aún más. Campesinos del estado sureño de Shan han denunciado que el ejército

birmano ha comenzado una operación de exterminio de la población localizada en las zonas a ser inundadas por el reservorio. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Birmania: Pobreza entre rubíes, zafiros y jade

Birmania posee una fama justificada por sus ricos depósitos de piedras preciosas, entre las que se incluyen rubíes, zafiros y jade. La localidad de Mogok, ubicada en la zona este de la División de Mandalay en la frontera del Estado de Shan, ha sido el centro de la extracción de rubíes y zafiros durante ochocientos años.

Las compañías mineras que operan en Mogok pasaron primero a ser controladas por capitales británicos en 1888. Posteriormente, fueron nacionalizadas en 1962 después del golpe militar liderado por el General Ne Win. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, eran empresas relativamente pequeñas y producían un daño limitado al medio ambiente circundante. Desde 1989, ha habido un cambio significativo y se han ido imponiendo operaciones de minería a gran escala que han transformado la industria.

El rápido aumento en la participación de actores no locales, así como de capital y equipos, ha acelerado también la devastación ecológica de la región. Entre 1989 y 1992, los equipos de minería modernos han causado extensos daños, especialmente en los alrededores de Mogok y Mineshu. En el proceso, los empresarios locales han sido desplazados por la competencia y la corrupción crecientes. Hoy son trabajadores mal pagos que trabajan para intereses empresariales externos. Otro efecto ha sido la migración gradual de trabajadores y pequeños empresarios desde Mogok a las zonas mineras de Shwe Gin, en la División de Pegu. Muchos mineros y agricultores Karen locales, a lo largo del proceso, han sido víctimas de los mismos problemas sociales, económicos y ambientales que indujeron a estos empresarios a dejar Mogok en primer lugar.

La expansión de formas intensivas de extracción de recursos, en la mayoría de los casos, no es sustentable. Las actividades mineras se realizan en un contexto que no cuenta con una supervisión regulatoria. Las personas que trabajan en las minas durante la estación lluvio-

sa se arriesgan sistemáticamente a morir ahogados debido a la ocurrencia de riadas o al derrumbe de los muros de retención. Los trabajadores que clasifican las gemas después de extraídas con frecuencia hacen su trabajo bajo el sol ardiente, porque gran parte de la zona circundante ha sido talada y no hay sombra. Según informan los trabajadores de las minas, es raro que se permitan los descansos y habitualmente deben enfrentar condiciones de abuso verbal y físico por parte de los soldados contratados por las compañías para custodiar la seguridad del sitio.

Más recientemente se han utilizado presas de varios niveles con mecanismo de alimentación por gravedad y cribas. Pero con la llegada de los intereses empresariales externos, los mineros han comenzado a realizar la extracción de oro con medios hidráulicos. Éste es un método altamente destructivo que utiliza bombas *diesel* para arrojar chorros de agua presurizada a través de una manguera que se apunta a la ribera de un río o a un lado de un afloramiento rocoso. La enorme presión simplemente arrasa grandes cantidades de roca y tierra. Los sedimentos con contenido de oro se canalizan después a través de una larga presa que en general está recubierta de mercurio líquido (azogue). El mercurio captura las partículas más finas de oro mediante un proceso químico llamado fusión y éstas posteriormente se separan. La mezcla sobrante de desechos y barro contaminado se la lleva después el río aguas abajo. Dado que el mercurio es altamente venenoso para seres humanos y animales, esta práctica ha sido prohibida en muchas partes del mundo. Actualmente, no se sabe si estas sustancias químicas están siendo usadas en estas dos localidades, aunque sí son ampliamente utilizadas para extraer oro en otros lugares de Birmania. Cualquiera sea el caso, el daño ambiental ha sido grave. Fuentes locales han informado que las actividades de minería, en especial la minería hidráulica, en los alrededores de los municipios de Mogok y Shwe Gin han producido un modelo de problemas común, que incluye:

- * El colapso de los lechos de los ríos debido a la extracción de cieno y tierra de las riberas, base de sostén de árboles y muros
- * Aumento de los niveles de erosión del suelo
- * Aumento de los niveles de sedimentación
- * Reducción de poblaciones de peces debido a cambios en la temperatura del agua

- * Aumento de la contaminación del agua debido a los desechos mineros (es decir, los materiales finamente triturados que sobran después de la extracción de la mena o mineral deseado)
- * Aumento de la contaminación del agua debido a lodo líquido o drenaje ácido de las minas (la mezcla de desechos, agua y sustancias químicas, en general cianuro o mercurio)
- * Aumento de la contaminación del agua debido a las pérdidas de *diesel* y petróleo de las bombas y otros equipos de minería
- * La pérdida de estanques y otras fuentes de agua dulce, como pequeños arroyos, debido al bombeo excesivo
- * La destrucción de campos arables debido a las "zanjas profundas" y el uso indiscriminado de equipos pesados (por ejemplo topadoras)
- * Aumento del uso de madera para construir presas y reforzar túneles subterráneos
- * Aumento del uso de productos no madereros del bosque (por ejemplo bambú y ratán)

Dada la realidad política y económica de Birmania, la mayoría de la población no tiene mucho para elegir. Los habitantes de estas regiones de Birmania, simplemente, están atrapados entre dos poderosos: el ejército y los intereses de las empresas. Con pocas alternativas viables a su disposición, muchas comunidades se sienten obligadas a participar en la explotación no sustentable de sus propios recursos naturales, incluso a pesar de saber que están destruyendo los ecosistemas que necesitan para su propia supervivencia. (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

Filipinas: Avanza oposición contra refinería de níquel de Sumitomo Corp. en Palawan

Aún cuando en 1992 el gobierno local de la isla de Palawan, en un intento por frenar la destrucción y degradación de los bosques del país, canceló las concesiones otorgadas a empresas madereras, no detuvo con ello la amenaza a la integridad de las tierras de las comunidades indígenas de Filipinas. Es que también hay empresas mineras que procuran llevar adelante su negocio a pesar de la oposición de las comunidades locales y las advertencias del daño ambiental que causarían sus actividades.

El proyecto de instalación de una millonaria refinería de níquel financiado en un noventa por ciento por la minera gigante japonesa Sumitomo Metal Mining Corp. y el diez por ciento restante por Rio Tuba Nickel Mining Corp (RTNMC) —una empresa de los hermanos Ronaldo y Manuel Zamora que tiene años operando en la región—, extraerá 10.000 toneladas de níquel. La producción se realizaría durante un lapso de 20 años, comenzando este año e incrementándose en los años sucesivos.

Las actividades de explotación en río Tuba tienen como escenario la región sudoriental de la isla de Palawan. Con más de mil islas e islotes ricos en flora y fauna tropical esparcidos en 1,5 millones de hectáreas, Palawan es la provincia más grande de Filipinas y hogar de varios grupos indígenas entre los que se encuentran los tagbunau, pala'wan, tau't bato y batak.

La población indígena de río Tuba se ha organizado y sumado a otros integrantes de la comunidad para defender su tierra, su salud y su forma de vida. Las toxinas producto de las operaciones mineras han afectado visiblemente las fuentes de agua debido a que las represas diseñadas para contener los desechos se desbordan en la época de lluvias; lo que a su vez ocasiona que los ríos se obstruyan con cieno. Los problemas en la piel y problemas respiratorios que presentan los habitantes de las comunidades, se los achacan al polvo y desechos provenientes de un socavón lateral de la mina. El proyecto que se propone será otro golpe a los cientos de pescadores, agricultores y pueblos indígenas cuya supervivencia depende de un ambiente saludable.

En 1991 se formó la red Palawan NGO Network, Inc. (PNNI), integrada por organizaciones sociales y no gubernamentales de la provincia, a cuyo nombre el Centro de Asistencia Legal Ambiental (ELAC, por su sigla en inglés), con el apoyo de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), presentó el 3 de abril de 2002 un documento ante el Departamento de Manejo Ambiental (EMB) para impedir que se avalara la construcción de un millonario complejo para la refinación de níquel.

En el referido documento se hacía un análisis crítico de los impactos ecológicos, legales y políticos del proyecto de minería, señalando que

viola varias leyes, políticas y directrices del país. El proyecto se asienta y afecta áreas ubicadas dentro de los dominios ancestrales de la comunidad pala'wan. Más de 30 familias de esa comunidad que habitan dichos territorios luchan por reafirmar sus derechos ancestrales a la tierra con el fin de mantener sus medios de vida y temen que en el proyecto se utilicen crestones de piedra caliza de Sitio Gutok, un afloramiento considerado como sitio sagrado.

Por todas esas consideraciones ELAC argumentó que no debía otorgarse un Certificado de Observación Ambiental al referido proyecto minero. Denunció, además, que la evidente oposición de la comunidad demuestra que la empresa no cuenta con el consentimiento de la comunidad. Ello supone una violación de la Ley de Derechos Indígenas, que exige que la empresa obtenga el “consentimiento previo libre e informado” después de presentar abiertamente las intenciones y el alcance de la actividad que se propone llevar a cabo, de manera que la comunidad entienda claramente la situación.

De acuerdo con el informe que ELAC presentó ante el Departamento de Manejo Ambiental, RTNMC utilizó tácticas falaces para obtener las firmas de los dirigentes indígenas y otros grupos, las cuales anexó posteriormente a su declaración de impacto ambiental. Los habitantes de las comunidades y varios grupos como ELAC han denunciado públicamente las formas tramposas con las que la empresa logró el respaldo: “a muchos se les pidió que firmaran una hoja de asistencia que luego resultó ser una carta de apoyo al proyecto de la minera”.

El 10 de julio de 2001, el secretario Heherson Álvarez del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un certificado ambiental al proyecto, certificando que el referido proyecto no provocará un impacto ambiental negativo importante y que el proponente ha observado todos los requerimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho certificado fue luego respaldado por el Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible, un organismo administrativo que regula los proyectos ambientales de la provincia.

El fallo va en contra de los temores fundados de que gran parte del proyecto se realizará en una zona donde no se permiten actividades pues incluye una región costera con arrecifes de coral. Los expertos

que estudiaron la declaración de impacto ambiental presentada por RTNMC encontraron que faltaban detalles sobre el proyecto. A su vez, la empresa no respondió debidamente las preguntas referidas a cómo impediría la filtración de sulfuro y otros peligrosos efluentes de la fábrica.

En setiembre, ELAC se reunió con el senador Robert Jaworski, a raíz de lo cual éste adoptó una resolución senatorial cuestionando el certificado ambiental. Posteriormente hubo otra resolución más con relación a este tema. Como consecuencia, en diciembre pasado el senado realizó una investigación en la que representantes de las ONGs, comunidades indígenas y musulmanas y agricultores de Palawan presentaron su caso. El senado prometió realizar una investigación y la gente está ahora a la espera de que este cuerpo intervenga decididamente para asumir la defensa del ambiente y de los pobladores de Palawan. (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Filipinas: Oposición a política de minería

Se estima que aproximadamente 40% del territorio de Filipinas ha sido entregado en forma de concesiones a compañías mineras multinacionales. Sin embargo, este proceso no ha transcurrido sin oposición. Desde la región de Cordillera en el norte de Filipinas hasta la región sudoriental de la isla Palawan, los grupos indígenas Subanen, Tagbunau, Pala'wan, Tau't bato y Batak han luchado para defender sus territorios de los impactos masivos de la minería.

En 2003, la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo inició una política de promoción de la minería en el país. En este marco, se inició un proceso nacional de consulta en cooperación con la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que ha enfrentado una fuerte oposición de varios grupos de la sociedad civil reunidos en la Conferencia Nacional sobre Minería (National Mining Conference-NMC). Organizaron un "aluvión de faxes" a nivel nacional a ser enviados el 3 de diciembre, como forma de expresar la oposición unificada al Marco de Política Nacional de Minerales y a la Ley de Minería de Filipinas de 1995.

Como lo expresa esta organización, su oposición se basa en las siguientes razones:

“a. La ley está basada en un marco económico orientado a la exportación, una política que sigue siendo un factor esencial para conducir la economía del país a la quiebra.

b. La ley ha abierto nuestra riqueza mineral a la explotación absoluta por parte de inversores extranjeros, entregando así nuestro patrimonio nacional y nuestra soberanía a entidades corporativas que controlan el capital y los conocimientos técnicos.

c. La ley no está basada en la realidad de Filipinas. Nuestro país es un archipiélago con ecosistemas frágiles y las áreas donde están localizados los minerales están habitadas principalmente por pueblos indígenas.

d. La ley no garantiza el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y su derecho a la autodeterminación.

e. La ley continúa distorsionando el desarrollo de nuestra economía que podría lograrse en primera instancia mediante el fortalecimiento de la agricultura y el impulso de la industrialización nacional, en vez de simplemente atraer las inversiones extranjeras para las industrias extractivas como la minería”.

En consecuencia, la Conferencia plantea las siguientes demandas:

“1. Cancelación de todos los permisos de minería ya otorgados y declaración de una moratoria a las actividades de minería en gran escala.

2. Formulación de una nueva Política Nacional de Minerales que respete la integridad de la Creación, cumpla verdaderamente con los principios del desarrollo sustentable, defina claramente el papel de la industria minera en el fortalecimiento de la economía del país basada en el apoyo al desarrollo agrícola y la industrialización nacional, asegure el respeto a los derechos humanos básicos y fortalezca los procesos democráticos.

3. Legislación de un nuevo código de minería en base a esa nueva Política Nacional de Minerales.

4. Con el fin de que la Oficina de Minas y Geociencias mejore su práctica de procesos democráticos: transitar un proceso de consulta muy exhaustivo que asegure que las personas que han sido y serán las más perjudicadas por las operaciones mineras sean plenamente consultadas, posibilitar la expresión de los sentimientos y demandas de los pobladores, y garantizar la difusión de los resultados de la consulta para posibilitar comentarios y aportes. También promovemos la formación de un organismo intersectorial que estudie el impacto de las políticas de minería.

5. Reconocimiento y respeto al derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la autodeterminación. Esto no se verá disminuido por los mecanismos que aseguren los permisos de acceso a los territorios de pueblos indígenas para implementar proyectos de desarrollo como la minería.

6. La resolución de los temas pendientes de las comunidades afectadas por la minería, (la limpieza de los ríos Mogpog y Boac, el conflicto entre los pueblos Subanon de Siocon y TVI, los derechos de los pequeños mineros en Diwalwal, la contaminación del río Abra por parte de la Lepanto Consolidated Mining Corporation, la rehabilitación de las zonas de minería a cielo abierto de la Benguet Corporation, el reclamo de una iniciativa popular de los pobladores de Didipio, la protesta popular contra la Western Mining Corporation, etc.) en vez de la aprobación apresurada de una Política Nacional de Minerales claramente favorable a la industria minera.

7. Realización de una evaluación de los impactos sociales y ambientales de los casi ocho años de instrumentación de la ley 7942 y sus instrumentos regulatorios”.

Estos grupos de la sociedad civil exigen: “Dejen que se oigan las voces del pueblo. La fortaleza de un gobierno sólo puede garantizarse si éste satisface las aspiraciones básicas y las demandas de la mayoría que todavía vive marginada y oprimida”. (Boletín del WRM N° 77, diciembre de 2003).

India: Minería y plantaciones ponen Parque Nacional en riesgo

El permiso de trabajo temporal otorgado a la empresa Kudremukh Iron Ore Company (KIOCL) para continuar la extracción de hierro en el Parque Nacional Kudremukh, localizado en la región de los Ghats Occidentales en el Estado de Karnataka, ha dado lugar a severas críticas de ONGs ambientalistas nacionales e internacionales, quienes han estado ejerciendo presión sobre las autoridades para denegar el pedido de la empresa.

KIOCL ha estado operando en las regiones de Aroli y Malleshwara del Parque Nacional Kudremukh, bajo un contrato de arrendamiento por 30 años, el cual expiró en julio de 1999. Desde entonces la empresa ha estado haciendo campaña para obtener una extensión de 20 años para el arrendamiento, pero sólo se le han concedido permisos para operar por un término de dos años consecutivos.

Los impactos de la minería en el área son evidentes. Un informe de la ONG india Grupo de Apoyo Ambiental - ESG (India Environmental Support Group), demuestra que muchas variedades de peces han desaparecido debido a la contaminación y señala que los campesinos se quejan acerca del deterioro de la productividad de la agricultura aguas abajo debido a la deposición de desechos provenientes de la explotación minera. La contaminación del río ha provocado un incremento en los casos de enfermedades entre los aldeanos. En 1987 una cañería de desechos de 67 metros se rompió y su derrame alcanzó el río Yennehole, lo que produjo graves daños ambientales.

¡La única acción supuestamente llevada a cabo por KIOCL para mitigar los impactos en los ríos y en los bosques del área ha sido plantar árboles exóticos! La compañía aduce haber implementado un programa de "reforestación", plantando 7,5 millones de acacias, eucaliptos y otras especies exóticas. Si dichas afirmaciones fuesen ciertas harían las cosas aún peor, ya que la sustitución de una porción del bosque por una plantación impide la regeneración del bosque secundario, empobreciendo de esa manera el ambiente. Tanto la minería como las plantaciones son una causa directa de la deforestación. Sin embargo, el caso de Kudremukh constituye un caso particular, donde ambas actividades se combinan para destruir el bosque.

El gobierno estadual ha ordenado un Estudio de Impacto Ambiental para ser llevado a cabo antes de la adjudicación de una extensión del contrato de arrendamiento. Sin embargo, esto no es visto como una garantía suficiente por los ambientalistas locales. Leo Saldanha de EGS dice: “Yo sinceramente creo que una campaña pública sistemática es la opción más apropiada para asegurar el fin de la minería en Kudremukh. No hay nada como la voluntad popular para forzar a un gobierno dispuesto a violar compromisos públicos y la ley”. (Boletín del WRM N° 40, noviembre de 2000).

India: Minería en tierras ancestrales para beneficio empresarial

Norsk Hydro, una sociedad anónima noruega con inversiones en metales livianos, petróleo, industria petroquímica y agricultura, junto con la empresa transnacional canadiense Alcan y la empresa india Hindalco está planificando la explotación de bauxita en tierras tribales sagradas en el estado de Orissa en el este de la India. El proyecto también incluiría el procesamiento de un millón de toneladas anuales de bauxita mediante una *joint venture* con la compañía Utkal Alumina Industries Ltd (UAIL).

Las montañas Baphlimali, donde la Hydro piensa extraer bauxita, son la fuente de 350 cursos de agua permanentes, incluyendo los afluentes que alimentan el río Indravati. Para los Adivasis de la región, Baphlimali es una fuente sagrada creadora de vida. Si bien la cubierta forestal de la región ha ido disminuyendo a través de los años, todavía queda suficiente para brindar sustento a los cerca de 70 poblados de la región. Kutrumali, una enorme montaña que las compañías piensan explotar, tiene bosques que cubren entre 10 y 15 por ciento de la meseta. Los pocos recursos forestales que quedan, después de haber sido saqueados por las actividades comerciales del gobierno estatal, son esenciales para la seguridad alimentaria de las tribus durante la estación seca. Los planes de Utkal de extraer 200 millones de toneladas de bauxita de la meseta de Baphlimali destruirían esa cuenca. Las estimaciones sobre las personas que resultarían afectadas negativamente por el proyecto de Utkal van desde 750 (estimación de Hydro), hasta 3.500 (estimación de Utkal) y 60.000 (estimación de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo).

Este proyecto de \$1.000 millones de dólares ha dado lugar a enfrentamientos entre los pobladores tribales que corren riesgo de perder sus tierras y bosques, y la compañía y sus partidarios, entre los que se cuentan el gobierno estatal de Orissa y la policía. El 16 de diciembre de 2000, las protestas de cerca de 4.000 personas de 15 poblados en el área tuvieron un saldo de tres hombres muertos a balazos y otros nueve heridos de gravedad por la policía armada. La primera reacción de Norsk Hydro fue reducir temporalmente las actividades del proyecto hasta que disminuyera el nivel de tensión en el área. Pero esta decisión llegó con varios años de retraso y con un costo de tres vidas. La compañía había alimentado las tensiones, en aumento desde 1993, cuando la población predominantemente tribal de la región tuvo las primeras noticias sobre los planes de Utkal de abrir minas de bauxita.

Utkal ha menospreciado la importancia del ecosistema donde piensa excavar, y falseado las tasas de depósito de sedimentos en su solicitud de habilitación ambiental. Los críticos acusan a Utkal de presentar información engañosa sobre la situación económica y ecológica de la región. Según la ONG Norwatch, la deforestación producida por las minas y la fundición se verá agravada por lo escarpado del terreno, dando lugar a inundaciones más frecuentes, desplazamientos de tierra, y enriquecimiento de nutrientes de los cursos de agua. Simultáneamente, la pérdida de bosques significaría también la pérdida de hábitat para la fauna de la región, que incluye osos, chacales, lobos, *sambars* (un animal parecido al ciervo), ciervos moteados, leopardos y ocasionalmente tigres.

Los intereses empresariales cuentan con el apoyo del gobierno para llevar a cabo sus planes con fines de lucro. Se apropian de las formas de sustento de los pueblos y el medio ambiente sin ni siquiera saber lo que están destruyendo. “Le mostré cuatro hojas de la jungla al guardabosques y le pedí que identificara los árboles. No pudo hacerlo. Si no lo conoce, ¿cómo es posible que el bosque sea suyo?” (Faguaram Gond, distrito de Dhamtari, Chhatisgarh). (Boletín del WRM N° 52, noviembre de 2001).

India: Las mujeres responden a minería devastadora

La minería ejerce impactos devastadores sobre el medio ambiente y los pueblos, pero también produce graves efectos específicos sobre

las mujeres. Además de causar deforestación y contaminar la tierra, los ríos y el aire con desechos tóxicos, la minería destruye los espacios privados y culturales de las mujeres, robándoles su infraestructura de socialización y su rol social, y todo en beneficio de un puñado de grandes corporaciones.

En el caso de India, cuando los proyectos de minería desplazan poblados, las mujeres quedan más desprotegidas; disminuyen incluso sus posibilidades de reclamar al menos una rehabilitación o una indemnización, ya que no tienen ningún derecho sobre la tierra ni sobre los recursos naturales. Como se talan los bosques para dar lugar a las minas y la infraestructura que las acompaña —con frecuencia en violación de las leyes y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo los derechos ancestrales y culturales de los pueblos indígenas— las mujeres son alienadas de sus roles económicos tradicionales y pierden su derecho a realizar sus cultivos tradicionales o a recolectar productos del bosque para consumo doméstico y fines medicinales. Sumergidas en una economía monetaria que les es ajena, pueden verse obligadas a adoptar formas marginales de trabajo como sirvientas y empleadas o ejercer la prostitución. También deben enfrentar males sociales antes inexistentes, como la violencia doméstica, el alcoholismo, las deudas, el acoso físico y sexual, que se convierten en moneda corriente en las comunidades mineras y en las que sufren los impactos de la minería.

La minería, por su propia naturaleza, no proporciona empleo a las mujeres, y por lo tanto éstas pierden su independencia porque dependen únicamente de los sueldos de los hombres de la familia. En los casos en que obtienen empleo —en minas pequeñas del sector privado— son las primeras en ser despedidas, no están protegidas por ninguna medida de seguridad laboral, están expuestas a riesgos de salud graves que afectan su salud y su capacidad de tener hijos sanos. Las condiciones de trabajo, en el caso en que estén empleadas en actividades mineras, exponen a las mujeres a la explotación sexual.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres mineras o mujeres afectadas por la minería han crecido en forma escandalosa con el ingreso del gran capital y las corporaciones privadas, mientras que el gobierno hace caso omiso a esta situación. Por

el contrario, las acciones de protesta y resistencia de las víctimas han recibido una respuesta violenta de parte del estado.

Sin embargo, contra este marco de explotación y alienación de las mujeres de su medio ambiente, se libran muchas batallas en pequeña escala para proteger y defender los derechos de la mujer, ya que las comunidades, l@s trabajador@s, y quienes protegen los recursos naturales y la ecología están intentando unirse para hacerse oír y actuar en forma colectiva.

Con este fin se ha formado una alianza nacional llamada “minas, minerales y Pueblos” (mines, minerals & PEOPLE - mm&P). Un foco central de esta alianza es la Red Nacional de Mujeres y Minería (National Network of Women and Mining) en India, que busca tratar los problemas de las mujeres mineras y las mujeres que habitan en comunidades afectadas por la minería. Esta red es miembro de la Red Internacional de Mujeres y Minería (International Network of Women and Mining) y de su oficina coordinadora para la región Asia-Pacífico.

La red se plantea los siguientes objetivos:

- * Aumentar la comprensión sobre la situación de la mujeres mineras y las mujeres afectadas por la minería
- * Trabajar por los derechos de las mujeres mineras y las mujeres desplazadas y afectadas por la minería
- * Trabajar hacia formas de lucha colectiva para defender una política de minería con sensibilidad de género para el país
- * Establecer vínculos con las luchas de las mujeres y las campañas a nivel nacional e internacional, en particular en la región Asia-Pacífico, para ganar fuerza y solidaridad para sus luchas
- * Luchar por nuevos derechos legales para las mujeres, que les permitan ganar control sobre la tierra y otros recursos naturales que han sido tradicionalmente dominios en manos los hombres.
- * Realizar campañas por la protección de los derechos humanos de las mujeres desplazadas por la minería, o que trabajan o viven en áreas mineras.
- * Luchar contra el empleo de niñas y mujeres jóvenes en las minas.
- * Aumentar la comprensión sobre los problemas de salud y los riesgos de las mujeres en las áreas mineras y abordar estos problemas.

- * Organizar la Tercer Conferencia Internacional sobre Mujeres y Minería en India (que tendrá lugar en octubre de 2004, de la cual mm&P será la organización anfitriona).

La Red asume el "Pacto para la vida", "porque la tierra es nuestra madre y los ríos son la leche de nuestra madre. La tierra es nuestra vida y nuestra muerte. Por esta razón exigimos agua para todos, pozos protegidos, ríos libres de contaminación y desechos, una tierra sin degradación". (Boletín del WRM N° 80, marzo de 2004).

Indonesia: Aumenta la presión de la minería sobre los bosques

La minería es una de las actividades más lucrativas de Indonesia, pero al mismo tiempo está destruyendo recursos naturales de los que dependen el sustento y la salud de decenas de millones de indonesios de la ciudad y el campo. Entre estos recursos están los que antes fueran vastos bosques del archipiélago, cuya destrucción es ahora mucho más acelerada que nunca.

Los problemas de la minería y la destrucción de los bosques están inevitable e íntimamente entrelazados en Indonesia, dado que gran parte de la superficie continental del país es (o solía ser) de bosques, y gran parte del subsuelo rocoso contiene minerales de valor comercial.

Los bosques (incluso aquellos degradados y fragmentados) cubren actualmente menos de la mitad de la superficie continental total del país, que asciende a 189 millones de hectáreas. Esos bosques están divididos en áreas que se pueden explotar (bosques de producción); aquellas que pueden convertirse a otros usos como plantaciones o arrozales (bosques de conversión) y las que no se deben explotar (para proteger cuencas, albergar santuarios de fauna, etc.). Este último tipo incluye bosques de protección (oficialmente, 35 millones de hectáreas) y bosques de conservación (19 millones de hectáreas).

Mientras tanto, las concesiones mineras abarcan una superficie estimada de 47 a 67 millones de hectáreas y el área total de bosque con potencial para la minería ha sido estimada en 84,7 millones de hectáreas. De las concesiones existentes, una sorprendente de 11.400.000

hectáreas, se superpone con bosques de protección y conservación, mayoritariamente en Papúa Occidental, Sumatra y Kalimantan.

Desde la aprobación de la nueva Ley Forestal en 1999, la minería a cielo abierto está prohibida en estos bosques, dejando en el limbo las actividades de exploración y construcción de infraestructura minera de aproximadamente 150 compañías. Las ONGs indonesias, lideradas por la red de acción contra la minería JATAM, han organizado una fuerte campaña para mantener la prohibición. Pero existe una gran presión por parte de la industria minera, los miembros pro-minería del gobierno de Yakarta y gobiernos extranjeros, para burlarla. Este tema ha generado un enfrentamiento importante entre el Ministerio de Bosques, que quiere mantener el estatus de bosque protegido, por un lado, y los demás ministerios, liderados por el Ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, por el otro. Esto ha provocado que las decisiones sobre la suerte de las concesiones mineras otorgadas antes de 1999 hayan sido largamente demoradas.

En abril de 2001, el Ministerio de Bosques anunció de mala gana que seis compañías podían seguir adelante con sus actividades mineras; en tres de esas áreas se cambiaron los límites de los bosques para adaptarlos a las actividades empresariales. Se suponía que habría una decisión sobre veintidós compañías antes de fines de junio, pero el 17 de junio Purnomo anunció que quince de ellas (incluidas tres de las concesiones ya mencionadas por el Ministerio de Bosques) estarían autorizadas a continuar con sus actividades, sujetas a la autorización presidencial. Afirmó que la inversión solamente de las cuatro concesiones más grandes representaba 9 mil millones de dólares. Las ONGs anticipan que una decisión favorable a la minería aumentará el conflicto con las comunidades locales cuyas tierras serán expropiadas para la minería, aumentando la contaminación de los cursos de agua y las inundaciones y deslizamientos de tierra con consecuencias fatales mientras se pierde la cobertura boscosa.

Una decisión en contra de la protección de los bosques también representará la continuación de una política que data de la época del régimen del ex presidente Suharto, que siempre favoreció los intereses de los inversores (y las perspectivas de llenar su propio bolsillo)

por encima de los intereses de los indonesios comunes, quienes son los que pagaron los costos ocultos que produjo la minería en sus formas de sustento, su economía, su cultura y su salud.

Muchos de los poderosos actores industriales que se beneficiaron durante la era Suharto, son los que hoy se quejan de la prohibición de realizar actividades de minería en los bosques de protección, sobre la falta de certidumbre legal generada por el programa de descentralización de Indonesia y porque el Estado no ha logrado controlar a los manifestantes y a los mineros ilegales que amenazan sus actividades. Entre ellos figuran Rio Tinto, Freeport MacMoran, BHP-Billiton, Newmont, BP e Inco, grandes empresas multinacionales cuyas operaciones han producido conflictos con comunidades locales y daños ambientales en muchos países. Lo que estas compañías no reconocen es el papel que cumplieron de apoyo a una dictadura basada en el saqueo por la fuerza de los recursos naturales y el robo de tierras y bosques a las poblaciones que los poseían. No es de extrañar que durante el breve período post-Suharto, cuando fue necesario hacer concesiones a una población indignada, la industria minera perdiera algunos de sus privilegios.

Hoy, la justificación para permitir la minería en bosques de protección se basa en la necesidad de obtener inversiones que ayuden a Indonesia a salir de su prolongada crisis económica, una medida apoyada por los acreedores de Indonesia de la comunidad internacional. Pero las ONGs se muestran escépticas, sobre si los ingresos provenientes de la minería podrían llegar siquiera a compensar el daño ambiental y social a largo plazo que produce esa actividad, incluso sin la corrupción que asegura que muy pocos beneficios lleguen a las comunidades.

Por supuesto también está la motivación de lucro, íntimamente ligada a los intereses del ejército de Indonesia para el cual el 75% de sus ingresos proviene de “actividades comerciales” extrapresupuestales. El lucro también es causante de una superposición financiera entre la minería y los bosques, ya que los intereses comerciales militares incluyen tanto actividades relacionadas con el maderero como con la minería. Abarcan desde contratos para vigilar grandes operaciones mineras extranjeras (generosamente pagados por la compañía involucrada), hasta la participación directa en operaciones ilegales de mine-

ría y madereo en asociación con empresarios y funcionarios gubernamentales locales corruptos que no se preocupan en absoluto por los impactos que ocasionan en los bosques y los pobladores locales. También está involucrada la policía especial indonesia (Brimob), en especial en la vigilancia de sitios de las compañías y en manejar a la oposición. En las zonas conflictivas de Aceh y Papúa occidental, donde bosques ricos y recursos minerales brindan amplias oportunidades para el lucro, los militares han llegado a provocar conflictos para poder justificar su presencia permanente en la región.

Actualmente, aprovechando la agenda del antiterrorismo mundial y las estrechas relaciones con la Presidenta Megawati, el ejército ejerce una influencia mayor sobre los políticos indonesios. Esto tiene consecuencias graves para todos los indonesios, que bien podrían vivir un retorno al “criterio de seguridad” de la época de Suharto, bajo el cual las disputas sobre tierras y recursos se resuelven mediante la intervención militar. Para los pueblos indígenas y otras comunidades que habitan en los bosques, cuyas tierras contienen recursos minerales requeridos por los mercados mundiales, el panorama es lúgubre. El aumento de la influencia del ejército significará más desalojos forzosos para ceder lugar a las minas, mayor destrucción de los recursos de los bosques, y más intimidación y violencia contra quienes protestan. También significa una lucha más dura para asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el manejo de sus bosques. (Por: Carolyn Marr, Boletín del WRM N° 71, Junio de 2003).

Indonesia: Crece la oposición a la minería en áreas protegidas

La “Coalición en oposición a la minería en áreas protegidas de Indonesia” emitió un comunicado de prensa para divulgar la creciente y fuerte oposición que ha generado la minería a varios niveles. Diez grupos integran la Coalición: JATAM; WALHI-Friends of the Earth; Indonesian Center for Environment Law; WWF Indonesia; Kehati; PELANGI; Forest Watch Indonesia; MPI; POKJA PSDA y PELA.

La sociedad civil ha reaccionado contra la minería a cielo abierto en los bosques protegidos de Sumatra, Kalimantan, Java, Sumbawa Be-

sar (sudeste de Indonesia) y Sulawesi. Se han enviado cartas de protesta, postales, se han realizado manifestaciones y declaraciones y se han emitido comunicados de gobiernos provinciales, estudiantes, académicos, pueblos indígenas, ciudadanos indonesios comunes y la comunidad internacional.

Al parecer, la percepción de la opinión pública es que las cosas han ido demasiado lejos en relación con las actividades mineras. Es así que los planes de la compañía minera Placer Dome de extraer oro en los bosques protegidos de las montañas Meratus en Kalimantan sur – hogar de los pueblos Dayak y los orangutanes– han dado lugar a una encendida carta de protesta de los representantes indígenas Dayak, una manifestación en la capital provincial de Kalimantan del Sur el 1° de julio exigiendo medidas gubernamentales para rechazar el cabildeo de Placer Dome, y una declaración del gobierno provincial exhortando al parlamento nacional de Indonesia a no permitir la minería en el bosque protegido de las montañas Meratus. Ya era hora, teniendo en cuenta que el 44% de los bosques de los Dayak ha sido degradado en apenas 12 años.

En Palu, capital de la isla central Sulawesi, la oposición sostenida de la comunidad ha incluido protestas dirigidas directamente contra los planes de Rio Tinto y Newcrest de instalar una mina de oro en el Parque del Bosque Protegido de Poboya. Esas acciones han dado lugar a declaraciones tanto de la Cámara de Representantes provincial (2 de julio de 2003) como del profesor Aminuddin Ponulele, gobernador de Sulawesi Central, de que rechazarán todo intento del gobierno central de permitir el avance de la minería. La amenaza planteada por los metales pesados, el polvo y otros desechos producidos por la mina al bosque protegido de Poboya y al suministro de agua de los 200.000 residentes de Palu es un riesgo demasiado grande según el gobernador Aminuddin, cuyas palabras fueron citadas por el periódico local Radar Palu el 3 de julio de 2003. El gobernador solicita a la compañía PT Citra Palu Minerals, una empresa mixta de Rio Tinto y Newcrest, que abandone la provincia de Sulawesi Central.

Hasta la habitualmente apolítica oficina de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para Asia y el Pacífico, en Yakarta, ha apelado a los comités parla-

mentarios indonesios que actualmente están considerando los planes gubernamentales de realizar actividades mineras en áreas protegidas. Envío una carta con una referencia específica a la pequeña isla Gag en Papúa Occidental, donde la compañía BHP Billiton planea construir la mina de níquel más grande del mundo y verter los desechos de la mina al mar. Un Taller Internacional de UICN/UNESCO realizado en Hanoi en febrero de 2002 había elegido el archipiélago de Raja Ampat, que incluye la isla Gag, como uno de los siete sitios a considerar como Patrimonio Mundial de la Humanidad de una lista de 25 sitios posibles en el sudeste asiático, elegidos por su alta biodiversidad: 505 especies de coral –representando nada menos que el 64% del total de especies de coral conocidas en el mundo–, 1.065 especies de peces, una de las diversidades de peces más altas del mundo. La intervención de la UNESCO es un golpe para las intenciones de BHP Billiton de modificar la situación de bosque protegido y para sus planes de utilizar el método de eliminación submarina (oceánica) de desechos, a pesar de sus pretensiones de haberse reformado después del desastre de Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea. La mina de Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea, propiedad de BHP, produjo una grave contaminación de largo plazo en el río Fly, y las comunidades locales demandaron con éxito a BHP por varios millones de dólares por daños.

También la comunidad internacional ha reaccionado. La Presidenta Megawati ha recibido más de 1.100 cartas provenientes de personas y organizaciones de 43 países, que incluyen testimonios como el de Beth Partin, que al enterarse de los intentos de la compañía minera estadounidense Newmont de ampliar sus actividades en los bosques protegidos de Indonesia, expresó: “Vivo cerca de Denver, Colorado, donde tiene su sede la compañía Newmont. En Colorado convivimos diariamente con los daños causados por la minería. El río Alamosa, por ejemplo, fue contaminado hace más de diez años por una filtración de cianuro y después de años de limpieza apenas comienza a mostrar algunos signos de vida”.

Hasta la fecha se enviaron más de 6.000 juegos de tres postales, una dirigida a la Cámara de Representantes, otra al Ministerio de Bosques y la tercera al Ministerio de Energía y Recursos, firmadas por ciudadanos indonesios como expresión de apoyo a las protecciones ambientales existentes contra la minería. Los estudiantes ambientalistas han

organizado protestas ante la Embajada de Australia en rechazo al respaldo del gobierno australiano y otros gobiernos extranjeros a las compañías mineras. También ha habido manifestaciones de protesta ante la Cámara de Representantes y ante el Ministerio de Bosques, y se planean más para el futuro. El 3 de julio de 2003, los directores de educación forestal de cinco prestigiosas universidades: el Instituto de Agricultura de Bogor, la Universidad de Gajah Mada, la Universidad de Mulawarman, la Universidad de Hasanuddin y los Grupos de la Universidad de Lampung, hicieron una declaración de oposición a la minería en las áreas protegidas. Estudiantes y académicos resaltaron que la contribución económica total realizada por la explotación forestal sustentable y la protección ambiental, según surge del presupuesto nacional de Indonesia, supera la de la minería, y tiene mucho más potencial sin explotar. (Boletín del WRM N° 72, julio de 2003).

Laos: La Corporación Financiera Internacional apoya mina de oro australiana

El 28 de febrero de 2002, la Corporación Financiera Internacional (CFI), órgano para el sector privado del Banco Mundial, aprobó un préstamo de US\$ 30 millones para el desarrollo de una mina de oro en Sepon en la provincia de Savannakhet en Laos. La mina, que será la operación minera más grande de Laos, es 80 por ciento propiedad de Oxiana Resources, una compañía de extracción minera australiana, y 20 por ciento propiedad de Río Tinto.

Está previsto que la construcción de este proyecto de US\$ 45 millones termine a fines de 2002. Los trabajos preliminares, incluyendo la modernización de carreteras y los preparativos para la planta de oro, ya comenzaron en el sitio y la primera producción de oro de la mina está planificada para diciembre de 2002. Oxiana estima que los depósitos de oro de Sepon tienen un valor de mil millones de dólares.

Río Tinto comenzó a explorar en busca de oro en el área cerca de la frontera vietnamita a principios de los años 1990. Sin embargo, se consideró que los depósitos hallados eran demasiado pequeños y en agosto de 2000, la compañía vendió el 80 por ciento de sus operaciones en Laos a Oxiana. Oxiana obtuvo así los derechos para explorar, desarrollar y extraer cualquier tipo de recurso mineral en un área de 2.000 kilómetros cuadrados en Laos.

Las compañías han negociado subsidios generosos por parte del gobierno de Laos. Durante los dos primeros años, Oxiana y Rio Tinto estarán exentas de pagar los impuestos a las sociedades de capital y sus empleados estarán exentos del pago del impuesto a la renta. Durante los dos años siguientes se pagará el impuesto a las sociedades pero sólo la mitad del monto habitual. Como la mina solamente operará durante siete años, esto significa que el gobierno sólo recibirá el importe completo del impuesto a las sociedades durante tres años. Mientras tanto, no habrá impuestos o restricciones sobre la repatriación de dinero proveniente del proyecto. El gobierno de Laos también ha renunciado al cobro de tasas sobre los equipos importados. A cambio, recibirá el 2,5 por ciento del valor del mineral extraído (pero sólo después de que Oxiana haya restado el costo de venta, transporte, fundición, refinación y otros costos de tratamiento). El gobierno también tiene la opción de comprar el 10% de las acciones de la mina.

Oxiana y Rio Tinto piensan utilizar las ganancias de la mina de oro para desarrollar una mina de cobre de US\$ 100 millones en el poblado cercano de Khanong. Las compañías estiman que podría haber cobre por un valor de US\$ 2 mil millones en Khanong. Aunque la mina de cobre se describe en los documentos de proyecto como la Fase 2 de la operación, la CFI aprobó su préstamo sin realizar los estudios sobre el impacto combinado que producirían ambas minas.

Desaparecerán los bosques, las tierras de cultivo y los cultivos migratorios de los pobladores para dar lugar a las minas. La mina de oro de Sepon cubrirá un área de 27,6 kilómetros cuadrados, cruzando el río Nam Kok, un afluente del Mekong. Se dañará la pesca. Se arrojarán grandes volúmenes de rocas y tierra de desecho. Caerá la capa freática local. Para extraer el oro del mineral se usará cianuro, una sustancia química extremadamente tóxica para los peces, la fauna, la flora y los seres humanos. Las pérdidas de cianuro son comunes en las operaciones mineras.

Para ceder lugar a la mina, se desalojarán dos poblados, con un total de 120 habitantes. La mina también ocupará tierras dentro del territorio de otros poblados. El Plan de acción de reasentamiento del proyecto reconoce que en esos poblados, "la reubicación podría resultar eventualmente necesaria", y añade que "es posible que sea necesario

incluir en la lista de reubicación a otro poblado, Ban Vieng (25 hogares), que actualmente no figura en la lista”.

Oxiana encargó a las empresas consultoras NSR Environmental Consultants de Australia y Earth Systems Lao, la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que concluyó en noviembre de 2001. La CFI describe la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto como “detallada”, si bien los consultores no saben si tres especies de peces amenazadas viven en el río Nam Kok o no. Al parecer tampoco saben cuál será el impacto de la mina sobre estas especies. Los asesores informan que “si esas especies existen realmente, los impactos podrían calificarse entre ‘graves’ y ‘muy menores’”. En base a esta escasa información, la CFI decidió apoyar el proyecto.

Este apoyo beneficia básicamente a las compañías que desarrollan los proyectos, Rio Tinto y Oxiana, al mismo tiempo que pone en riesgo el sustento y el medio ambiente de las comunidades locales.

Rio Tinto es la corporación minera más grande del mundo, con más de 60 minas y plantas de procesamiento en más de 40 países. Los antecedentes de esta empresa en cuanto a violaciones de derechos humanos y destrucción de comunidades y de sus territorios, ríos y bosques son espeluznantes. Una moción presentada en 1998 ante el Parlamento del Reino Unido describía a Rio Tinto como “probablemente la compañía menos compasiva y más cruel de todo el mundo”.

Oxiana Resources fue fundada por Owen Hegarty, un ex ejecutivo de Rio Tinto. Con sede en Melbourne, Oxiana es una compañía de extracción de oro y cobre. Además del proyecto Sepon, la empresa es propietaria de Dalton Pacific Resources en las Islas Filipinas, con seis proyectos mineros de oro y cobre en el norte de Luzon. También posee acciones en minas de Chipre y Australia.

La CFI espera que su participación en la mina de oro de Sepon impulse el desarrollo de nuevos proyectos mineros en Laos: “La inversión en el proyecto ayudará a aumentar la confianza de la comunidad de inversores en la minería y otros sectores de la economía”. Supuestamente, la misión del Grupo Banco Mundial es mitigar la pobreza, pero

la CFI parece estar más preocupada por ayudar a los ricos a hacerse más ricos. (Boletín del WRM N° 57, abril de 2002).

Tailandia: Comunidades étnicas envenenadas por minas de plomo letales

En el este de Tailandia, las minas de plomo están matando comunidades étnicas y contaminando las fuentes de agua en el complejo del santuario de fauna y flora Thung Yai Naresuan, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Varios pobladores de la comunidad étnica Karen, particularmente en el poblado de Lower Klity, ya han muerto a causa de la contaminación con plomo mientras varias docenas de personas, principalmente mujeres y niños, sufren envenenamiento agudo por plomo originado por beber, pescar y lavarse en el río Klity, cerca del poblado. Casi 100 vacas murieron y los pobladores no pueden beber el agua del río porque se enferman. Algunos guardabosques de Thung Yai creen que la fauna también está sufriendo porque han visto morir ciervos y ciervos ratones de la misma forma que el ganado.

Las minas de plomo que han funcionado durante los últimos cuarenta años, constituyen una gran amenaza para los ecosistemas de bosque del oeste de Tailandia, ubicados justo en medio del enorme territorio ocupado por un complejo de bosque tropical prístino que incluye el santuario de fauna Thung Yai Naresuan, cuya ecología y biodiversidad únicas le valieron un lugar entre los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

Si bien las minas de plomo están ubicadas fuera del santuario Thung Yai Naresuan, los efectos de la contaminación por descarga de tóxicos se están extendiendo mucho más allá de las zonas de concesión de las minas. La descarga de desechos sin tratar, que contienen plomo, está contaminando los recursos hídricos y los hábitats del santuario. Los camiones transportadores de minerales perturban la fauna yendo y viniendo regularmente a través del santuario.

Como mínimo seis minas funcionan a lo largo de los límites del santuario: al norte en la provincia de Kanchanaburi están las minas de

Phu Jue, Phu Mong y Kao Lee, en el lado sur están Klity, Bo Ngam, Kanchanaburi Exploration and Mining Co., Ltd. (KEMCO o Song Thor) y una serie de otras minas de plomo de pequeña o gran escala, además de plantas de separación de plomo. Bhol and Son Co. Ltd o sus subsidiarias, KEMCO y Lead Concentrate Co., Ltd, son las propietarias de la mayoría de las minas. Bhol and Son Co, operador de la mina de Klity, tiene vínculos con un poderoso líder local y con un político del Partido Demócrata de Tailandia.

En abril de 1998, los pobladores de Lower Klity, aguas abajo de la mina Klity y de la planta de separación de plomo, presentaron una demanda ante el Departamento de Control de Contaminación de Tailandia. Los pobladores denunciaron que el agua residual de la mina había contaminado su único recurso de agua, el río Klity. Su ganado y sus pollos enfermaron o murieron después de tomar el agua del río.

Una investigación posterior realizada por el departamento reveló que la mina no trató las aguas residuales y las vertió ilegalmente en el río. Un estudio anterior de 1995 realizado por el Departamento de Recursos Minerales determinó que la mina excavaba el sedimento de su estanque de aguas residuales y lo vertía fuera del área de la concesión. El Departamento advirtió que los desechos con contenido de plomo podrían ser arrastrados por la lluvia y contaminar el acuífero y las vías fluviales de la zona.

Como consecuencia de las protestas de los pobladores, la oficina de recursos minerales de Kanchanaburi ordenó el cierre temporal de la mina de Klity hasta que la misma mejorara sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales. El Departamento de Control de Contaminación envió un equipo para verificar el estado del agua y los sedimentos en el área de Huai Klity.

Los 221 habitantes de Klity Lang sufren de envenenamiento por plomo por beber el agua del río Klity. "El poblado entero está muriendo", afirmó el jefe interino del poblado, que sufre de dolores musculares y fatiga crónicos.

Yasoer dijo que los pobladores comenzaron a sospechar que algo no estaba bien hace una década cuando todos comenzaron a mostrar

los mismos síntomas: dolor en músculos y articulaciones, fatiga, pérdida de apetito, dolor de cabeza crónico, hinchazón y ceguera.

Las comunidades étnicas Karen han visto cómo sus recursos de subsistencia se han ido perdiendo lentamente. Los peces ahora flotan muertos en la superficie. Los mariscos y camarones, que antes abundaban, casi han desaparecido. “Antes había tantos peces que se podía comenzar a hervir el arroz antes de salir a pescar. Antes de que el arroz estuviera hecho, podíamos pescar lo suficiente para una comida. Ahora podemos estar todo el día sentados y no pescamos nada”, comentó el Sr. Yasoer. Los pobladores también han perdido su ganado debido al envenenamiento por plomo. Más de 50 vacas que bebieron agua del río o comieron el pasto de la ribera del río enfermaron y murieron. Hace unos pocos años, murió una bandada entera de patos después de entrar en el río.

Según el estudio del Departamento de Recursos Naturales de 1995, la contaminación por plomo dentro y en los alrededores de las zonas de la mina es muy alta, y son decenas de miles las toneladas de plomo que todavía están depositadas en el fondo del río Klity.

Por ejemplo, la cantidad de plomo sedimentado en el río Klity, aguas abajo de la mina, es de entre 165.720 y 552.380 ppm (partes por millón). La norma de seguridad de Tailandia establece 200 ppm. El Departamento de Control de Contaminación afirmó que se determinó que el nivel de plomo en el flujo sanguíneo de 39 niños del poblado de Klity casi duplicaba la cantidad suficiente como para causar daño cerebral permanente. Exámenes médicos realizados en 1999 revelaron que la sangre de los pobladores contenía 110 veces la cantidad de plomo promedio en sangre. Dado que el 70 por ciento del agua contaminada con plomo puede entrar en la cadena alimenticia, el agua del río Klity no sólo no es potable sino que ni siquiera se puede usar para regar las plantas. La acumulación de plomo en el organismo humano, incluso en cantidades cercanas a cero, puede a largo plazo dañar las neuronas y el sistema nervioso.

En 1998, el gobierno ordenó el cierre de la mina de Klity y su planta de limpieza de mineral e impuso a la compañía una multa de apenas US\$ 47. En abril de 1998, la compañía entregó a los pobladores cerca de

US\$ 23.000 en compensación, monto que los activistas y víctimas se negaron a aceptar por considerarlo inadecuado y una fórmula para evadir su responsabilidad.

Los ambientalistas de Tailandia han protestado afirmando que la suspensión temporal de una sola mina no asegura en absoluto la salud a largo plazo de la zona de bosque de Thung Yai Naresuan. Narong Jangkamol, un investigador del grupo ambientalista Fundación Seub Nakhasathien, con sede en Bangkok, destacó que las depresiones (“sink holes”), un rasgo típico de la topografía de piedra caliza de la región, son abundantes en las zonas de las minas de forma que el agua residual de los estanques de sedimentación se filtra con facilidad a los recursos de agua superficiales y subterráneos, ampliando el área de contaminación por plomo.

El grupo voluntario Centro Karen de Estudios y Desarrollo (Karen Studies and Development Center) anunció que ha comenzado a reunir evidencia contra la compañía para un próximo juicio. Afirma que cerrar la mina no es suficiente y que la compañía debe extraer el sedimento contaminado que dragó del lecho del curso de agua y enterró directamente en la ribera.

“Los días de Klity están contados a menos que se tomen medidas de inmediato. Los años de envenenamiento están comenzando a mostrar sus efectos en la genética de los pobladores”, afirmó Surapong Kongchantuk, director del Centro Karen de Estudios y Desarrollo.

Todos los niños nacidos en los últimos seis años sufren de discapacidad mental. Presentan atrofia de crecimiento y problemas de coordinación muscular. Dos niñas nacieron sin vagina, mientras que otros niños presentan cabezas anormalmente grandes.

“Nunca antes vi tales deformidades”, dijo Surapong, que ha trabajado con las comunidades Karen durante más de 20 años.

Manumia Thongpaphumcharerd, de treinta años, afirma que comenzó a cojear en 1993 y que a menudo se encuentra a sí misma cayendo en un mundo de sueños. “Fue como si casi todo se volviera borroso y me perdiera todo el tiempo”, afirmó esta mujer, madre de cinco hijos,

cuatro de los cuales presentan discapacidades motrices. Su padre y su hermano menor están entre las 23 personas que murieron en los últimos ocho años. Trece de los muertos eran niños. Los médicos afirmaron que las muertes fueron causadas por disfunción renal, resultado del envenenamiento por plomo.

Pero el gobierno no ha ofrecido ninguna medida de reparación ni otro tipo de asistencia a los pobladores afectados. Los pobladores recibieron medicamentos una sola vez, donados por un filántropo. El grupo de Surapong y otros denuncian las conexiones políticas del dueño de la mina, que durante mucho tiempo evitaron que la compañía fuera investigada.

Los Karens tailandeses del Grupo Tailandia Occidental (Western Thailand Group), una red de comunidades étnicas Karen que mayoritariamente viven en los bosques del oeste de Tailandia, han declarado que la mina de plomo de Klity debe ser clausurada definitivamente. El grupo se está movilizandando para lograr el cierre de la mina de Klity y para eso cuenta con el apoyo de organizaciones ambientalistas y Karens de otras partes del país.

“Cada vez que los pobladores se quejan, el gerente de la mina promete comenzar de nuevo desde cero, pero nunca cumplen lo que prometen. La única forma de resolver el problema de una vez y para siempre es cerrar la mina”, afirmó el secretario de la red Wuth Boonlert.

La red de Karens tailandeses también exhorta a las autoridades sanitarias a que examinen la salud de los pobladores de Lower Klity. El uso prolongado de agua contaminada con plomo provoca daños en el sistema nervioso central de los pobladores. El río Klity desemboca en el río Kwae Yai en la región este de Tailandia. Esto significa que los pobladores aguas abajo, en las provincias de Kanchanaburi y Ratchaburi, también están expuestos a sufrir daños en su salud.

Los pobladores también han rechazado ser reasentados. “Nuestros ancestros exploraron todas las demás regiones del bosque antes de decidir instalarse en este lugar. No nos podemos mover”, afirmó Ya-soer. (Por: Noel Rajesh, Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

Vietnam: Biodiversidad única amenazada por fábrica de cemento financiada por el Banco Mundial

Los paisajes de *karst* (relieve en piedra caliza) de Vietnam son famosos en todo el mundo. El paisaje de piedra caliza seguramente más famoso del país se encuentra en la bahía de Ha Long, declarada Patrimonio de la Humanidad. En 1962, el paisaje de karst de Cuc Phuong, en el norte de Vietnam, se convirtió en el primer parque nacional del país.

Además de ofrecer un paisaje espectacular, la piedra caliza es la materia prima fundamental para la fabricación de cemento, y muchos paisajes de karst están en peligro. Vietnam no es la excepción.

En 1998, una nueva fábrica de cemento llamada Morning Star Cement, comenzó a operar en Hon Chong, en la provincia de Kien Giang, en el sudoeste de Vietnam, cerca de la frontera con Camboya. El proyecto es una *joint venture* entre la compañía de cemento suiza Holcim (65%), y Ha Tien I Cement Company de Vietnam (35%). Desde entonces, Morning Star cambió su nombre por Holcim (Vietnam) Ltd. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), el brazo del sector privado del Banco Mundial, otorgó un préstamo de US\$ 30 millones para construir una fábrica de cemento con una capacidad de producción de 1,7 millones de toneladas al año.

Holcim explotará tres montañas de piedra caliza cerca de su fábrica de cemento para obtener la materia prima para su producción. Según el sitio web de la compañía, Holcim Vietnam apunta a “lograr un desempeño ambiental de primera clase de nuestras operaciones y activos. Holcim Vietnam reconoce que las materias primas, el suelo, el agua y el aire son recursos finitos que debemos manejar en forma cuidadosa y responsable”.

Sin embargo, la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto prácticamente no menciona el impacto que producen las canteras de piedra caliza de Holcim sobre la biodiversidad. La EIA, realizada en 1995 por el Centro de Protección Ambiental de la ciudad Ho Chi Minh, simplemente informa que “se ha detectado muy poca fauna en la zona – apenas unos pocos monos y una sorprendente ausencia de aves. La EIA no identificó ninguna especie animal protegida o en amenaza de extinción en la zona”.

Según el Karst Waters Institute, una organización sin fines de lucro con sede en EE.UU., el karst de Ha Tien-Hon Chong tiene una “compilación única de especies vegetales y animales debido en gran parte a su aislamiento geográfico”. La zona es hábitat de murciélagos, reptiles, pájaros y animales pequeños. También se ha informado de la presencia en el área de lagures (tipo de mono) en peligro de extinción.

En 1997, el Instituto informó que “las protestas de pobladores locales, autoridades provinciales y científicos de la Universidad de Ho Chi Minh han sido ignoradas hasta el momento por el gobierno de Hanoi” y añadió que Holcim “ha demostrado una actitud particularmente insensible a los temas ambientales relativos al *karst*”. El Instituto incluyó el paisaje de *karst* de Ha Tien-Hon Chong, donde opera Holcim, en su lista de 1998 de los diez paisajes de *karst* más amenazados del mundo.

En octubre de 1999, el Grupo de Trabajo de Cavernas y Karsts de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) informó en su boletín que a fines de la década de 1990, “el Banco Mundial se mostró preocupado por el impacto tanto sobre la biodiversidad como sobre la herencia cultural, que se estaba produciendo como resultado de la explotación de canteras de piedra caliza para la fabricación de cemento en la región de Asia Oriental”. El Banco contrató al Dr. Jaap Vermeulen del Museo de Historia Natural de Leiden, Holanda, para “establecer un proceso de consulta”.

En enero de 1999, el Banco Mundial y la UICN organizaron un taller sobre *karst* en Bangkok, y en setiembre el Banco publicó los resultados del trabajo de Vermeulen. Vermeulen y Tony Witten, coautor del trabajo (funcionario del Banco Mundial), confirmaron que la EIA de las operaciones de Holcim “no analizó en detalle la biodiversidad de las montañas de piedra caliza”.

Los autores comentaron con cautela que “se consideró prudente reconsiderar la cuestión de la diversidad biológica de estas montañas de piedra caliza para determinar si en este caso en particular son necesarias nuevas intervenciones en la gestión, y para examinar cómo la IFC y posibles auspiciantes futuros deberían abordar estos temas en forma más general”.

Usando fondos de fideicomiso australianos, la IFC contrató los servicios de Sinclair Knight Merz, una firma consultora con sede en Australia, para elaborar un “estudio de los recursos de piedra caliza en el sudoeste de Vietnam” que “delinearía su uso potencial en la producción de piedra caliza, la conservación de la biodiversidad, la producción forestal (tanto productos derivados de la madera como no derivados de la madera), el turismo, la recarga de aguas freáticas, y otros”, según Vermeulen y Witten.

Han pasado cuatro años y el estudio todavía no está disponible. En respuesta a una solicitud de marzo de 2002, Richard Caines, Coordinador de la IFC para Asia Oriental y el Pacífico, contestó: “Acabamos de recibir apenas un borrador final. Una vez que el informe haya sido revisado y aprobado, nuestra intención es ponerlo a disposición de la opinión pública”.

En junio de 2003, Caines afirmó: “Los distintos temas que retardaron su avance tienen que ver con la selección del equipo y la obtención de las autorizaciones adecuadas para la ejecución del estudio. Fue necesario asegurar estas autorizaciones de los financiadores, la gerencia de la IFC, la gerencia de Holcim y distintos departamentos y comités populares del gobierno vietnamita. Me temo que lograr decisiones de consenso entre estas instituciones no es un proceso rápido”. Agregó que “el informe no ha sido divulgado públicamente”.

Una fuente cercana al estudio informó que el ejército vietnamita ordenó que las montañas de piedra caliza a lo largo de la frontera con Camboya fueran excluidas del estudio de Sinclair Knight Merz. Poco después, el gobierno provincial de Kien Giang se negó a autorizar que se continuara con el estudio.

La IFC está trabajando actualmente con Holcim y la International Crane Foundation en un proyecto titulado “Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad de los humedales de la llanura de Ha Tien”. En 1998, la grulla de cola blanca, especie amenazada, comenzó a usar zonas de pasturas cerca de Hon Chong como sitio de alimentación de inicio de temporada. El proyecto apunta a preservar estas zonas de pasturas.

Por supuesto este proyecto de biodiversidad no afecta de ninguna forma las actividades de explotación de las canteras de Holcim. La IFC y la International Crane Foundation están permitiendo que Holcim adorne sus actividades con cierta fachada verde y ecologista desviando la atención de las canteras de Holcim. Al no insistir en la realización de una EIA adecuada, la IFC está violando las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. Mientras tanto, Holcim continúa extrayendo 4.000 toneladas de piedra caliza por día de las montañas cercanas a Hon Chong. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

OCEANÍA

Papúa Nueva Guinea: Desde Australia con cianuro

La tala indiscriminada ha sido la principal causa del deterioro del bosque tropical húmedo de Papúa Nueva Guinea, fenómeno que el gobierno ha sido incapaz de frenar a pesar de una anunciada moratoria sobre las actividades de las empresas madereras. Desgraciadamente, no es ésta la única actividad que afecta las selvas de ese país. La minería también está provocando importantes impactos a nivel local. Por ejemplo las operaciones de Freeport-Río Tinto en la cuenca del río Ajkwa ha provocado severos efectos sobre el ambiente y el nivel de mercurio en dicho curso de agua aumentó cuatro veces por encima del nivel permitido. Las comunidades locales se oponen fuertemente a este tipo de actividades, así como a los intentos de Freeport de sobornarlos con proyectos de “desarrollo”.

En marzo de 2000 fue denunciado un nuevo caso de contaminación debido a la minería. La responsable es la empresa australiana Dome Resources. Una caja conteniendo 150 kgs de bolitas de cianuro de sodio cayó accidentalmente de un helicóptero propiedad de la compañía, que estaba volando de Port Moresby a la mina de Tolukuma, y terminó en lo profundo de la selva. Si bien la compañía trató de minimizar los potenciales efectos del accidente al anunciar que el 70% de las bolitas ya se habían recuperado, resulta claro que el impacto del aporte de cianuro a la red hidrográfica ha sido muy importante. El profesor Kirpal Singh de la Universidad de Papúa Nueva Guinea advirtió que el cianuro estropea completamente el agua potable, inutilizán-

dola para el consumo y para la vida acuática. Incluso se teme que las comunidades que habitan cerca del lugar del accidente puedan beber del agua envenenada. La totalidad del área de selva será afectada por la presencia de altas concentraciones de este metal pesado en el agua y el suelo.

Dome Resources ha argumentado que es esta la primera vez que sucede un accidente de este tipo en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, un análisis del agua llevado a cabo el año pasado siete kilómetros aguas abajo de la mina de Tolukuma reveló la existencia de altos niveles de metales tóxicos, como cobre, plomo, zinc, mercurio y plata. Estos niveles resultaron ser significativos incluso a 20 kilómetros de distancia de la mina. Geoff Evans, director del Instituto de Política Minera, con sede en Sidney, manifestó claramente que las prácticas de Dome son inaceptables de acuerdo con los estándares australianos. Parece ser que esta empresa nunca oyó hablar del principio de precaución.

Es este un caso más de abuso debido a las actividades de una poderosa empresa extranjera en un país del Sur, que ve las inversiones extranjeras con buenos ojos pero que, al mismo tiempo, se ve en dificultades para ejercer un efectivo control sobre el uso y la conservación de los bosques y del agua. Mientras tanto, son las comunidades locales las que siguen sufriendo las consecuencias de este tipo de prácticas. (Boletín del WRM N° 34, mayo de 2000).

Papúa Nueva Guinea: El poder de las corporaciones mineras

Las operaciones mineras en Papúa Nueva Guinea (PNG) forman parte de la política respaldada por el FMI que abre el país a las inversiones extranjeras para la explotación no sustentable de recursos naturales orientada a la exportación. Los antecedentes graves de actividades mineras incluyen inundaciones de bosques y hogares causadas por el vertido de rocas de desecho y niveles de mercurio en el río Ajkwa cuatro veces superiores al máximo permitido de 0,001 mg/l.

Y ahora, una vez más, el poder de las grandes compañías se hace sentir: la legislación relacionada con la minería (la Ley de Continua-

ción de las Minas en Ok Tedi, asociada al Acuerdo sobre Continuación de Minería y Comunidades), que ha sido avalada por el gobierno de PNG ha generado conmoción en las comunidades ambientales y de derechos humanos. Estos grupos afirman que esto permitirá a BHP y Ok Tedi Mining (OTML) (un consorcio dirigido por la empresa BHP Billiton con sede en Australia) evadir su responsabilidad por los daños ambientales en la provincia occidental de PNG.

Según un resumen proporcionado por Slater & Gordon, una firma legal australiana que presentó una demanda contra la compañía, los contratos le otorgarán al consorcio inmunidad legal irrestricta por la contaminación y destrucción causados hasta ahora y en el futuro por las operaciones de la mina Ok Tedi. La OTML no estará obligada a detener el ingreso de desechos en el sistema del río en el futuro, y tendrá permitido aumentar la cantidad de cobre que se le permite verter al sistema hídrico actualmente.

La nueva legislación eximirá a BHP y a OTML de cualquier responsabilidad en los procedimientos actualmente en curso en la Suprema Corte de Victoria en Australia. Los propietarios de las tierras también perderán sus derechos a exigir el cumplimiento de un acuerdo suscrito en 1996, así como a cualquier derecho legal futuro para demandar a la OTML por daños o catástrofes ambientales.

La Suprema Corte de Victoria amplió una orden provisoria para impedir que la Ok Tedi Mining Ltd hiciera que los propietarios de tierras firmasen los Contratos de Continuación de Minas. El gobierno de PNG sostiene que 138 de los 149 poblados requeridos ya firmaron los contratos, pero se acusa a la OTML de escoger a personas individuales para que firmen en representación de sus poblados. Los Contratos de Continuación de Minas firmados por cualquier integrante de un poblado con o sin autoridad adecuada serían obligatorios para los demás habitantes de ese poblado.

La mina Ok Tedi es considerada como un activo nacional por el Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, Sir Mekere Morauta y el gobierno cree que cerrar la mina devastaría la economía nacional. La mina aporta el 10 por ciento del producto nacional bruto del país y el 20 por ciento del total de exportaciones. La decisión tomada implica entonces que

el gobierno considera que devastar el medio ambiente y las fuentes de sustento de los pobladores locales es un costo “menor” dentro de la economía general.

Pero esos costos son enormes. Según la Fundación de Conservación Australiana (Australian Conservation Foundation), casi 70 kilómetros del río Ok Tedi están “casi biológicamente muertos” y 130 kilómetros de ribera del río han sufrido “degradación grave”. La población de peces ha disminuido entre 50 y 80%, según el propio informe interno de la OTML, mientras que 30.000 propietarios de tierras río abajo perdieron la capacidad de vivir de su propia tierra. Además, un Grupo Científico de Revisión de la OTML identificó la posibilidad de un colapso total de la actividad pesquera.

Gabia Gagarimabu, diputado de South Fly, describe la decisión tomada por el gobierno como una desgracia. “El Proyecto de ley es representativo de la forma en que la BHP ha dictado condiciones al gobierno de PNG desde el mismo momento en que llegó a Papúa Nueva Guinea.” Esta legislación es una prueba (al igual que en muchos otros países), del poder de las compañías mineras transnacionales. (Boletín del WRM N° 54, enero de 2002).

Papúa Nueva Guinea: Derechos de las mujeres socavados por mina de oro de Placer Dome

La isla de Misima está situada en el archipiélago de las Luisiadas en la provincia de Milne Bay, en Papúa Nueva Guinea. La isla tiene 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho en su punto más ancho, y está cubierta por bosque tropical húmedo excepto en la zona costera y al pie de las colinas, donde ha sido desmontado para cultivos o transformado en bosque más abierto.

Con una comunidad de aproximadamente 14.000 habitantes que practican agricultura de subsistencia, la sociedad de Misima está dividida en clanes, y la pertenencia a esos clanes es por vía matrilineal. Tradicionalmente las mujeres heredan y tienen la propiedad de la tierra, aunque los hombres mayores conservan la autoridad sobre algunas áreas. Fue en este contexto que la compañía canadiense Placer Dome inició las actividades de extracción de oro.

En diciembre 1987 se otorgó un contrato especial de minería por 21 años a Placer Pacific (ahora Placer Dome Inc.), y la construcción de la mina comenzó en 1988. Declarada oficialmente abierta en 1989, la mina Misima es una mina de extracción a cielo abierto convencional.

La introducción de la minería en Misima implicó la compra de grandes extensiones de tierra y el reasentamiento de las comunidades que previamente vivían en esos territorios. Los valores sociales cambiaron rápidamente desde 1989, facilitando el quiebre de las estructuras sociales tradicionales y el ensanchamiento de una importante brecha generacional, procesos que produjeron impactos sumamente negativos sobre las mujeres.

Durante el proceso de negociación del reasentamiento, la compañía trató con hombres, excluyendo a las propietarias tradicionales de las tierras: las mujeres. Antes de la aparición de la minería, las mujeres mantenían un estatus relativamente alto y tenían una participación destacada en la vida pública debido a su papel central en la propiedad de la tierra y en la producción de alimentos tanto para los vivos como para las ofrendas a los muertos. A partir de este proceso, su estatus, independencia y papel dentro de la comunidad comenzó a debilitarse.

La minería ha proporcionado en forma directa e indirecta oportunidades de empleo para la gran mayoría de los hombres Misima que viven en el punto oriental de la isla y para un número de Misima "expatriados". Las mujeres Misima vieron sustituida su tradicional base de poder por el poder del dinero, que se puede obtener y administrar sin su participación.

El aumento de la economía monetaria también creó divisiones entre las mujeres. Algunas esposas de trabajadores asalariados emplean a otras mujeres para que trabajen sus huertos, lo que genera distribución de dinero dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo reduce el estatus de esas mujeres frente a otras mujeres Misima.

Muchas mujeres cuyos maridos son trabajadores asalariados ya no mantienen grandes huertos porque los hombres no pueden ayudarlas a hacer las actividades necesarias, especialmente el desmonte de tierras y también porque pueden comprar alimentos con el dinero ga-

nado por los hombres. Sin embargo, las mujeres, especialmente aquellas que no participan en la economía monetaria, están sometidas a presión creciente para mantener esos huertos debido a la reducción de la disponibilidad de árboles proveedores de alimentos como resultado del desmonte extensivo.

El medio ambiente de la isla está claramente contaminado por las operaciones mineras. Los residentes se quejan sobre el gusto y la salud de los peces y los niveles de agua cada vez más bajos de los ríos. Algunas mujeres ya no quieren ir a los ríos a bañarse, lavar ropa o preparar alimentos debido a los bajos niveles del agua y a la decoloración del agua después de la lluvia, lo que consideran una evidencia de contaminación. Las mujeres informan que la calidad del agua es tan mala que ya no pueden beberla. Algunas mujeres sienten que esto significa un riesgo a largo plazo para su salud y la de sus bebés.

El aumento de la disponibilidad de dinero en efectivo ha producido ciertos problemas sociales, incluso el consumo excesivo de alcohol. Como sucede en la mayoría de los lugares del mundo, son las mujeres y los niños quienes deben soportar el impacto del abuso de alcohol.

La respuesta inicial de la compañía al plantearse estos problemas fue emplear un número limitado de mujeres para tareas secretariales, administrativas, de oficina y limpieza, y también apoyar a los grupos y negocios locales de mujeres, asegurando que las mujeres tuvieran representación en comités como los grupos de contacto con el poblado y el Comité de Revisión de Situación del Estudio de Impacto Social (SIS). Pero algunos de estos mecanismos no favorecieron la participación de las mujeres, más allá de la asistencia a reuniones. Tener un lugar en un comité no significa automáticamente que una persona se sienta en condiciones de hablar, de ser escuchada o de influir en los resultados. La participación no incluye automáticamente a aquellos quienes previamente fueron excluidas de tales procesos y es tan participativa como lo deseen quienes dirigen los procesos, o tanto como las involucradas lo exijan. La dominación masculina en el gobierno y entre los representantes de la comunidad Misima también contribuyó a negar en forma efectiva los derechos de las mujeres.

Como sucede a menudo, y a pesar de los esfuerzos para evitarlo, muchos de los costos sociales, culturales y ambientales de una

mina no son visibles hasta que la mina empieza a operar. En este momento los pobladores locales comenzaron a experimentar en carne propia el cambio inesperado en su estilo de vida resultante de la participación súbita en la economía monetaria, la llegada abrupta de personas de afuera contratadas para construir y operar la mina, el daño ambiental debido a los desechos resultantes de la operación, e incluso los desequilibrios de la dieta a medida que los precios de los alimentos se dispararon.

La mina dejará de funcionar en 2005. El cierre planteará nuevos problemas sin precedentes a los pobladores de Misima. El cierre de negocios, la pérdida de empleo, la disminución de alternativas de transporte, la imposibilidad de acceder a alimentos de las tiendas, la pérdida de electricidad y la degradación de edificios e infraestructura son apenas algunos de los factores que deberá enfrentar la comunidad.

Sin embargo, las posibilidades de Misima de volver a sus prácticas tradicionales se ven dificultadas por disputas intergeneracionales y la pérdida de los valores tradicionales. Es muy poco probable que el cambio fundamental del estatus de la mujer y de su relación única con la tierra se pueda revertir y recuperar después del cierre de la mina, con las repercusiones que eso implica para las futuras generaciones. (Boletín del WRM N° 71, junio de 2003).

REFERENCIAS

Para entender la minería: empezando por el principio

- Artículo en base a información obtenida de: “Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria”, http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia_capitulo_1.htm
- “El hombre y la Tierra. La minería de superficie”, http://www.iespana.es/natureduca/hom_mineriasuperf.htm

Minería: Más una maldición que una bendición

- Artículo basado en información obtenida de: Socavando los Bosques, enero de 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links y WRM
- The decade of destruction, <http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm>
- “Scrapping Mining Dependence”, State of the World 2003 (W.W. Norton and Company, New York, 2003), Payal Sampat, enviado por la autora
- Extractive Sectors and the Poor, Michael Ross, octubre de 2001, Oxfam America, correo electrónico: info@oxfamamerica.org, <http://www.oxfamamerica.org/pdfs/eireport.pdf>
- Vulnerable single-commodity-dependent economies, http://www.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_vulnerable96.jpg
- Ciudadanía planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental, 2000, International Federation of Environmental Journalists (IFEJ), correo electrónico: ifej@oln.comlink.apc.org, <http://www.ifej.org>
- “The Mining Curse. The role of mining in ‘underdeveloping’ economies”, Minewatch Asia Pacific/Nostromo Briefing Paper, febrero de 1999, <http://www.minesandcommunities.org/Country/curse.htm>

Impactos ambientales y sociales de la minería

- Artículo elaborado en base a información obtenida de: Socavando los bosques. Enero 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links and WRM, <http://www.wrm.org.uy/publicaciones/mineria.html>
- The decade of destruction, Mines & Communities Website, <http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm>
- Global Mining Snapshot, April 2003; Making a Molehill out of a Mountain, 4 April 2003, Mineral Policy Center, correo electrónico:

- mpc@mineralpolicy.org, <http://www.mineralpolicy.org>
- Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria, http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia/capitulo_1.htm
 - New research on the impact of mining, Oxfam Community Aid Abroad, correo electrónico: enquire@caa.org.au, http://www.caa.org.au/horizons/august_2001/researchmining.html
 - Fool's Gold: Ten Problems with Gold Mining, Project Underground, correo electrónico: project_underground@moles.org, http://www.moles.org/ProjectUnderground/reports/goldpack/fools_gold.html
 - Indigenous Peoples and the Extractive Industries: A Call on the World Bank to Overhaul its Institution, Emily Caruso, Forest Peoples Programme, correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org, <http://forestpeoples.gn.apc.org/index.htm>

Minería con ejércitos mercenarios

- Artículo basado en información obtenida de: "Militarization & Minerals Tour", Project Underground, <http://www.moles.org/ProjectUnderground/mil/intro.shtml>
- "Rio Tinto: practise what you preach!", Down to Earth N° 56, febrero de 2003, <http://dte.gn.apc.org/56rio.htm>

Los impactos de la minería sobre las mujeres

- Artículo basado en información obtenida de: "The globalisation of mining and its impact and challenges for women", Victoria Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation (Indigenous Peoples' International Center for Policy Research and Education), <http://www.twinside.org.sg/title/chal-cn.htm>
- "Women's rights undermined", Ingrid Macdonald.
- "The Polarisation of the People and the State in the Interests of the Political Economy and Women's Struggle to Defend their Existence, a critique of mining policy in Indonesia", Meentje Simatauw
- "Labour, love and loss: Mining and the displacement of women's labour", Kathryn Robinson.
- Tunnel Vision: Women, Mining and Communities, Forum Report, noviembre de 2002, <http://www.caa.org.au/campaigns/mining/tunnelvisionpapers/index.html>
- 'Hablando un lenguaje común' ('Speaking a Common Language'), www.cf.ac.uk/cplan/sacl/

Compañías mineras presionan sobre las áreas protegidas

Por: Forest Peoples Programme, correo electrónico:
info@fppwrm.gn.apc.org

El Banco Mundial debe dejar de promover la minería en tierras indígenas

- Por: Forest Peoples Programme, correo electrónico:
info@fppwrm.gn.apc.org
- El informe completo en inglés y los estudios de caso asociados se pueden obtener en:
http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/Private%20sector/eir_internat_workshop_synthesis_rep_eng_may03.htm.

La Revisión de las Industrias Extractivas exhorta a establecer límites para la financiación de actividades mineras del Banco Mundial

- Artículo basado en información obtenida de “Good News: Recommendations for World Bank Policy Changes”, “World Bank Official Review Advises: Respect Human Rights, Pull Out of Coal and Oil Financing”, Paula Palmer, Global Response, correo electrónico: paula@globalresponse.org, <http://www.globalresponse.org>, enviado por Amazon Alliance, correo electrónico: amazon@amazonalliance.org; <http://www.amazonalliance.org>
- El informe completo “Revisión de las Industrias Extractivas” se puede obtener en <http://www.eireview.org>

ÁFRICA

Africa: “Cuanto más se sabe sobre el oro, menos deslumbra su brillo”

- www.nodirtygold.org
- Artículo basado en información obtenida de: “Africa/Global: New Campaign Targets Dirty Gold”, Pambazuka News 144, correo electrónico: pambazuka-news@pambazuka.org, <http://www.pambazuka.org/index.php?id=20239>
- “No Dirty Gold”, <http://www.nodirtygold.org/home.cfm>
- “Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment”, http://www.nodirtygold.org/dirty_metals_report.cfm

Costa de Marfil: FMI, cacao, café, maderero y minería

- Por: Jason Tockman. "The IMF: Funding Deforestation", American Lands Alliance, noviembre de 2001, correo electrónico: tockman@americanlands.org

Ghana: FMI, minería y maderero

- Por: Jason Tockman, "The IMF: Funding Deforestation", American Lands Alliance, noviembre de 2001, correo electrónico: tockman@americanlands.org

Ghana: El gobierno pone el ultimo clavo en el ataúd de los bosques del país

- Extraído y adaptado de "Golden Greed. Trouble Looms Over Ghana's Forest Reserves", por Mike Anane, correo electrónico: lejcec@ghana.com, enviado por Lambert Okrah, Institute for Cultural Affairs (ICA), correo electrónico: icagh@ghana.com. El documento completo (en inglés) se encuentra disponible en: <http://www.wrm.org.uy/countries/Ghana/Goldengreed.html>

Ghana: Resistencia a la fiebre del oro en las reservas forestales

- Por: Mike Anane, correo electrónico: lejcec@ghana.com

Ghana: El Banco Mundial detrás del escenario del oro

- Artículo basado en información obtenida de: "Newmont Meets Media", Isaac Essel, Accra Mail, <http://allafrica.com/stories/200403030502.html>
- "Newmont Moves In to Open Ghana's Closed Forest Reserves", Charity Bowles, quien trabajó con Amigos de la Tierra-Ghana, en la National Coalition on Mining, enviado por Mike Anane, correo electrónico: lejcec@ghana.com
- "Newmont Boss Presents Straight-Faced Joke to Ghana's President", Allan Lassey, Third World Network, http://twnafrica.org/event_detail.asp?twnID=438
- "Canadian explorer starts drilling at Ghana gold project", Creamer Media (Pty) Ltd, <http://www.engineeringnews.co.za/eng/utilities/search/?show=46618>

Kenia: Gobierno cuestiona proyecto canadiense de minería de titanio

- Artículo basado en información obtenida de: "Titanium mine threatens communities in Kenya", Volumen 4, N° 19, 23 de noviembre de 1999,
http://www.moles.org/ProjectUnderground/drillbits/4_19/4.html
- Hotspots, Volumen 7, número 6, 31 de julio de 2002, Drillbits & Tailings,
http://www.moles.org/ProjectUnderground/drillbits/7_06/hotspots.html
- "Titanium Mine License Eludes Canadian Firm in Kenya", Jennifer Wanjiru, Environment News Service (ENS), "Cancel Titanium Project, Kibaki Gov't Urged", The East African Standard (Nairobi), 2 de enero de 2003, <http://allafrica.com/stories/200301020625.html>

Madagascar: El FMI abre el país a la minería

- Por: Jason Tockman, "The IMF: Funding Deforestation", American Lands Alliance, noviembre de 2001, correo electrónico:
tockman@americanlands.org

Madagascar: Proyecto minero de Rio Tinto avanza... para peor

- Artículo basado en información obtenida de: "Mining giant threatens to scar island paradise", Rory Carroll, The Guardian, 23 de junio de 2003,
<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,982989,00.html>
- "The case against QMM/Rio Tinto in Madagascar", Nostromo Research, London, 12 de noviembre de 2001, informe encargado por Amigos de la Tierra,
<http://www.minesandcommunities.org/Company/foemadagascar2.htm>
- QIT Madagascar Minerals Ilmenite Project,
http://www.hatch.ca/Sustainable_Development/Projects/madagascar-qit_minerals_ilmenite_project.htm
- "Rio Tinto in Madagascar", Rio Tinto homepage,
<http://www.riotinto.com/news/showMediaRelease.asp?id=473>
- "Malagasy President Meets With Colin Powell", VOA 27.05.2003,
<http://www.madagasikara.de/2003/Mai/030527voara8usa.htm>
- Madagascar: World Bank credit will help manage country's mineral resources, IRIN, <http://www.africahome.com/annews/categories/economy/EpVFpukAyEkZvQmzvh.shtml#Author>

República Centroafricana: FMI, madereo y minería

- Por: Jason Tockman. "The IMF: Funding Deforestation", American Lands Alliance, noviembre de 2001, correo electrónico: tockman@americanlands.org

República Democrática del Congo: Teléfonos celulares, destrucción de bosques y muerte

- Artículo basado en información obtenida de: "Supporting the War Economy in the DRC: European Companies and the Coltan Trade" y "European companies and the Coltan Trade: an Update", International Peace Information Service, <http://users.skynet.be/ipis/tnewpubsnl.htm>
- "Basta de matanzas y saqueo en el Congo", Solidarité Europe-Afrique, Bélgica, <http://www2.minorisa.es/inshuti/extracto.htm>
- "La fiebre del coltan: el imperialismo continúa", Ramiro de Altube, Observatorio de Conflictos, correo electrónico: obserflictos@yahoo.com.ar, <http://www.nodo50.org/observatorio/coltan.htm>
- "La fiebre del coltan", Ramón Lobo, El País España, 2/09/2001, <http://www.elpais.es/suplementos/domingo/20010902/1fiebre.html>
- "UN report accuses Western companies of looting Congo", Chris Talbot, 26/10/2002, <http://www.wsws.org/articles/2002/oct2002/cong-o26.shtml>
- "The Trouble With Coltan", Kofi Akosah-Sarpong, <http://www.expotimes.net/issue020116/AAbusiness2.htm>

Senegal: Gobierno limita minería como forma de proteger los bosques

- Extraído de "Government bans quarrying in conservation areas", 14 de julio, IRIN, enviado por ECOTERRA International, Nairobi Node, correo electrónico: NATURAL_FORESTS@ecoterra.net

Sudáfrica: las minas se alimentan de los bosques

- Por: Wally Menne, correo electrónico: plantnet@iafrica.com. Fotos del área minera están disponibles en: <http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/global.html>

Tanzania: Banco Mundial apoya saqueo minero canadiense

- Artículo basado en información obtenida de: "Robbing the Poor to Give to the Rich. Human Rights Abuses and Impoverishment at the

MIGA-Backed Bulyanhulu Gold Mine, Tanzania”, presentación a la Revisión de Industrias Extractivas (EIR) del Banco Mundial, Maputo, Mozambique, 13-17 de enero de 2003,

<http://www.lead.or.tz/active/buly/eir.submission>

- “Tanzanian Attorneys Face Charges of Sediton”, emitido en conjunto con la Environmental Law Alliance Worldwide, Oficina EE.UU., Eugene, Oregon, 17 de mayo de 2002, <http://www.lead.or.tz/about/pr/2002.05.17.sediton.php>, Lawyers’ Environmental Action Team (LEAT), correo electrónico: lead@twiga.com

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica: Resolución esperanzadora para moratoria a minería y petróleo

- Artículo basado en información obtenida de “Minería: rechazado Estudio de Impacto Ambiental ante SETENA. Resolución abre paso a una verdadera moratoria a minería y petróleo”, comunicado enviado por FECON, correo electrónico: feconcr@racsa.co.cr
- Extractos del artículo “Destrucción Ambiental en el Valle de Siria”, Diario La Tribuna, <http://www.latribunahon.com>

Costa Rica: Golfo de Nicoya y agua potable de la región en peligro por minería de oro

- Artículo basado en información obtenida de: “Mentiras ambientales ponen en peligro el agua de Miramar y la vida marina del Golfo de Nicoya,” CEUS, Correo electrónico: soniatorres@racsa.co.cr
- “Costa Rica: minería de oro destruye alta biodiversidad del Golfo de Nicoya,” <http://www.biodiversidadla.org/article/articlestatic/4178/1/7/>
- “Minas de oro amenazan contaminar con cianuro ecosistemas de Costa Rica,” ADITAL, <http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES¬icia=10513>

Honduras: No es oro todo lo que reluce

- Extractos del artículo “Destrucción Ambiental en el Valle de Siria”, *La Tribuna*, <http://www.latribunahon.com>

Honduras: Asesinato de periodista enfrentado a la minería

- Artículo basado en información obtenida de: “Acción Urgente”, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
http://www.caritaspn.org/accionesolidaria/accion_urgente_cofadeh.htm
- “Urgent Action. Journalist Assassinated in Honduras”,
<http://www.ourworldisnotforsale.org/action/17.htm>

Nicaragua: Minera canadiense acusada de derrame de cianuro

- Artículo basado en información obtenida de: “Informe Bonanza”, enviado por el Centro Humboldt, correo electrónico: deslocal@humboldt.org.ni
- “Niños envenenados al ingerir agua”, 21 de enero de 2003, Heberto Jarquín M., *La Prensa*,
<http://www-i.laprensa.com.ni/cronologico/2003/enero/21/nacionales/nacionales-20030121-02.html>
- “Minsa desmiente intoxicación en río Bambina”, 27 de enero de 2003, Heberto Jarquín M./Corresponsal, *La Prensa*,
<http://www-ni.laprensa.com.ni/cronologico/2003/enero/27/nacionales/nacionales-20030127-13.html>

Panamá: Minería, bosques y derechos de los pueblos indígenas

- Artículo basado en información obtenida de: Segura Olman et al. (eds.), “Políticas forestales en Centro América”, San Salvador, 1997; CICAFOC, UNOFOC, UICN, “Comunidades y gestión de bosques en Mesoamérica”, San José de Costa Rica, 2000.
- Por más detalles sobre este tema, ver “Pueblos Indígenas y Minería en Panamá” de Florina López Miró de la Asociación Napguana, en: <http://www.wrm.org.uy/paises/Panama/articulo1.html>
http://www.rainforestweb.org/Rainforest_Regions/North_and_Central_America/Panama/
<http://www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/spanish/kuna.htm>
<http://abiyayala.nativeweb.org/panama/problemas.html>
<http://www.geocities.com/RainForest/4043/TURIS.html>

AMÉRICA DEL SUR

Argentina: Poblaciones y bosques amenazados por empresa minera canadiense

- Artículo basado en información obtenida de Silvana Buján, correo electrónico: ecosil@speedy.com.ar, Informe preparado por RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, <http://www.esquelonline.com/esquel.htm>, <http://www.rebelion.org/ecologia/esquel071102.htm>
- Informe elaborado por la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, puede leerse en: <http://www.wrm.org.uy/paises/Argentina/esquel.html>.
- Informe del WRM sobre empresas mineras canadienses, se encuentra disponible en: <http://www.wrm.org.uy/publicaciones/mineria.html>

Argentina: Pequeña gran victoria contra empresa minera canadiense

- Artículo basado en información enviada por: Gustavo Macayo, correo electrónico: libmacayo@ciudad.com.ar. Por más información sobre el tema ver: <http://www.wrm.org.uy/paises/Argentina/esquel.html>
- <http://www.sospatagonia.netfirms.com>
- <http://www.contralamina.freeservers.com>
- <http://www.esquelonline.com>
- <http://www.geocities.com/proyectolemu/011115a.htm>

Argentina: Ecos de plebiscito contra explotación minera canadiense

- Por: Hernán Scandizzo, correo electrónico: herscan@data54.com

Argentina: Diferentes formas de lucha contra la minería

- Por: Hernán Scandizzo, correo electrónico: herscan@data54.com

Bolivia: Áreas protegidas a disposición de las petroleras

- Artículo basado en información obtenida de: "Proyecto de ley de Areas Protegidas a la medida de las petroleras", 25 de agosto de 2003, comunicado de prensa de FOBOMADE, correo electrónico: comunicacion@fobomade.org.bo

- “Las áreas protegidas afectadas por 24 concesiones petroleras”, El Deber, 26 de junio de 2003, http://www.el-deber.net/20030626/nacional_6.html

Chile: Campaña contra proyecto canadiense de producción de aluminio

- Por: Flavia Liberona, correo electrónico: coordinacion@noalumysa.cl
www.noalumysa.cl

Colombia: Comunidad detiene licencia minera en reserva forestal

- Por: Diego Alejandro Cardona C., Red Juvenil Ambiental Nacional (REDJUAN), Colombia, correo electrónico: decalle@starmedia.com

Colombia: Impactos de la explotación carbonera

- Artículo elaborado en base a información obtenida de: “Reseña histórica de la explotación carbonera en el Caribe Colombiano” por Ignacio Rancel.
- http://www.cerrejoncoal.com/ingles/the_operation/about_us/our_history/
- <http://wbln0018.worldbank.org/IFCExt/spiwebsite1.nsf/0/a8263668130dddb85256d1a007d4e79?OpenDocument>
- <http://www.censat.org/>

Guyana: El impacto de las transnacionales mineras sobre la gente y el ambiente

- Artículo basado en información obtenida de: “Indigenous peoples, land rights and mining in the Upper Mazaruni”, A Report by Upper Mazaruni Amerindian District Council, Amerindian Peoples Association of Guyana, Forest Peoples Programme, Global Law Association, Nijmegen, 2000.
- “Undermining the forests”, FPP-Philippine Indigenous Peoples Links-WRM, January 2000.
- Guía del Mundo 1997/98.

Perú: Bosques y gente amenazados por empresa minera canadiense

- Artículo elaborado en base a información obtenida de: Margarita Vega, correo electrónico: margaritarosavega@yahoo.com
- <http://www.rebellion.org/ecologia/tambogrande020701.htm>

- Forest Peoples Programme, Philippine Indigenous Peoples Link y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. "Socavando los Bosques. La necesidad de controlar las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense", correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org

Venezuela: Plan de gobierno pone en peligro el bosque de Imataca

- Artículo elaborado en base a información obtenida de: "La reserva forestal de Imataca. Un bosque insustituible en peligro de desaparecer", declaración de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana-AMIGRANSA, 16 de octubre, 2003, enviada por Amigransa, correo electrónico: amigransa@cantv.net
- "Abrirán reserva a explotación minera", Humberto Márquez, IPS, publicado en Tierra América, <http://www.tierramerica.net/2003/1018/acentos.shtml>
- Visión global del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la Reserva Forestal Imataca, en: http://www.cvg.com-español-marn-Observaciones_de_Caracas

ASIA

Birmania: Pobreza entre rubíes, zafiros y jade

- Fragmentos extractados de "Capitalizing on Conflict. How Logging and Mining Contribute to Environmental Destruction in Burma", por Earth Rights International with Karen Environmental & Social Action Network, octubre de 2003. El informe completo se puede descargar en el sitio <http://m1e.net/c?11841838-pSMLVzXzp5lzM%40347152-DvtuggLI338vc>

Filipinas: avanza oposición contra refinería de níquel de Sumitomo Corp. en Palawan

- Artículo basado en información obtenida de: "Pueblos indígenas de las Filipinas se oponen a la expansión de una mina de níquel", Drillbits & Tailings, Volumen 7, N° 7, 5 de septiembre de 2002, "Project Underground" cbaldi@moles.org
- "Planned nickel plant in Palawan under fire", Jofelle Tesorio, Inquirer News Service, http://www.inq7.net/reg/2002/jan/28/reg_6-1.htm

- Administrative Order N° 2000,
http://www.psem.ph/download_files/dao-mine%20waste3.pdf

Filipinas: Oposición a política de minería

- Artículo basado en información obtenida de: "Urgent Action - 'fax barrage' on Philippines' National Minerals Policy process", 3 de diciembre de 2003, <http://www.minesandcommunities.org/Action/action50.htm>

India: Las mujeres responden a minería devastadora

- Artículo basado en información obtenida de: "Women and Mining. A resource Kit", abril de 2003, publicado por Delhi Forum, correo electrónico: delforum@vsnl.com
- "The International Network, Women and Mining - An Appeal for Support", 25 de febrero de 2004, Mines & Communities Website, <http://www.minesandcommunities.org/Mineral/women6.htm>

Indonesia: Aumenta la presión de la minería sobre los bosques

- Por: Carolyn Marr, Down to Earth, International Campaign for Ecological Justice in Indonesia, correo electrónico: dte@gn.apc.org, <http://dte.gn.apc.org>
Fuentes: Boletines DTE (53/54, 55 & 57 –
ver: <http://dte.gn.apc.org/news.htm>), www.jatam.org y fuentes de los medios. Para obtener más información sobre la campaña para detener la minería para la protección y conservación de los bosques, visitar el sitio www.jatam.org

Indonesia: Crece la oposición a la minería en áreas protegidas

- Artículo basado en información obtenida de: "Indonesia regional govts, civil society: More speak out for forest protection from mining", 13 de Julio de 2003, declaración de la Coalición en oposición a la minería en áreas protegidas de Indonesia, correo electrónico: inform@mpi.org.au, enviado por Maurizio F. Ferrari, Forest Peoples Programme, correo electrónico: mfferrari@pd.jaring.my, <http://www.forestpeoples.gn.apc.org/>

Laos: La Corporación Financiera Internacional apoya mina de oro australiana

- Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

Tailandia: Comunidades étnicas envenenadas por minas de plomo letales

- Por: Noel Rajesh, correo electrónico: noelrajesh@yahoo.com

Vietnam: Biodiversidad única amenazada por fábrica de cemento financiada por el Banco Mundial

- Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

OCEANÍA

Papúa Nueva Guinea: El poder de las corporaciones mineras

- Artículo basado en información obtenida de: Drillbits & Tailings, volumen 6, número 10, diciembre 30 de 2001 (BHP Billiton Runs From Responsibilities In Papua New Guinea), Project Underground, correo electrónico: cbaldi@moles.org

Papúa Nueva Guinea: Derechos de las mujeres socavados por mina de oro de Placer Dome

- Artículo basado en información obtenida de: "One day rich; community perceptions of the impact of the Placer Dome Gold Mine, Misima Island, Papua New Guinea", Dr Julia Byford, Tunnel Vision: Women, Mining and Communities, Forum Report, noviembre de 2002.
- The Misima mine: An assessment of social and cultural issues and programmes, Allen L. Clark and Jennifer Cook Clark, <http://www.natural-resources.org/minerals/development/docs/pdfs/misimacasesstudy.pdf>